

**Oficio N°01838**

Quito D.M., 20 de abril de 2023

Señor Doctor  
Pablo Saavedra Alessandri  
**SECRETARIO**  
**CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**  
San José, Costa Rica

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho con relación al caso Viteri y otros vs. Ecuador, Ref. CDH-25-2021, y en atención a la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 2023, respecto a su punto resolutivo 14, en virtud del cual se requirió a las partes y a la Comisión que, en los términos del artículo 56 del Reglamento, presenten sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, hasta el 20 de abril de 2023.

En virtud de ese requerimiento, a continuación el Estado presentará sus alegatos finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas dentro del presente caso.

**1. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS Y POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

**1.1. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES**

**1.1.1. Respecto a la declaración del señor Julio Rogelio Viteri Ungaretti.**

En virtud de la resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 2023, la declaración del señor Viteri tenía el siguiente objeto:

i) la alegada vulneración de los derechos a su integridad personal, libertad, libertad de expresión y derechos económicos, sociales y culturales, y derecho al trabajo; ii) sobre el alegado contenido del informe presentado al embajador de Ecuador en Reino Unido; iii) los alegados actos de hostigamiento, amenazas, intimidación y sanciones de que fue presuntamente víctima, lo que provocó que tuviera que abandonar su carrera militar; iv) la alegada detención, y los alegados procesos administrativos y judiciales seguidos en su contra, así como su intervención ante el Congreso Nacional, y iv) sobre los alegados ataques a su domicilio, su salida de Ecuador, proceso de asilo, la separación de la familia y el daño ocasionado.

A continuación, el Estado desvirtuará algunos puntos clave de la declaración del señor Viteri.

Respecto a su primera denuncia relativa al contrato de leasing de las oficinas ocupadas por la Agregaduría en Londres, en su declaración el señor Viteri refirió lo siguiente:

[Hugo Cahueñas] Estimado Rogelio, podría identificar los hechos relacionados con el contrato de leasing y como lo informo a la armada nacional.

[Rogelio Viteri] El momento que llevo y recibo el cargo en la sede de lo que era la agregaduría Naval, que era un departamento en una zona Residencial muy antigua de Londres, separada de la embajada, encontré de que el leasing era un leasing sobre un leasing y que había una estafa a los intereses de la institución, y eso lo reporté. Porque en mi análisis, y en mi cálculo, dije “hemos venido pagando diez años, con lo que hemos pagado diez años podíamos haber comprado una sede utilizando el estatus diplomático y teníamos un sitio propio y que no teníamos que depender de nadie”. **Entonces informé, pero no hubo ninguna acción, todo lo contrario, con el tiempo me dijeron que no, que yo tenía que someterme a seguir con ese leasing, no sé por qué.** [lo resaltado me pertenece]

Es cierto que el señor Viteri denunció irregularidades con relación al contrato de leasing del departamento ocupado por la Agregaduría Naval en Londres. El 9 de julio de 2001, el señor Viteri suscribió el oficio N°AGNARU-SEC-277-O, dirigido al Comandante General de Marina, el Jefe del Estado Mayor de la Armada, el Inspector General de la Armada, el Director General de Finanzas de la Armada y el Gerente General de la

empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), sobre ese asunto<sup>1</sup>. No obstante, el señor Viteri pretende que no se realizó ninguna acción a raíz de su denuncia, y que la institución militar le habría ordenado “seguir con ese leasing”, afirmaciones que son absolutamente ajenas a la realidad fáctica.

Contrario a lo afirmado por el señor Viteri en su declaración ante la Corte IDH, mediante oficio No. ESMAAR-ASI-001-R del 30 de agosto de 2001, [REDACTED], Jefe de Estado Mayor de la Armada, ordenó que no se renueve el contrato de leasing de las oficinas de la Agregaduría, y que se busque otro inmueble para su funcionamiento:

1. Considerando que el arrendamiento (leasing) [sic] de las oficinas actuales caduca en el mes de febrero del 2002 y siendo decisión del Comando General dar por terminado el mismo, se dispone lo siguiente: a) en cumplimiento al lit. c) de la resolución No. 024/2000 del CONALM [...], buscar un inmueble adecuado para el funcionamiento de las oficinas de la Agregaduría bajo una de las siguientes modalidades. 1. Arrendamiento, 2. Leasing [sic] directo sin intermediarios o 3. Compra [...]
2. Sírvase remitir en el menor tiempo, las ofertas de los inmuebles con el análisis y recomendaciones, así como informar las implicaciones legales y administrativas que demanden.”<sup>2</sup>

El oficio antes citado fue dirigido al señor Viteri, encargándole expresamente de la búsqueda de otro inmueble para instalar las oficinas de la Agregaduría, al anticipar el vencimiento próximo del contrato que había sido objeto de su denuncia en julio de 2001.

A pesar de ello, en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Estado durante la audiencia llevada ante la Corte, el señor Viteri expuso que:

[María Fernanda Álvarez] Señor Viteri, en todo caso tenemos claro que luego de las denuncias que Usted presentó respecto al leasing específicamente, la disposición no fue renovar ese leasing en los mismos términos, sino dar por terminado ese contrato y se le dispuso a Usted buscar otras opciones.

[Rogelio Viteri] No se terminó el contrato siguió y siguieron ocupando la misma oficina, es decir, no se ejecutó mi recomendación.

<sup>1</sup> Oficio N°AGNARU-SEC-277-O de 9 de julio de 2001, suscrito por el señor Viteri.

<sup>2</sup> ANEXO 1. Oficio No. ESMAAR-ASI-001-R del 30 de agosto de 2001, [REDACTED], Jefe de Estado Mayor de la Armada, dirigido al señor Rogelio Viteri, agregado naval.

Contrario a la creencia del señor Viteri, la agregaduría no siguió en el mismo inmueble.<sup>3</sup> Las oficinas de la Agregaduría funcionaron en el inmueble ubicado en 50 Montagu Square en Londres de febrero de 1992 hasta febrero de 2002, con un contrato de leasing. El 13 de marzo del año 2002, se firmó un contrato de arrendamiento, instalando las oficinas de la Agregaduría en Londres en un nuevo inmueble ubicado en 37 North End House, Fitzjames Avenue.<sup>4</sup> Es decir, la recomendación del señor Viteri de cambiar de oficinas si fue acatada.

Es más, a raíz de la denuncia del señor Viteri, la Inspectoría General de la Armada investigó los hechos denunciados por el señor Viteri respecto al contrato de leasing<sup>5</sup>.

Por lo tanto, no es cierto que las autoridades militares no tomaron medidas después de su denuncia del contrato de leasing, y tampoco es cierto que las autoridades militares le ordenaron seguir con el contrato litigioso. Resulta inentendible que el señor Viteri declare falsedades a pesar de encontrarse bajo juramento, ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación que debe ser tomada en cuenta por la Corte al apreciar la credibilidad del señor Viteri y sus alegaciones.

En su declaración, el señor Viteri también alega que no habría recibido ningún fondo para regresar al Ecuador:

[Hugo Cahueñas] Antes del asilo político, cuando ustedes regresaron, ¿Usted recibió pago luego de terminar su misión en Reino Unido?

[Rogelio Viteri] Absolutamente ningún pago, yo tuve que regresar al Ecuador con fondos, porque me **negaron el pago de pasajes** y el movimiento de homenaje al terminar la función. [Lo resaltado me pertenece]

La versión del señor Viteri, cuando le consulta su abogado, es que no recibió absolutamente ningún pago. Sin embargo, minutos más tardes, al contestar una pregunta

<sup>3</sup> ANEXO 2. Oficio No. CCFFAA-AGR-ING-2023-0047-O de 17 de abril de 2023, dirigido al Comandante General de la Fuerza Naval, [REDACTED], suscrito por el Capitán de Navío Representante Permanente Alterno ante la OMI, [REDACTED].

<sup>4</sup> ANEXO 3. Contrato de arrendamiento de 13 de marzo de 2002.

<sup>5</sup> Oficio INSGAR-JUR-010-O de 19 de octubre de 2001 suscrito por el Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, Inspectoría General de la Armada.

del Vicepresidente de la Corte IDH, el juez Eduardo Ferrer Mac Gregor, el señor Viteri dio una versión distinta:

[Vicepresidente Eduardo Ferrer Mac Gregor] ¿Y respecto a todos los haberes laborales, todas sus prestaciones, todo lo que usted durante los años trabajados, se le pagó todo lo que corresponde?

[Rogelio Viteri] Cuando regresé al Ecuador me entregaron, me habían descontado hasta del aire que había respirado, me entregaron para regresar yo y mi familia y el menaje que teníamos como familia 1200 dólares. Con 1200 dólares, yo no compraba ni siquiera un pasaje para regresar al Ecuador [...].

Al respecto, consta de su expediente militar que el señor Viteri obtuvo un reembolso de los pasajes comprados en la aerolínea Iberia, por su viaje de retorno al Ecuador del 27 de enero de 2002. Conforme a lo indicado en el Oficio COGMAR-JEF-056-0 de 29 de mayo de 2002, dirigido al señor Viteri y suscrito por el Comandante General de Marina, se giró el **monto de 2.811 dólares** por concepto de “pasajes de retorno a país a favor del Sr. CPNV-EM Rogelio Viteri y Familia.”<sup>6</sup> Este documento que el Estado adjunta desmiente nuevamente el relato desarrollado por el señor Viteri, que se encuentra plagado de inexactitudes.

Además, el señor Viteri pudo importar el menaje de casa como funcionario diplomático, es decir con exoneración total de impuestos, tasas y gravámenes, en virtud de la Ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas consulares y de los organismos internacionales.

Por otro lado, en su declaración ante la Corte IDH, el señor Viteri alegó que la protección policial brindada a partir de febrero de 2002 solo habría durado por un mes:

[Hugo Cahueñas] ¿Cuánto tiempo recibieron protección?

[Rogelio Viteri] Es una protección mínima, más o menos un mes, y luego desapareció.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> ANEXO 4. Oficio COGMAR-JEF-056-0 de 29 de mayo de 2002, dirigido al señor Viteri y suscrito por el Comandante General de Marina, y anexos.

<sup>7</sup> Audiencia pública ante la Corte IDH, de 20 de marzo de 2023.



Oficio N°01838

Página 6

Por su parte, en su declaración ante fedatario público, la señora Alarcón declaró que:

“Conté con el acompañamiento policial por un par de días [...]”<sup>8</sup>

Nuevamente, los dichos del señor Viteri y la señora Alarcón son alejados de la realidad.

El 11 de febrero de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado su decisión de otorgar las medidas de protección solicitadas por el señor Viteri<sup>9</sup>. Mediante Oficio N°069 de 14 de febrero de 2002, la Procuraduría General del Estado transmitió la nota de la CIDH al Comandante General de la Policía Nacional, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares.<sup>10</sup>

Mediante Oficio No. 0239-GIR-PN de 18 de febrero de 2002, el Comandante del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional “[REDACTED]” informó al Procurador General del Estado lo siguiente:

“[...] se dispuso a un señor Oficial y cuatro señores Policías tanto en el GIR-Quito como en el GIR-Guaya, para que brinden protección y seguridad al señor Cap. de Navío Rogelio Viteri y a su familia.”<sup>11</sup>

Por medio del Oficio No. 2002-1444-CG de 18 de septiembre de 2002, el Comandante General de la Policía Nacional transmitió a la Procuraduría General del Estado<sup>12</sup> un informe en torno a la seguridad brindada al señor Viteri:

“a) El Grupo de Intervención y Rescate del IV Distrito de la PP.NN. empieza a brindar protección y seguridad al Sr. Cap. Rogelio Viteri desde el 13 de febrero del 2002, hasta el 07 de Junio del 2002, fecha en la cual viajó a la ciudad de Quito, en uso de vacaciones.

b) Se le asignaron 2 Srs. Oficiales y 4 de Personal, en un vehículo de esta Unidad para su protección, durante todos los desplazamientos en esta ciudad. [...]”<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Declaración de la señora Alarcón ante fedatario público.

<sup>9</sup> Nota de 11 de febrero de 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

<sup>10</sup> Oficio N°069 de 14 de febrero de 2002, suscrito por el Procurador General del Estado dirigido al Comandante General de la Policía Nacional.

<sup>11</sup> Oficio 0239-GIR-PN de 18 de febrero de 2002, suscrito por el Comandante del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional “[REDACTED]” dirigido al Procurador General del Estado.

<sup>12</sup> Oficio No. 2002-1444-CG de 18 de septiembre de 2002, suscrito por el Comandante General de la Policía Nacional dirigido a la Procuraduría General del Estado.

<sup>13</sup> Informe de 5 de julio de 2002, suscrito por el Capitán de Policía [REDACTED].

Además, en su testimonio ante fedatario público, el señor Wilfrido Recalde declaró que, en el período de tres meses durante el cual acompañó al señor Viteri, estuvo con presencia policial:

Recuerdo que pasábamos haciéndole compañía y seguridad, de igual manera apoyándolo psicológicamente, ya que cuando se le presentó ese problema estuvimos un grupo de Infantes de Marina en Servicio Pasivo, lo acompañamos en el momento oscuro y negro de su carrera militar, también era parte de su seguridad tres policías y un Oficial del GIR (Grupo de Intervención y Rescate) de la Policía Nacional, ya que si existía la confianza de la policía por la situación que estaba ocurriendo con Rogelio Viteri, pero de igual manera estuvimos junto a él [sic] por la Amistad Consideración, Aprecio y la Lealtad [sic]. Estuvimos de dos a tres meses junto a él, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche que lo dejábamos en su dormitorio ya descansando, estábamos alrededor de ocho a nueve personas que durante el día lo acompañábamos. En la tarde después del Forty (terminación de los trabajos), salíamos con él al trote hacia el Cerro del Carmen y regresábamos al reparto, lo acompañaba un policía del GIR [...] <sup>14</sup>

El propio testigo llamado por los representantes de las presuntas víctimas relata las actividades del señor Viteri, junto a los miembros de la Policía Nacional que le acompañaban para asegurar su protección, durante un periodo de tres meses. Es decir que, según la declaración del señor Recalde, durante todo el periodo de 3 meses en el cual él estuvo cerca del señor Viteri, se encontraban también policías y oficiales del Grupo de Intervención y Rescate para garantizar su seguridad.

Ese testimonio, junto con los reportes de las autoridades nacionales, contradicen categóricamente la declaración rendida por el señor Viteri durante la audiencia, respecto a la duración de la protección policial que le fue brindada.

El Estado aclara entonces que la protección policial del señor Viteri y su familia inició en febrero de 2002, con las medidas cautelares y cesó únicamente porque el señor Viteri salió del país el 10 de junio de 2002, es decir que duró 4 meses, y no un mes como lo pretende el señor Viteri.

---

<sup>14</sup> Declaración ante notario, el 13 de marzo de 2023. Wilfrido José Recalde Ruiz.



Oficio N°01838

Página 8

El Estado aclara que desde el momento en el cual la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor, y hasta el día que salió del país (de febrero a junio de 2002), la protección policial fue continúa y nunca se interrumpió. La protección cesó el día que el señor Viteri y su esposa salieron del Ecuador, para establecer su residencia en el extranjero. El Estado recuerda que las medidas cautelares fueron otorgadas por la CIDH por un periodo de 6 meses,<sup>15</sup> es decir hasta el 11 de agosto de 2002, y quedaron sin efecto, a partir del 11 de junio de 2002, tal como lo señaló la CIDH en su Informe No. 36/15<sup>16</sup>, debido a la salida del Ecuador del señor Viteri y su familia. Al declarar que dichas medidas cesaron por “orden superior”, el señor Viteri emite una afirmación sin sustento alguno, que es ajena a la realidad.

### **1.1.2. Respecto a la declaración del señor Wilfredo José Recalde Ruiz.**

En virtud de la resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 2023, la declaración del señor Recalde tenía el siguiente objeto:

lo que alega escuchó junto a la habitación de Julio Rogelio Viteri Ungaretti respecto de los presuntos castigos a los que habría sido sometido, y las alegadas acciones que emprendieron para protegerlo.

De ese titulado se entiende que el señor Recalde habría sido un testigo directo de los alegados malos tratos durante los arrestos de rigor a los cuales fue sometido. Se presumía entonces que el señor Recalde iba a declarar sobre lo que escuchó personalmente, es decir los castigos. Sin embargo, la declaración del señor Recalde en la materia se limita a lo siguiente:

Después de su jornada de trabajo nos sentábamos a conversar e inclusive lo acompañábamos a su dormitorio que quedaba en la parte alta del edificio, el cual

---

<sup>15</sup> CIDH. Nota de 11 de febrero de 2002. Solicitud de Medidas Cautelares Las presentes medidas cautelares tendrán duración de seis meses. Transcurrido dicho término y oídas las observaciones de las partes, la Comisión decidirá si es procedente prolongar las medidas o levantarlas.

<sup>16</sup> CIDH, Informe de admisibilidad No. 36/15: “Tras la salida del país del peticionario y sus familiares protegidos por las medidas y la solicitud de asilo a Reino Unido en junio de 2002, dichas medidas cautelares quedaron sin efecto.”

no era lo indicado, ya que no reunía las condiciones necesarias para su jerarquía como Oficial de la Armada y él indicaba que cuando regresó de Inglaterra llegó a la ciudad de Quito a presentarse antes [sic] sus superiores, enseguida lo encerraron en un calabozo donde lo propinaban severos castigo [sic] e inclusive no le daban de comer, lo insultaban le deseaban lo peor del mundo la muerte [...]<sup>17</sup>

Lo que el señor Recalde reporta aquí es el relato contado por el señor Viteri. El señor Recalde no es de ninguna forma un testigo de los supuestos castigos que el señor Viteri alega haber sufrido durante su detención, por lo que su declaración en la materia deberá ser desecheda.

## 1.2. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LA CIDH

En virtud de la resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 21 de febrero de 2023, el peritaje de la señora Vivian Newman Pont tenía el siguiente objeto:

i) la relación entre el derecho a buscar, recibir y difundir información, la lucha contra la corrupción y la protección del debate sobre asuntos de alto interés público; ii) el derecho a la libertad de expresión de personas que, en razón de su empleo, labor que desempeñan o posición institucional adviertan y expongan irregularidades, hechos de corrupción, mala administración, violación de derechos humanos, violaciones del derecho humanitario y otros intereses públicos gravemente afectados; iii) la aplicación e interpretación de los requisitos estrictos para establecer responsabilidades ulteriores en escenarios como el descrito; iv) las medidas de protección que los Estados deben adoptar en favor de dichas personas (*whistleblowers*), a la necesidad de establecer marcos regulatorios y mecanismos adecuados y efectivos que les permita denunciar hechos como los descritos en el Informe de Fondo; mecanismos que los protejan de represalias, así como a la protección de reporte seguro incluso al interior de las Fuerzas Armadas; v) otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado, y vi) para ejemplificar el desarrollo de su peritaje se referirá a los hechos del caso.

Como se pudo apreciar en su declaración, la evaluación realizada por la señora Newman se limitó únicamente a los elementos fácticos planteados por el señor Viteri, ignorando por completo el contraste aportado por el Estado, y los documentos probatorios que constan dentro del expediente interamericano.

---

<sup>17</sup> Declaración del señor Wilfrido Recalde ante Fedatario público.

Así, respecto a las supuestas responsabilidades ulteriores impuestas al señor Viteri, la señora perita eludió los siguientes puntos claves:

- la sentencia del Tribunal Constitucional mediante la cual se cancelaron los efectos de las sanciones disciplinarias,
- la normativa actual implementada en el Ecuador a favor de los denunciantes de corrupción,
- las sanciones impuestas a los altos mandos militares a raíz de la denuncia del señor Viteri;
- las medidas de investigación y judicialización del caso de corrupción denunciado por el señor Viteri;
- el reporte de la opinión pública ecuatoriana y de los medios de comunicación rotundamente a favor del señor Viteri y de sus acciones.

Considerando lo anterior, el Estado solicita a esta Honorable Corte que las conclusiones de la señora Newman sean evaluadas a la luz de esas omisiones, que traducen indudablemente un sesgo en su análisis de la información que le fue proporcionada para realizar su dictamen pericial.

## **2. ALEGATOS FINALES**

### **2.1. ANTECEDENTES FÁCTICOS.**

En el año 2001, el señor Rogelio Viteri Ungaretti tenía el grado de capitán de navío y desempeñaba el cargo de Agregado Naval y de Defensa Militar en la Embajada de Ecuador en Londres, en el Reino Unido, y representante permanente del Ecuador ante la Organización Marítima Internacional (OMI)<sup>18</sup>, desde el mes de agosto de 2000.

En el contexto de dichas funciones, el 9 de julio de 2001, el señor Viteri suscribió el oficio N° AGNARU-SEC-277-O, dirigido al Comandante General de Marina, el Jefe del Estado

---

<sup>18</sup> Orden General Ministerial N° 109 del 11 de julio de 2000: Nombramiento del Capitán de Navío Rogelio Viteri Ungaretti, a partir del 18 de agosto de 2000, como Agregado de Defensa ante el Reino Unido y representante Permanente del país ante la OMI.

Mayor de la Armada, el Inspector General de la Armada, el Director General de Finanzas de la Armada y el Gerente General de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), en el cual describió irregularidades con relación a un contrato de leasing del departamento ocupado por la Agregaduría Naval en Londres<sup>19</sup>.

El 31 de octubre de 2001, el Capitán de Navío Raúl Samaniego solicitó que se disponga una sanción en contra del señor Viteri, por insubordinación, al considerar que el “hecho de expresar estos juicios de valor negativos, ante tantos destinatarios de información, representa una campaña de descrédito y desprestigio”.<sup>20</sup> En consecuencia, el 13 de noviembre de 2001, mediante el oficio N°COGMAR-DEJ-014-C suscrito por [REDACTED], Almirante Comandante General de Marina, el señor Viteri fue notificado con una sanción en su contra de 3 días de arresto de rigor<sup>21</sup>, la cual tenía que ser cumplida a su retorno al Ecuador; tal fue el caso a partir del 5 de abril de 2002<sup>22</sup>.

El 8 de noviembre de 2001, el señor Viteri Ungaretti dirigió un oficio al Embajador del Ecuador en el Reino Unido, a fin de poner en su conocimiento supuestas irregularidades respecto a un contrato de leasing y una contratación mediante concurso público<sup>23</sup>.

El 26 de noviembre de 2001, el señor Viteri Ungaretti fue convocado para presentarse ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas<sup>24</sup>.

El 5 de diciembre de 2001, se celebró el Consejo de Disciplina presidido por [REDACTED], General de brigada, durante el cual se pronunció la pena de 15 días de arresto

<sup>19</sup> Oficio N°AGNARU-SEC-277-O de 9 de julio de 2001, suscrito por el señor Viteri.

<sup>20</sup> Oficio N°2001-011-CPNV-RESG-C, de 31 de octubre de 2001, suscrito por CPNV-EMC [REDACTED], dirigido al Comandante General de Marina.

<sup>21</sup> Reglamento de Disciplina Militar, emitido el 7 de agosto de 1998, mediante Acuerdo ministerial No. 831, por el entonces ministro de Defensa Nacional, [REDACTED] y el entonces Subsecretario de Defensa Nacional, [REDACTED], Artículo 72 b).

<sup>22</sup> Oficio N°COGMAR-DEJ-014-C de 13 de noviembre de 2001, suscrito por el Comandante General de Marina, dirigido a CPNV-EM Rogelio Viteri Ungaretti.

<sup>23</sup> Oficio N°AGNARU-008-C de 8 de noviembre de 2001, suscrito por el Agregado Naval en el Reino Unido, Rogelio Viteri Ungaretti, dirigido al Embajador ante el Reino Unido.

<sup>24</sup> Telegrama de 26 de noviembre de 2001, suscrito por [REDACTED] de la Brigada Directo de Inteligencia del CC.FF.AA.

de rigor<sup>25</sup> en contra del señor Viteri Ungaretti por insubordinación e incumplimiento de los deberes y obligaciones militares, sanción que se cumplió de inmediato.<sup>26</sup>

El 12 de diciembre de 2001, el Consejo de Oficiales Almirantes pronunció el cese de funciones del señor Viteri como agregado naval ante la embajada del Ecuador en Londres, considerando que el desempeño de dichas funciones era incompatible con las faltas disciplinarias constatadas, por lo que se le concedió un plazo de 8 días para entregar sus funciones a partir de su regreso a Londres<sup>27</sup>, lo que se cumplió el 21 de diciembre del mismo año.

El 12 de diciembre de 2001, el señor Viteri fue llamado a declarar ante la Contraloría General del Estado, el 13 de diciembre ante la Comisión Fiscalizadora del Congreso Nacional, el 18 de diciembre ante la Comisión Cívica Anticorrupción, y el 19 de diciembre ante el Congreso Nacional nuevamente.

El 13 de diciembre de 2001, el recurso de hábeas corpus interpuesto por los abogados del señor Viteri fue rechazado por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, considerando que el arresto disciplinario no vulneraba, como tal, las disposiciones constitucionales y legales<sup>28</sup>.

El 27 de diciembre de 2001, el señor Viteri, representado por sus abogados, interpuso un recurso ante el Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval en contra de la decisión del Consejo de Disciplina de 5 de diciembre de 2001, mediante la cual se le impuso 15 días de arresto de rigor, para que la sanción disciplinaria no se registre en su hoja de vida militar<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> En virtud del artículo 75; artículo 46 b), d), h); artículo 52 h), y artículo 72 a) del Reglamento de Disciplina Militar.

<sup>26</sup> Acta del Consejo de Disciplina de 5 de diciembre de 2001.

<sup>27</sup> Oficio N°CONALM-SEC-044-C de 17 de diciembre de 2001, suscrito por el Secretario del Consejo de Oficiales Almirantes, dirigido a CPNV-EM Rogelio Viteri Ungaretti.

<sup>28</sup> Resolución de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, de 13 de diciembre de 2001.

<sup>29</sup> Petición de 27 de diciembre de 2001, suscrita por [REDACTED], dirigida al Presidente del Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval.

Mediante Decreto Presidencial No. 2197 de 27 de diciembre de 2001, el señor Viteri se incorporó a las Fuerzas Armadas permanentes en consecuencia del cese de sus funciones anteriores<sup>30</sup>.

El 3 de enero de 2002, la CIDH recibió la petición inicial presentada por el señor Viteri, conjuntamente con una solicitud de medidas cautelares, las cuales fueron concedidas el 11 de febrero del mismo año<sup>31</sup>.

El 8 de febrero de 2002, el señor Viteri fue sancionado por 5 días de arresto de rigor<sup>32</sup>, por la publicación en la prensa de declaraciones relacionadas con su servicio, sanción que fue cumplida a partir del 13 de febrero de 2002<sup>33</sup>. La conducta sancionada ocurrió a pesar de que el señor Viteri había recibido anteriormente un oficio suscrito por el Contralmirante Comandante [REDACTED], el 31 de enero de 2002<sup>34</sup>, recordándole su obligación, como militar en servicio activo, de solicitar una autorización del Comandante General de Fuerza previamente a hacer declaraciones en la prensa, de conformidad con las disposiciones reglamentarias<sup>35</sup>.

En virtud de lo anterior relatado, el Estado aclara que el señor Viteri fue sancionado únicamente con los tres arrestos de rigor antes citados:

---

<sup>30</sup> Decreto Presidencial N° 2197 suscrito por Gustavo Noboa, el 27 de diciembre de 2001. En cumplimiento del Decreto No. 2197, el 16 de enero de 2002, se emitió la orden general N° 002 para la incorporación del señor Capitán de Navío Viteri a las FFAA permanentes por cese de funciones.

<sup>31</sup> Petición inicial ante la CIDH de 3 de enero de 2002

<sup>32</sup> Reglamento de Disciplina Militar, Artículo 45 literal k) y artículo 72.

<sup>33</sup> Oficio N° COOPNA-CDO-003-C de 8 febrero de 2002, suscrito por [REDACTED], Contralmirante Comandante.

<sup>34</sup> Oficio N° COOPNA-CDO-002-C de 31 de enero de 2002, suscrito por [REDACTED], Contralmirante Comandante

<sup>35</sup> Artículo 10 Reglamento de Disciplina Militar de 7 de agosto de 1998: *“Es obligación de todo superior prevenir la consumación de faltas disciplinarias; en consecuencias, deberá ejercer constante vigilancia sobre la conducta y comportamiento de sus subordinados dentro y fuera de la Institución Armada, para mantener su prestigio y disciplina.”* Artículo 29 del Reglamento de Disciplina Militar: *“cualquier militar puede hacer publicaciones de prensa, radio, televisión o en otro medio de comunicación, previa autorización del Comandante General de la Fuerza, observando las prescripciones que se establecen en los artículos siguientes.”*

- El arresto de rigor de 3 días, impuesto mediante oficio notificado el 13 de noviembre de 2001, y cumplido a partir del 5 de abril de 2002;
- El arresto de rigor de 15 días, impuesto mediante decisión del 5 de diciembre de 2001, y cumplido inmediatamente;
- El arresto de rigor de 5 días, impuesto mediante decisión del 8 de febrero de 2002, y cumplido a partir del 13 de febrero de 2002.

Esas tres sanciones corresponden a tres actuaciones distintas. Contrario a lo señalado por los representantes de las presuntas víctimas, y como se desprende de la hoja de vida militar del señor Viteri, no hay registro ni evidencia alguna de que haya existido un cuarto arresto de rigor<sup>36</sup>, el cual nunca fue referido por el señor Viteri ante las autoridades judiciales nacionales<sup>37</sup>, ni ante la CIDH dentro del presente proceso.

El 19 de febrero de 2002, el Consejo de Oficiales Superiores se declaró incompetente para conocer el recurso interpuesto en contra de la resolución de 5 de diciembre del Consejo de disciplina, mediante la cual se le impuso el arresto de rigor de 15 días, por lo que la solicitud del señor Viteri fue considerada improcedente y archivada<sup>38</sup>.

### **Proceso judicial**

El 19 de marzo de 2002, el señor Viteri interpuso un amparo constitucional, que fue conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En su demanda, el accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales, respecto a los siguientes actos emitidos por la institución militar:

“1.- La resolución del Consejo de disciplina por la que se me impuso el arresto de rigor de quince días en la sesión ordinaria del 5 de diciembre del año 2001.

---

<sup>36</sup> Libreta de vida naval de CPNV Viteri Ungaretti Julio Rogelio, emitida por la Dirección General del Talento Humano de la Armada del Ecuador, reporte de 1 de diciembre de 2021.

<sup>37</sup> Se desprende de la demanda de recurso de amparo constitucional, presentado ante la jurisdicción contencioso administrativa el 11 de marzo de 2002, suscrito por Rogelio Viteri, y sus abogados, que las pretensiones del accionante refieren únicamente los tres arrestos de rigor detallados.

<sup>38</sup> Resolución del Consejo de Oficiales Superiores, de 19 de febrero de 2002.

2.- La resolución del Comandante de Operaciones Navales y Jefe de la Primera Zona Naval por la que se me impuso la sanción de cinco días de arresto de rigor, comunicada mediante Oficio N° COOPNA-CDO-003-C, del 08 de febrero del 2002.

3.- La Resolución del Comandante General de Marina por la que se me impuso la sanción de tres días de arresto de rigor, comunicada mediante Oficio N° COGMAR-DFL-014-C del 13 de noviembre del 2001.

4.- La Resolución del Consejo de Oficiales Almirantes por la que se resolvió “cesar en las funciones de Agregado Naval ante la embajada del Ecuador en el Reino Unido y representante ante la OMI al Sr. CPNV-EM Rogelio Viteri Ungarreti” comunicada con Oficio N° CONALM-SEC-044-C del 17 de diciembre del 2001.

5.- La Resolución por la que luego de haberseme incluido en la nómina de oficiales que realizaran el XXI Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto en el INAGUE se ha decidido no considerarme en esa nómina y se ha postergado mi asistencia a ese Curso “para otra oportunidad como consta en el Oficio N° DIGPER-DIR-084-0 del 08 de febrero del 2002.

Solicito además se ordene que se borre o elimine de mi libro de vida las sanciones que se declaren sin efecto de acuerdo con la presente petición.”<sup>39</sup>

El recurso de amparo fue negado el 2 de abril de 2002 por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, considerando que la acumulación de varios actos impugnados era indebida, dado que la acción de amparo tenía que ser interpuesta en contra de un solo acto administrativo, en virtud de las disposiciones constitucionales relativas a dicho recurso<sup>40</sup>.

El 8 de abril de 2002, el señor Viteri interpuso un recurso de apelación ante Tribunal Constitucional en contra de esta resolución<sup>41</sup>.

Cabe indicar que, previamente a la resolución del recurso de apelación por el Tribunal Constitucional, el señor Viteri decidió salir del Ecuador el 10 de junio de 2002, como lo indica el propio peticionario. El 8 de julio de 2002, Ana Lucía Alarcón Gallegos, en su calidad de apoderada del señor Viteri Ungarreti, solicitó que se pronuncie su

<sup>39</sup> Recurso de amparo constitucional, de 11 de marzo de 2002, suscrito por Rogelio Viteri, y sus abogados.

<sup>40</sup> Resolución de la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de 2 de abril de 2002.

<sup>41</sup> Recurso de apelación suscrito por los abogados del señor Viteri, registrado por el Secretario Relator del Tribunal el 8 de abril de 2002.

disponibilidad previamente a la baja de la institución a partir del 9 de julio de 2002, fecha en la que terminaba la licencia que se le había concedido<sup>42</sup>, por lo que el señor Viteri fue colocado en una situación de disponibilidad desde el 9 de julio de 2002, mediante el Decreto ejecutivo N°2917, emitido el 19 de julio de 2002<sup>43</sup>.

El 28 de agosto de 2002, mediante la resolución N° 239-2002-RA, la Primera Sala del Tribunal Constitucional resolvió el recurso de apelación parcialmente a favor del accionante, al considerar que:

[...] los arrestos de rigor impuestos al Capitán Rogelio Viteri son ilegítimos por cuanto contravienen el ordenamiento jurídico vigente, violan derechos subjetivos plasmados en la normativa del debido proceso recogida en el Art. 24 de la Constitución Política del Estado, principalmente el que corresponde al numeral 10 que dice que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento; y, ocasionan un daño grave al accionante puesto que los arrestos en su contra le significa disminuir el puntaje necesario para alcanzar su calificación al grado mayor, daño que no se produciría de manera individual por cada arresto sino solamente de manera conjunta porque sólo así existe acumulación de disminución del puntaje que anularía toda posibilidad de ascenso que es la aspiración de toda persona que ha emprendido en la carrera militar, siendo un motivo más por el que se hubiera tornado un sin sentido que interponga una acción de amparo por cada acto impugnado [...]<sup>44</sup>

En aplicación de la normativa constitucional vigente, el Tribunal Constitucional ordenó revocar la resolución venida en grado y dejar sin efecto los arrestos de rigor impuestos en su contra.<sup>45</sup> Esa decisión fue cumplida por la institución militar el 28 de octubre de 2002, mediante el acta de modificación que canceló los efectos de las sanciones disciplinarias impugnadas<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> Escrito de Ana Lucía Alarcón Gallegos, apoderada del señor Viteri, solicitando la disponibilidad, suscrito el 8 de julio de 2002 y ratificación de poder suscrito el 7 de julio de 2002 por Rogelio Viteri Ungaretti.

<sup>43</sup> Decreto Ejecutivo N°2917 de 19 de julio de 2002.

<sup>44</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> Acta de modificación de 28 de octubre de 2002, cancela efectos de los arrestos, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional.

Respecto a la pretensión del accionante sobre el cese de sus funciones como Agregado Naval en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido, y representante ante la OMI, el Tribunal Constitucional concluyó que:

“[...] a folio 51 del expediente consta la comunicación de la resolución tomada por el Consejo de Oficiales Almirantes en el cual cesan al Capitán Rogelio Viteri en las funciones que venía desempeñando y, a pesar de que no es función del Consejo de Oficiales Almirantes nombrar y cesar a los militares en el cargo de Agregado Naval, sino que aquello solamente le corresponde al Presidente de la República, a folios 123 y 124 consta el Decreto del Presidente de la República en el que efectivamente cesa en sus funciones al Capitán Rogelio Viteri; por lo que se concluye que si bien el acto del Consejo de Oficiales Almirantes es ilegítimo, la posibilidad de remediar el daño en este caso específico no es materia de amparo constitucional, puesto que ya existe el acto legítimo dictado por quien tenía competencia para cesarlo en sus funciones, es decir, el Presidente de la República”<sup>47</sup>.

Además, en cuanto a su pretensión sobre la postergación de su asistencia a un curso de formación, el Tribunal determinó que no se trataba de un acto ilegítimo, ya que no constituía una sanción y que no le había causado “un daño grave en definitiva puesto que el Capitán Rogelio Viteri tendrá la oportunidad de realizar tal curso en otra ocasión”<sup>48</sup>.

El 9 de enero de 2003, luego de haber transcurrido los seis meses reglamentarios desde la notificación del decreto ejecutivo de disponibilidad, el señor Viteri fue dado de baja por solicitud voluntaria mediante el Decreto ejecutivo N°3550<sup>49</sup>, por lo que fue puesto en servicio pasivo.

El 18 de febrero de 2003, la señora Ana Alarcón Gallegos, apoderada del señor Viteri, impugnó los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja de la institución, solicitando al Presidente del Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval que se revoquen dichos actos<sup>50</sup>. El 13 de marzo de 2003, el Consejo Superior de Oficiales de la Fuerza Naval

<sup>47</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

<sup>48</sup> *Ibidem*.

<sup>49</sup> Decreto Ejecutivo N°3550 de 9 de enero de 2003.

<sup>50</sup> Escrito de 18 de febrero de 2003, suscrito por Ana Alarcón Gallegos, apoderada del señor Viteri, impugnando los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja de la institución.

negó esta solicitud al amparo del artículo 201 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas<sup>51</sup>, considerando que el accionante no había demostrado que los decretos impugnados eran ilegales<sup>52</sup>, resolución que fue apelada. El 27 de marzo de 2003, el Consejo de Oficiales Superiores negó la apelación y ratificó la resolución N°04/03 de 13 de marzo de 2003, decisión que también fue impugnada por el accionante<sup>53</sup>. El 20 de mayo de 2003, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas negó el recurso en tercera instancia, por lo que los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja de la institución militar quedaron en firme<sup>54</sup>.

### **Medidas tomadas por las autoridades ante la denuncia del señor Viteri por actos de corrupción**

El 8 de noviembre de 2001, el señor Viteri Ungaretti dirigió un oficio al Embajador del Ecuador en el Reino Unido, a fin de poner en su conocimiento supuestos actos de corrupción<sup>55</sup>.

El 15 de diciembre 2001 el señor Viteri es llamado a declarar ante el Congreso Nacional.

El 20 de diciembre de 2001, se dispone la disponibilidad del Vicealmirante Guerra, Jefe de Estado Mayor de la Armada, uno de los altos mandos denunciados por el señor Viteri.<sup>56</sup>

<sup>51</sup> Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, publicada en el Registro Oficial Suplemento 660, el 10 de abril de 1991, Art. 201, Artículo derogado por Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 5 de 22 de Enero del 2007.- El Militar que fuere colocado a disposición, disponibilidad o dado de baja y se considere dicha Resolución ilegal, puede presentar su reclamo, al Consejo respectivo dentro de un plazo de cuarenta y cinco días calendario, después de haberse publicado en la Orden General el Decreto o la Resolución correspondiente. Los consejos resolverán los reclamos presentados en el plazo máximo de treinta días.

<sup>52</sup> Resolución No. 04/03 del Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval, de 13 de marzo de 2003.

<sup>53</sup> Resolución No. 05/03 del Consejo de Oficiales Superiores, de 27 de marzo de 2003.

<sup>54</sup> Resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de 20 de mayo de 2003, suscrita por [REDACTED], Presidente del Consejo Supremo de las FF.AA., [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], miembros del Consejo, y [REDACTED], Secretario del Consejo.

<sup>55</sup> Oficio N°AGNARU-008-C de 8 de noviembre de 2001, suscrito por el Agregado Naval en el Reino Unido, Rogelio Viteri Ungaretti, dirigido al Embajador ante el Reino Unido.

<sup>56</sup> ANEXO 5. Certificados de disponibilidad de los altos mandos

El 11 de enero de 2002, la Comisión Cívica contra la Corrupción Reporte entrega su reporte sobre los actos denunciados por el señor Viteri a la Fiscalía General del Estado.<sup>57</sup>

El 22 de enero de 2002, se dispone la disponibilidad del General [REDACTED], Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, que había sido acusado por el señor Viteri.<sup>58</sup>

El 4 de febrero de 2002, la Contraloría General del Estado emite su informe sobre los hechos denunciados por el señor Viteri.<sup>59</sup>

El 5 de febrero de 2002, el señor Viteri es llamado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la investigación de los hechos de corrupción denunciados.

El 20 de febrero de 2002, se dispone la disponibilidad de [REDACTED], Jefe del Estado Mayor de Fuerza Aérea, que había sido acusado por el señor Viteri.<sup>60</sup>

Mediante Decreto Ejecutivo No.2367, de 21 de febrero de 2002, se dispone el reemplazo de los Comandantes Generales de las tres fuerzas (aérea, terrestre y naval) y del Jefe del Comando Conjunto, autoridades más altas de la institución.

El 22 de febrero de 2002, la Superintendencia de Bancos y Seguros emite su reporte sobre los hechos denunciados por el señor Viteri.<sup>61</sup>

El 5 de marzo de 2002, se aprueba el informe de la Comisión de fiscalización del Congreso Nacional, respecto a los hechos denunciados por el señor Viteri.

---

<sup>57</sup> ANEXO 6. Informe de la Comisión Cívica contra la Corrupción.

<sup>58</sup> Certificados de disponibilidad de los altos mandos.

<sup>59</sup> ANEXO 7. Informe de Contraloría General del Estado.

<sup>60</sup> Certificados de disponibilidad de los altos mandos.

<sup>61</sup> ANEXO 8. Informe Superintendencia de Bancos y Seguros.



El 13 mayo de 2002, se da inicio a la instrucción fiscal del proceso penal llevado en contra de las personas denunciadas por el señor Viteri.<sup>62</sup>

El 17 de diciembre de 2002, la Contraloría General del Estado emite una orden de reintegro de fondos públicos a cargo de la aseguradora implicada en los presuntos actos de corrupción.

## **2.2. SOBRE LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

### **2.2.1. LOS HECHOS DEL CASO NO CARACTERIZAN UNA VIOLACIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.**

Según el artículo 47 de la CADH, las quejas presentadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son inadmisibles cuando:

“b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;”<sup>63</sup>

Los representantes del señor Viteri fundamentan su queja sobre su inconformidad con la decisión del Tribunal Constitucional, a pesar de que haya resuelto el recurso de amparo constitucional a su favor en cuanto a la impugnación de las sanciones disciplinarias:

[...] En consecuencia, en el fallo de apelación el tribunal decidió dejar sin efecto los arrestos impuestos, pero no se pronunció sobre las vulneraciones a los derechos humanos alegadas.

172. Particularmente, el tribunal no consideró la afectación a los derechos de Rogelio derivados de su remoción del cargo de Agregado Naval y de Defensa Militar en la Embajada de Ecuador en Londres. Adicionalmente, el tribunal tampoco se pronunció sobre la resolución que lo excluía de la nómina para de oficiales para realizar el XXI Curso de Comando de Estado Mayor Conjunto. Curso era un pre-requisito para ascender dentro de la Armada Nacional. Por lo tanto, del proceso no se derivaron medidas de reparación adecuadas para las

<sup>62</sup> ANEXO 9. Inicio de la instrucción fiscal.

<sup>63</sup> CADH, art. 47 b).

vulneraciones alegadas a los derechos expuestos como consecuencia de los hechos expuestos.

173. El estado ecuatoriano vulneró el artículo 25 de la CADH en la medida que la decisión del Tribunal Constitucional no consistió en un mecanismo eficaz para la protección de los derechos de Rogelio Viteri. A pesar de que los arrestos de rigor fueron anulados, los mismos ya produjeron sus efectos. Es decir que, a causa de dichos arrestos, Rogelio Viteri fue excluido de su posición laboral en la Embajada de Londres. A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, Rogelio Viteri no fue restituido a su cargo, siendo esta la medida de reparación lógica e idónea para el caso.<sup>64</sup>

Los representantes del señor Viteri reprochan al Tribunal Constitucional de haber resuelto la controversia *infra petita*, sin haberse pronunciado sobre la remoción del cargo de Agregado Naval, sin haberse pronunciado sobre la exclusión del curso, y para colmo, sin haberse pronunciado sobre las vulneraciones de derecho alegadas.

De la simple lectura del fallo del Tribunal Constitucional, comparándole con la demanda planteada por el señor Viteri, se desprende que la exposición de los representantes del señor Viteri es absolutamente ajena a la realidad.

En su demanda, el accionante planteó las siguientes pretensiones en su petitorio:

- “1.- La resolución del Consejo de disciplina por la que se me impuso el arresto de rigor de quince días en la sesión ordinaria del 5 de diciembre del año 2001.
- 2.- La resolución del Comandante de Operaciones Navales y Jefe de la Primera Zona Naval por la que se me impuso la sanción de cinco días de arresto de rigor, comunicada mediante Oficio N° COOPNA-CDO-003-C, del 08 de febrero del 2002.
- 3.- La Resolución del Comandante General de Marina por la que se me impuso la sanción de tres días de arresto de rigor, comunicada mediante Oficio N° COGMAR-DFL-014-C del 13 de noviembre del 2001.
- 4.- La Resolución del Consejo de Oficiales Almirantes por la que se resolvió “cesar en las funciones de Agregado Naval ante la embajada del Ecuador en el Reino Unido y representante ante la OMI al Sr. CPNV-EM Rogelio Viteri Ungarreti” comunicada con Oficio N° CONALM-SEC-044-C del 17 de diciembre del 2001.
- 5.- La Resolución por la que luego de haberseme incluido en la nómina de oficiales que realizaran el XXI Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto en el INAGUE se ha decidido no considerarme en esa nómina y se ha postergado mi

<sup>64</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 171 y siguientes.



**Oficio N°01838**

Página 22

asistencia a ese Curso “para otra oportunidad como consta en el Oficio N° DIGPER-DIR-084-0 del 08 de febrero del 2002.

Solicito además se ordene que se borre o elimine de mi libro de vida las sanciones que se declaren sin efecto de acuerdo con la presente petición.”<sup>65</sup>

Respecto a los puntos 1, 2, y 3 del petitorio antes citado, y la solicitud que que las sanciones sean borradas del libro de vida militar, el Tribunal Constitucional resolvió a favor del señor Viteri, considerando que se habían vulnerado sus derechos constitucionales:

[...] los arrestos de rigor impuestos al Capitán Rogelio Viteri son ilegítimos por cuanto contravienen el ordenamiento jurídico vigente, violan derechos subjetivos plasmados en la normativa del debido proceso recogida en el Art. 24 de la Constitución Política del Estado, principalmente el que corresponde al numeral 10 que dice que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento; y, ocasionan un daño grave al accionante puesto que los arrestos en su contra le significa disminuir el puntaje necesario para alcanzar su calificación al grado mayor, daño que no se produciría de manera individual por cada arresto sino solamente de manera conjunta porque sólo así existe acumulación de disminución del puntaje que anularía toda posibilidad de ascenso que es la aspiración de toda persona que ha emprendido en la carrera militar, siendo un motivo más por el que se hubiera tornado un sin sentido que interponga una acción de amparo por cada acto impugnado [...]”<sup>66</sup>

Así, contrario a lo afirmado por los representantes del señor Viteri, el Tribunal Constitucional consideró la afectación que las tres sanciones disciplinarias tuvieron sobre su carrera militar, y, considerando la normativa constitucional sobre el debido proceso, se dejaron sin efecto los arrestos de rigor, borrándoles de su hoja de vida militar, de conformidad con lo solicitado por el accionante. Como lo detalla el Tribunal Constitucional en su fallo, el registro de esas faltas disciplinarias en la hoja de vida militar del señor Viteri disminuía su puntaje de tal forma que hubiera aniquilado su oportunidad de beneficiarse de un ascenso. De esta forma, la medida reparatoria ordenada por el Tribunal Constitucional fue eficaz para reestablecer al señor Viteri en la situación anterior a la emisión de esas sanciones, de tener la oportunidad de seguir su carrera militar. Esa medida es además la única medida de reparación que había sido solicitada por el señor

<sup>65</sup> Recurso de amparo constitucional, de 11 de marzo de 2002, suscrito por Rogelio Viteri, y sus abogados.

<sup>66</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

Viteri dentro de su recurso de amparo constitucional, lo cual será desarrollado en el acápite siguiente.

Respecto a los puntos 4 y 5 del petitorio del recurso de amparo constitucional antes citado, que versan sobre el cese de sus funciones en Londres y su exclusión de un curso militar, el Tribunal Constitucional determinó lo siguiente:

“[...] a folio 51 del expediente consta la comunicación de la resolución tomada por el Consejo de Oficiales Almirantes en el cual cesan al Capitán Rogelio Viteri en las funciones que venía desempeñando y, a pesar de que no es función del Consejo de Oficiales Almirantes nombrar y cesar a los militares en el cargo de Agregado Naval, sino que aquello solamente le corresponde al Presidente de la República, a folios 123 y 124 consta el Decreto del Presidente de la República en el que efectivamente cesa en sus funciones al Capitán Rogelio Viteri; por lo que se concluye que si bien el acto del Consejo de Oficiales Almirantes es ilegítimo, la posibilidad de remediar el daño en este caso específico **no es materia de amparo constitucional, puesto que ya existe el acto legítimo dictado por quien tenía competencia para cesarlo en sus funciones, es decir, el Presidente de la República.**

[...] a folio 55 del expediente puede verse el oficio No. DIGPER-DIR-084 de 8 de febrero de 2002, suscrito por el señor Director General del Personal, en el que se remite información sobre el XXI Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto en el INAGUE, indicando al Capitán Rogelio Viteri que su asistencia al curso se encuentra postergada, lo que **bajo ningún concepto puede considerarse una sanción, ni que le ocasione un daño grave en definitiva puesto que el Capitán Rogelio Viteri tendrá la oportunidad de realizar tal curso en otra ocasión**, por lo que no se trata de un acto ilegítimo [...] <sup>67</sup>.

Así, contrario a lo afirmado por los representantes del señor Viteri, el Tribunal Constitucional sí se pronunció sobre su remoción del cargo de Agregado Naval, y su exclusión del curso militar. Por lo tanto, la situación denunciada por los representantes del señor Viteri fue efectivamente solventada en el ámbito interno.

Sin embargo, el señor Viteri recurre al Sistema Interamericano de Derechos Humanos alegando un error en la aplicación del derecho interno dentro de un proceso judicial durante el cual las autoridades judiciales cumplieron con los estándares del debido

<sup>67</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

proceso y las garantías judiciales. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso análogo, determinó que:

“Si bien la Comisión comprende que el peticionario no está satisfecho con los resultados específicos de las decisiones judiciales, la CIDH considera que el peticionario acude a la Comisión como un tribunal de cuarta instancia por su desacuerdo con las decisiones de los tribunales internos. La Comisión reitera que no es competente para revisar aquellas decisiones adoptadas por tribunales internos que actúen en la esfera de su competencia y apliquen el debido proceso y las garantías judiciales.”<sup>68</sup>

En el presente caso, los actos denunciados por el señor Viteri (su remoción del cargo de Agregado Naval y su exclusión de un curso) ya fueron conocidos por las autoridades judiciales internas mediante el recurso de amparo constitucional empleado.

No obstante, la inconformidad que subsiste por parte del señor Viteri tiene relación con el rechazo del Tribunal Constitucional de constatar la vulneración de derechos constitucionales respecto a estos actos emitidos por la institución militar, y el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya ordenado su reincorporación al cargo de Agregado Naval y no haya otorgado una indemnización por la vulneración de derechos constatada.

Al respecto, cabe referirse a la normativa que regía el amparo constitucional, El artículo 95 de la Constitución Política del Ecuador establecía que:

“Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias **de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución** o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública.

No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.

<sup>68</sup> CIDH, Informe N° 123/20, Inadmisibilidad, [REDACTED], Ecuador, 25 de abril de 2020, párr. 10.

También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso. [...]»<sup>69</sup>

Así, el recurso de amparo es una medida cautelar cuya finalidad es la protección de los derechos constitucionales que podrían ser vulnerados por un acto u omisión ilegítimo, emitido por una autoridad pública, el cual es susceptible de causar un daño grave.

En su fallo, el Tribunal Constitucional precisa el concepto de acto ilegítimo, al señalar que:

[...] un acto se torna ilegítimo cuando proviene de una autoridad que no tiene competencia para realizarlo, o teniendo competencia lo realiza sin respetar los procedimientos propios establecidos por la Constitución o la ley, o cuando ha sido dictado sin suficiente fundamento o motivación, o en definitiva, cuando de manera arbitraria viola el ordenamiento jurídico sustantivo o adjetivo establecido en la legislación ecuatoriana [...]»<sup>70</sup>

Así, valorando todas las circunstancias fácticas del caso y los fundamentos legales presentados por las partes procesales, y las facultades del juzgador en el marco específico del amparo constitucional, el Tribunal Constitucional valoró que la remoción del señor Viteri de su cargo en Londres no constituía un acto ilegítimo y que su exclusión del curso militar no le ocasionaba un daño grave que justifique su anulación. El Tribunal Constitucional realizó este análisis jurídico, al amparo de sus competencias y de conformidad con las exigencias del debido proceso, y a pesar de ello, los representantes del señor Viteri solicitan que la Corte IDH evalúe si el tribunal aplicó correctamente el derecho interno.

Por otro lado, la normativa constitucional antes citada también permite identificar los remedios que efectivamente eran susceptibles de ser otorgados a favor de los recurrentes. Considerando la naturaleza y fin constitucional de ese recurso, los jueces constitucionales no estaban facultados para ordenar indemnizaciones pecuniarias, sino que el remedio disponible era anular el acto impugnado y sus efectos. Ello no impedía que el accionante

<sup>69</sup> Constitución Política de la República del Ecuador de 1998.

<sup>70</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

presente el recurso adecuado para obtener indemnización al amparo del fallo del Tribunal Constitucional, en el cual se reconoció la vulneración de derechos, lo cual será detallado en el próximo acápite del presente escrito.

El remedio que los accionantes podían obtener a través de un amparo constitucional era que se anule el acto impugnado, sin embargo, la concesión de una indemnización no podía haberse ordenado por ese medio, y de hecho los abogados que representaron al señor Viteri ante el Tribunal Constitucional no solicitaron que se otorgue una reparación pecuniaria.

Por lo tanto, el Estado señala que el peticionario pretende que la Corte IDH actúe como tribunal de alzada, al evaluar si el Tribunal Constitucional aplicó de forma correcta el derecho interno, lo que no corresponde a la competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el presente caso, el señor Viteri obtuvo una decisión judicial favorable a sus intereses en cuanto a las sanciones disciplinarias que habían sido impuestas, sus derechos fueron reconocidos y garantizados, y la situación denunciada fue efectivamente remediada, conforme a las facultades del juzgador en el marco del recurso empleado, por lo que sus pretensiones son ajenas a los derechos consagrados en la CADH.

En virtud de lo anterior, el Estado señala que la queja presentada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humano incumple con el artículo 47 b) de la CADH, toda vez que los hechos descritos en la petición no corresponden a vulneraciones de los derechos consagrados en el mismo instrumento, por lo que se deberá declarar la incompetencia de la Corte IDH en razón de la materia.

### **2.2.2. FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS RESPECTO A LA PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA.**

El artículo 46 de la Convención Americana establece que:

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: **a) que se hayan interpuesto y**

**agotado los recursos de jurisdicción interna**, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.

Según ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en su jurisprudencia, el agotamiento previo de los recursos internos es fundamental para satisfacer la misión del Sistema Interamericano<sup>71</sup>, y constituye además el corolario del principio de subsidiariedad:

“[L]a regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser esta “coadyuvante o complementaria de la interna”.<sup>72</sup>

Así, el Preámbulo del Pacto de San José, establece un mecanismo para definir los límites de la jurisdicción internacional y las obligaciones de las autoridades nacionales<sup>73</sup>, en los términos siguientes:

“[...] Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de **naturaleza convencional coadyuvante o complementaria** de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos [...]”<sup>74</sup> (Lo resaltado me pertenece)

En virtud de la citada norma convencional, les corresponde en primer lugar a los Estados proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en los instrumentos de derecho internacional. Así, las normas convencionales limitan la competencia de los organismos interamericanos, ya que ésta únicamente se emplea cuando en el ámbito interno, los Estados no han asumido su propia competencia, la cual es prioritaria, de brindar un

<sup>71</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto Viviana Gallardo y otras, decisión del 13 de noviembre de 1981, párr. 26: “la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios”.

<sup>72</sup> Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo, sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 61; Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Fondo, sentencia del 20 de enero de 1989, párr. 64; Corte IDH. Caso Fairén Garbí y Solís Corrales vs. Honduras, Fondo, sentencia del 15 de marzo de 1989, párr. 85.

<sup>73</sup> Mauricio Iván Del Toro Huerta, El Principio de Subsidiariedad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con Especial Referencia al Sistema Interamericano, UNAM <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2496/7.pdf>

<sup>74</sup> Convención Americana sobre Derechos Humanos, Preámbulo.



mecanismo de protección efectivo. En ese sentido, la doctrina emitió el criterio siguiente:

“Al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el preámbulo de la misma, los Estados Americanos han subrayado que el reconocimiento de los derechos humanos justifica “una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. [...] Así, **los Estados americanos han querido dejar suficientemente claro que el sistema instaurado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa.** En consecuencia, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos tiene carácter subsidiario, en el sentido de que entra a operar sólo después de haber hecho uso de los recursos jurisdiccionales locales, sin haber obtenido un remedio para la violación que se alega. Es decir, **el sistema interamericano de protección de los derechos humanos es subsidiario, en el sentido de que debe permitir, en primer lugar, que el propio Estado pueda adoptar las medidas correctivas que sea necesario.**”<sup>75</sup> (Lo resaltado me pertenece)

Ahora bien, en el presente caso, los representantes del señor Viteri alegan que se habría vulnerado su derecho a obtener una indemnización, a pesar del reconocimiento por las autoridades judiciales que se configuró una vulneración de derechos constitucionales. Sin embargo, el señor Viteri no interpuso el recurso disponible e idóneo para obtener la indemnización a la cual pretende.

En efecto, como se expuso en el acápite anterior, el señor Viteri obtuvo una sentencia a nivel interno que reconoció la vulneración de sus derechos constitucionales, sin embargo el recurso empleado no era susceptible de producir el resultado deseado puesto que el amparo constitucional no facultaba al juez otorgar una indemnización, sino que únicamente podía anular el acto impugnado.

Así, el recurso idóneo que tenía que ser agotado para obtener una indemnización era la petición administrativa de indemnización ante la institución estatal responsable de la vulneración de derechos, esto es el Ministerio de Defensa Nacional, y de ser necesario, la

---

<sup>75</sup> Héctor Faúndez Ledesma, El agotamiento de los recursos Internos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, Revista IIDH, ISSN 1015-5074, N°. 46, 2007, [http://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2\\_2010/XXVCurso\\_Inter\\_en\\_Derechos\\_Humano\\_s\\_Discursos\\_ponencias/17.%20HFaundez\\_doc.pdf](http://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/XXVCurso_Inter_en_Derechos_Humano_s_Discursos_ponencias/17.%20HFaundez_doc.pdf)

acción contenciosa ante la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud de los artículos 209 y siguientes del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva que determina el procedimiento aplicable a la responsabilidad de las administraciones públicas:

De la responsabilidad de las administraciones públicas

Art. 209.- De la responsabilidad patrimonial.- Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a la que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República, los particulares exigirán directamente a las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios de los que provinieren el presunto perjuicio, las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio o por el funcionamiento de los servicios públicos. La reclamación será inmediatamente puesta en conocimiento de la Procuraduría General del Estado para la coordinación de la defensa estatal.

Están legitimados para interponer esta petición, los particulares a quienes las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios les hubieren irrogado perjuicios.

Art. 210.- Daño.- El daño alegado deberá ser real y determinado con relación a una persona o grupo de personas.

Art. 211.- Indemnización.- Serán indemnizables los daños causados a las personas cuando éstas no tengan la obligación jurídica de soportarlos.

Art. 212.- Acción judicial.- Si las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios niegan la indemnización reclamada en forma total o parcial o se abstienen de pronunciar la resolución en el plazo de tres meses, el interesado tendrá derecho a la acción contenciosa contra ellos, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.

Art. 213.- De la responsabilidad subsidiaria.- Los funcionarios y personal de servicio de las administraciones públicas que hubieren incurrido en dolo o culpa que generaron el daño resarcido por ésta a los particulares responderán por lo indemnizado, siempre que se hubiere efectuado el pago al o a los particulares por parte de aquella.<sup>76</sup>

Así, en cuanto a su pretensión indemnizatoria, se evidencia que el señor Viteri no agotó el recurso idóneo y disponible en el ordenamiento interno, antes de acudir al Sistema

<sup>76</sup> Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial 536, el 18 de marzo de 2002.

Interamericano, situación que impidió que el Estado tenga la oportunidad de remediar dicha cuestión.

El señor Viteri alega que el temor a represalias le habría desalentado de interponer dicho recurso. Sin embargo, consta del expediente de este caso que el señor Viteri siguió un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y apeló la decisión desfavorable dictada por ese tribunal. Siguió un proceso ante el Tribunal Constitucional para eliminar las sanciones impuestas por la institución militar. También impugnó cada una de las sanciones en sede militar. Así, la nutrida actividad procesal del señor Viteri ante las autoridades nacionales permiten afirmar que resulta poco creíble, e injustificable que se haya abstenido de interponer un recurso, pero no los otros, en las mismas circunstancias de alegada animosidad por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, se verifica que la queja sometida a la Corte IDH no cumple con el requisito convencional de agotamiento de recursos internos, razón por la cual se deberá constatar la incompetencia de la Corte IDH en cuanto a la pretensión indemnizatoria del señor Viteri.

## **2.3. ANÁLISIS DE FONDO**

### **2.3.1. Inexistencia de vulneración del derecho a la integridad personal (artículo 5 de la CADH)**

En su escrito, los representantes alegan que el Estado habría incumplido con su obligación de prevención de las amenazas a la integridad del señor Viteri y su familia, al indicar que:

“El día 10 de junio de 2002 Rogelio Viteri y su esposa, Rocío Alarcón, salen de Ecuador, temiendo por su seguridad ya que además de los ataques se recibieron varias llamadas de amenaza y la protección policial era claramente limita.”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, párr. 53.



Oficio N°01838

Página 31

En su jurisprudencia, la Corte Interamericana determinó que la obligación de garantía corresponde a una obligación positiva la cual implica el deber de prevenir, investigar, y sancionar toda violación a los derechos reconocidos en la Convención<sup>78</sup>:

166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

En el ámbito normativo interno, la Constitución Política del Ecuador de 1998, vigente a la época en la cual ocurrieron los hechos, reconocía y garantizaba el derecho a la integridad personal, como se desprende del artículo 23 numeral 2:

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: [...] 2. La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de material genético humano.

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad.

Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, serán imprescriptibles. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad.<sup>79</sup>

La norma constitucional vigente en la actualidad también garantiza el derecho a la integridad personal en su artículo 66 numeral 3, en los siguientes términos:

<sup>78</sup> Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), párrafo 166.

<sup>79</sup> Artículo 23 de la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 1, el 11 de agosto de 1998.



Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: [...] 3. El derecho a la integridad personal, que incluye:

- a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
- b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
- c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.
- d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos.<sup>80</sup>

Así, el Ecuador garantizaba, y sigue garantizando en la actualidad, el cumplimiento de su obligación convencional establecida en el artículo 2 de la CADH, puesto que se adoptaron las normas necesarias para cumplir con el estándar interamericano en torno al contenido del artículo 5 sobre la integridad personal.

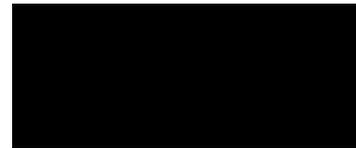
#### Sobre las alegadas amenazas

El señor Viteri alega que habría sufrido, junto con miembros de su familia, varias amenazas y hostigamientos. El señor Viteri expuso su preocupación por su seguridad y la de su familia ante la CIDH, ante lo cual se otorgaron medidas cautelares para precautelar su integridad personal, medidas que fueron cumplidas por las autoridades nacionales. En efecto, cumpliendo con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 11 de febrero de 2002<sup>81</sup>, las autoridades ecuatorianas proveyeron protección policial para garantizar la integridad personal del señor Viteri y de su familia, de forma inmediata.

El 18 de febrero del 2002, el Mayor de Policía [REDACTED], Comandante del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, mediante oficio N°239-GIR-PN, informó lo siguiente:

<sup>80</sup> Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, el 20 de octubre de 2008.

<sup>81</sup> Comunicación de la CIDH de 11 de febrero de 2002.



“[...] en cumplimiento del memorando N° 2002-0574-CG, de fecha 15 de febrero del 2002, **se dispuso a un señor Oficial y cuatro señores Policías tanto en el GIR-Quito como en el GIR-Guayas, para que briden protección y seguridad al señor Cap. de Navío Rogelio Viteri y su familia.**”<sup>82</sup> [Lo resaltado me pertenece]

El 1 de marzo de 2002, el Estado ecuatoriano informó a la CIDH sobre las acciones emprendidas por las autoridades nacionales para precautelar la seguridad e integridad del señor Viteri y su familia, cumpliendo con la medida cautelar otorgada en su beneficio.<sup>83</sup> Las medidas cautelares fueron otorgadas por la CIDH por un plazo de 6 meses, contados desde el 11 de febrero de 2002, sin embargo el señor Viteri abandonó el territorio ecuatoriano el 10 de junio de 2002. Por ello, dada la salida voluntaria del señor Viteri del Ecuador, la Comisión determinó que las medidas cautelares otorgadas a su favor quedaron sin efecto. Lo anterior evidencia que, hasta su salida voluntaria del territorio ecuatoriano, la seguridad e integridad personal del señor Viteri y de su familia se encontraban garantizadas, frente a la situación de peligro alegada.

Lo anterior demuestra que, ante la eventual vulneración de los derechos del señor Viteri y de su familia, y a pesar de que el temor manifestado nunca se materializó, las autoridades nacionales tomaron las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de su derecho a la integridad personal. **Estas medidas fueron implementadas desde febrero de 2002, y hasta su salida del país en junio de 2002.** En ese sentido, el Ecuador cumplió con su deber de garantía y su obligación positiva de prevención derivada de la jurisprudencia interamericana antes referida. Por lo tanto, el Estado rechaza las alegaciones según las cuales no habría tomado medidas para precautelar los derechos del señor Viteri y de sus familiares.

<sup>82</sup> Grupo de intervención y Rescate de la Policía Nacional Mayor [REDACTED], Oficio N°0239-GIR-PN, de 18 de febrero de 2002, suscrito por el Mayor de Policía [REDACTED], Comandante del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional.

<sup>83</sup> Oficio N°22974 de 1 de marzo de 2002, suscrito por el Procurador General del Estado Encargado.

Por otro lado, cabe indicar que no existe constancia de que las alegadas amenazas a la integridad personal del señor Viteri y de su familia hayan sido el objeto de una denuncia ante las autoridades nacionales competentes. En sus alegatos orales, el representante de las presuntas víctimas declaró que:

[...] amenazas que están probadas debidamente en el expediente porque existe la información de los disparos afuera, existe la información sobre los dos intentos de atropellamiento a la señora, uno de los sobrinos del señor Viteri también fue amenazado y no se investigó.<sup>84</sup>

El Estado ha permanecido a la espera de las pruebas de dichas alegadas vulneraciones a la integridad del señor Viteri y de su familia, sin embargo, dichas pruebas nunca fueron proporcionadas por los representantes del señor Viteri, a lo largo del proceso interamericano.

Sobre los disparos afuera del cuarto que el señor Viteri ocupaba mientras estaba cumpliendo sus funciones en Guayaquil, el señor Viteri alega que:

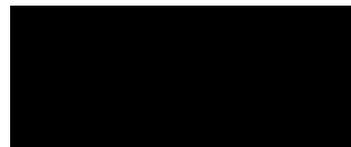
[Rogelio Viteri] Cuando ya regresamos a Ecuador. Y a mí en la en la posición que me pusieron me disparaban **todas las noches** en esa unidad. Escribí, informé, nunca tuve respuesta. Entonces son los hechos que menciono, y que se tomaron en consideración en el proceso de asilo porque la evaluación permitió determinar que eran cuestiones que sucedieron.

En virtud de lo anterior, el señor Viteri alega que disparaban todas las noches a la unidad donde se encontraba para amedrentarlo. De forma casi concordante, en su ESAP, los representantes de las presuntas víctimas expresaban que:

**De forma regular**, en las noches había disparos frente a su ventana.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Audiencia pública, 20 de marzo de 2023.

<sup>85</sup> ESAP, párr. 35.



Oficio N°01838

Página 35

Así, de forma regular (ya no todas las noches), disparaban frente a su ventana. Esa versión es muy distinta a la versión dada por el señor Wilfrido Recalde, testigo llamado a declarar a favor del señor Viteri en este caso:

“En la noche del 26 de abril que cumplía años el señor Viteri, encontrándonos todo el grupo de seguridad en la habitación, la cual le habían designado y se encontraba listo para descansar, escuchamos unos disparos que provenían de la parte de afuera, enseguida nos asomamos y no se vio a nadie.”<sup>86</sup>

Cabe señalar que, según su declaración, el señor Recalde estuvo acompañando al señor Viteri mientras cumplía sus funciones en Guayaquil por un período de 3 meses, y en ese tiempo, la única novedad que considera pertinente reportar ante la Corte IDH en su declaración fue la del 26 de abril de 2002. En ningún momento el señor Recalde dice que los disparos de la noche del 26 de abril de 2002 se repitieron en otra ocasión. El señor Recalde tampoco declara que los disparos de la noche del 26 de abril de 2002 fueron en dirección de la ventana del señor Viteri. Entonces, el hecho de que se hayan escuchado disparos a fuera en una sola ocasión en un período de 3 meses, es muy distinto a la versión del señor Viteri según la cual disparaba frente a su ventana todas las noches.

La discordancia entre las versiones del señor Viteri y del testigo Wilfrido Recalde, deberán ser tomadas en cuenta por la Corte para valorar la veracidad del relato del señor Viteri.

Respecto a los intentos de atropellamiento de la señora Alarcón, el Estado señala que, según las presuntas víctimas, dichos graves delitos habrían sido cometidos en presencia de testigos:

[Juez Sierra Porto] Y las conductas que explicó en dos o tres ocasiones a propósito de su esposa, podría ampliarnos un poco más sobre ese particular ¿en qué consistieron las agravantes o las conductas que lesionaron su honor?

[Rogelio Viteri] Para limpiar mi vida profesional tuvimos que seguir el proceso judicial en las varias instancias en el Ecuador. De pronto, quién denunció la corrupción pasó a ser el malo de la película, y yo tuve que ir a instancias judiciales para que se me limpie lo que me habían hecho. A mí no me autorizaron a asistir a

---

<sup>86</sup> Declaración ante fedatario público de Wilfrido Recalde.



Oficio N°01838

Página 36

ninguna de esas instancias judiciales. Mi esposa es la que tenía que afrontar. Mi esposa no solamente tuvo que soportar vejaciones, insultos, manoseos, atendiendo esa por gente militar, ella estaba sola, a mí no me permitieron asistir a ninguna de esas audiencias. Además, mi esposa intentaba ir a hacer su trabajo. **En dos ocasiones, con testigos, intentaron atropellarle en la calle, dos ocasiones, la una logró meterse a una tienda y la señora cerró la puerta.**

[Juez Sierra Porto] ¿Ese intento de asesinato, en los términos que usted está señalando fue en Ecuador?

[Rogelio Viteri] Fue en Ecuador.<sup>87</sup>

Sin embargo, ninguno de dichos testigos se presentó para rendir su versión ante las autoridades nacionales o ante la Corte Interamericana, y ninguna denuncia fue interpuesta por estos supuestos intentos de asesinato.

En cuanto a las supuestas amenazas sufridas por el sobrino del señor Viteri, el Estado nota que no se hace mención de las circunstancias, ni de la identidad de dicho sobrino, por lo que resulta asombroso que se pretenda que se haya realizado una investigación por unas alegaciones vagas e injustificadas.

En atención a lo expuesto, el Estado rechaza contundentemente las afirmaciones del representante de las presuntas víctimas, que pretende que las amenazas estarían debidamente probadas. Al contrario, las alegadas amenazas no fueron sustentadas en ningún momento por los representantes del señor Viteri. Ante esta Honorable Corte, el señor Viteri no presenta prueba documental o testimonial alguna que acredite la realidad o la gravedad de esas amenazas o delitos en su contra, los cuales habrían justificado que huya de su país.

Al respecto, las normas vigentes en la época de los hechos permitían que se presente una denuncia ante el fiscal o ante la Policía Judicial:

---

<sup>87</sup> Audiencia pública ante la Corte IDH de 20 de marzo de 2023.

“Art. 42.- Denuncia.- La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella a quien la ley se lo prohíbe, puede presentar su denuncia ante el Fiscal competente o ante la Policía Judicial.”<sup>88</sup>

Así, todo ciudadano que considere que se haya cometido un delito, tenía la posibilidad de presentar una denuncia, a fin de poner los hechos alegados en conocimiento de las autoridades competentes, para que dichos hechos sean investigados y que se ejerza la acción pública correspondiente. Sin embargo, la familia Viteri Alarcón se abstuvo de presentar denuncias por las amenazas alegadas, y sigue absteniéndose de hacerlo en la actualidad, a pesar de que manifiestan que dichas amenazas habrían continuado hasta la presente fecha, impidiendo supuestamente su regreso al Ecuador.

Durante la audiencia, el representante de las presuntas víctimas indicó que la señora Rocío Alarcón habría presentado una denuncia ante el Comandante de la Fuerza Naval por las alegadas amenazas:

[Hugo Cahueñas] Estimado señor Viteri, conoce usted que su esposa presentó una solicitud al comandante de la fuerza naval indicando los hechos de amenaza.<sup>89</sup>

Mediante carta de 30 de noviembre de 2001, la señora Alarcón habría solicitado la atención del Comandante General de la Fuerza Naval, el Almirante [REDACTED] respecto a las alegadas amenazas. Esa carta fue atendida por el señor [REDACTED], quien contestó lo siguiente:

Acuso recibo de su atenta carta, recibida vía fax el día de hoy viernes 30 de noviembre del 2001 y al agradecerle por la confianza que dice mantiene en mí, paso a puntualizar algunos aspectos de su misiva:

Al haber llegado su esposo al grado de Capitán de Navío y haber sido calificado para ocupar el cargo de Agregado Naval en el Reino Unido, creo les da a ustedes dos el conocimiento cabal de lo que es la Armada y su Código de Ética y de Honor, por lo que **no puedo aceptar y rechazo frontalmente sus expresiones de que ustedes estén siendo objeto de amenazas directas contra su seguridad y aún contra la vida de su**

<sup>88</sup> Código de Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 360, el 13 de enero de 2000.

<sup>89</sup> Transcripción interrogatorio al declarante Rogelio Viteri durante la audiencia pública de 20 de marzo de 2023, ante la Corte IDH.



Oficio N°01838

Página 38

**cónyuge.** Ese no es nuestro modo de proceder y no creo que usted tenga fundamentos para expresar ese temor. [...]

Las FF.AA. hacen una institución de honor en la que no hay cabida a la calumnia ni al irrespeto a las leyes y reglamentos, por eso todo proceso de investigación y aclaración de los hechos, será realizado en estricto cumplimiento al marco legal que nos rige y bajo los preceptos constitucionales del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Esto tiene que entenderse que cubre los dos sentidos, tanto para el que acusa como para los que son acusados. No debe temer por lo tanto que algo le ocurra a su esposo, ni tampoco que se pierdan los documentos que trae y que según él prueban sus acusaciones, porque estos ya son públicos aquí en el Ecuador.<sup>90</sup> [Lo resaltado me pertenece]

Así, el mismo día de su carta, Rocío Alarcón tuvo una respuesta y aclaración que no se iba a atender su solicitud. Ante esta situación, la señora Alarcón o el señor Viteri hubiera podido interponer su denuncia ante las autoridades competentes, pero se abstuvieron de hacerlo.

Al respecto, cabe señalar que el destinatario de la carta de la señora Alarcón era la misma persona que, según las presuntas víctimas, habría sido uno de los perpetradores de las alegadas amenazas:

“15. [...] Luego de la reunión, [REDACTED] ordenó que pase a la oficina jefe del Comando Conjunto, el vicealmirante [REDACTED], una vez en esa oficina junto con [REDACTED] se encontraba [REDACTED], luego de saludar [REDACTED] de manera inmediata dice: “usted es un h... de p... y tenemos que desaparecerle”.<sup>91</sup>

Esa versión fue reiterada por el señor Viteri durante su declaración ante la Corte IDH:

[...] Pasé a hablar con el almirante Saona, que era el jefe del Comando Conjunto, y estaba Saona con Fernando Donoso, que era el Comandante de la Marina, y Donoso me ve a entrar y me dice “eres un hijo de tal y cual te vamos a desaparecer maldito”, esa fue el ambiente que recibí [...]<sup>92</sup>

<sup>90</sup> Carta de 30 de noviembre de 2001 suscrita por el Almirante [REDACTED] Comandante General de Marina dirigida a la señora Rocío Alarcón Gallegos.

<sup>91</sup> ESAP

<sup>92</sup> Transcripción de la declaración de Rogelio Viteri.

De las declaraciones del señor Viteri se desprende que el Almirante [REDACTED] le habría amenazado de desaparición forzada. En esas condiciones, resulta evidente que él no era la persona adecuada para recibir y tramitar cualquier denuncia respecto a las supuestas amenazas que habría recibido. El Estado aclara que el Almirante [REDACTED], al igual que todas las otras altas autoridades de la institución militar de esa época, fue cesado en sus funciones, mediante Decreto Ejecutivo 2367 de 21 de febrero de 2002. Aun así, mediante Oficio no. COGMAR-RPP-025-O de 16 de enero de 2002, dirigido al Comando General de la Policía Nacional, el Comandante General de Marina Almirante [REDACTED] solicitó protección policial a favor del señor Viteri y su familia, a su regreso de Reino Unido:

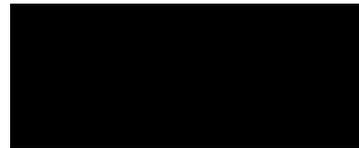
“como demostración de la transparencia y verticalidad con que actúa la Armada procedo oficialmente a formular el requerimiento de protección policial al señor CPNV-EM Rogelio Viteri y su familia tan pronto se efectúe su retorno al país, fecha que se comunicará oportunamente.”<sup>93</sup>

Los representantes de las presuntas víctimas no proveen una explicación por la cual el señor Viteri se abstuvo de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El Estado señala que el propio señor Viteri, mediante carta de 1 de julio de 2002, dirigida a la opinión pública ecuatoriana, había agradecido a la Fiscalía por su investigación relacionada con los actos de corrupción denunciados por él. Por lo que, se debe suponer que el señor Viteri, a esa época, tenía la confianza suficiente para presumir que, de presentar una denuncia por los hostigamientos, sería tramitada con seriedad. A pesar de ello, no presentó denuncia ante las autoridades competentes.

En ese contexto, las medidas de protección implementadas en beneficio del señor Viteri y su familia no hubieran podido ser emprendidas con anterioridad a la intervención de la CIDH, puesto que las autoridades desconocían las alegaciones del señor Viteri respecto a dichas amenazas. Pero incluso después de que las medidas cautelares hayan sido otorgadas por la CIDH, y en ausencia de denuncia, las autoridades no tuvieron la

---

<sup>93</sup> Oficio no. COGMAR-RPP-025-O de 16 de enero de 2002, dirigido al Comando General de la Policía Nacional, el Comandante General de Marina Almirante [REDACTED]



Oficio N°01838

Página 40

oportunidad de iniciar una investigación formal, dado que permanecieron sin conocer las circunstancias exactas en las cuales dichas amenazas habrían ocurrido. De esta forma, respecto a la obligación estatal de investigar que se deriva de la jurisprudencia interamericana antes referida, no se puede atribuir al Estado la falta de investigación de las amenazas expuestas ante los órganos del Sistema Interamericano, dado que les correspondía a las presuntas víctimas denunciar los hechos ante la autoridad nacional competente.

Por otro lado, el Estado recuerda que el 18 de febrero de 2003, la señora Alarcón Gallegos, apoderada del señor Viteri, impugnó los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja de la institución, solicitando al Presidente del Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval que se revoquen dichos actos<sup>94</sup>. Esa actuación es inconsistente con la situación descrita por los representantes del señor Viteri. En efecto, considerando que el señor Viteri alega que las amenazas y persecución eran de tal gravedad que le impedía permanecer en el Ecuador, resulta incomprensible que haya solicitado que los actos de disponibilidad y baja sea revocados apenas un mes después de su baja, puesto que, en caso de haberse cumplido su solicitud, evidentemente el señor Viteri hubiera tenido que regresar al Ecuador para reanudar sus obligaciones de militar en servicio activo. Por lo tanto, la impugnación de su baja de la institución militar refleja que, a partir de febrero del 2003, esto es 8 meses después de haber voluntariamente salido del país, el señor Viteri tuvo el proyecto de regresar al Ecuador y seguir su carrera militar, lo cual demuestra que la situación de temor alegada ante la Corte Interamericana no se asemeja a la realidad fáctica.

Como lo expuso el Estado en sus alegatos orales, resulta que la familia Viteri-Alarcón estaba tramitando su asilo y a la par, proyectando su regreso al Ecuador, solicitando que el señor Viteri sea reincorporado a las Fuerzas Armadas. Sobre ese punto, durante la audiencia ante la Corte IDH, el señor Simón expresó lo siguiente:

---

<sup>94</sup> Escrito la señora Alarcón Gallegos, apoderada del señor Viteri, de 18 de febrero de 2003, impugnando los decretos ejecutivos de disponibilidad y baja de la institución, ante el Presidente del Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval.

El señor Viteri apeló las decisiones de separación y a las medidas disciplinarias a su retiro de las fuerzas armadas, como una forma de mostrar que estaba agotando todos los recursos disponibles, no porque supiera que iba a resolver favorablemente, él esperaba la respuesta negativa [...] <sup>95</sup>

Ese argumento es absolutamente inconsistente, pues no existía obligación alguna de que el señor Viteri impugne su disponibilidad y baja. Durante la audiencia pública, el señor Viteri reconoció que hubiese regresado al Ecuador, en el caso de que la impugnación de su disponibilidad y baja hubiese sido aceptada, inclusive antes de que se resuelva su solicitud de asilo en Reino Unido. De ese reconocimiento, se deduce que el alegado miedo a dichas amenazas no era de tal magnitud que le hubiese impedido regresar al país, en el evento de que su reincorporación haya sido aceptada.

Adicionalmente, en su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas refieren que las amenazas nunca habrían cesado, manteniéndose hasta la presente fecha, situación que impediría su retorno al Ecuador. <sup>96</sup>

Al respecto, en primer lugar, cabe indicar que, en la actualidad, la Fiscalía cuenta con el Programa de Protección a Víctimas y Testigos que puede ser impulsado al existir una denuncia penal. Consecuentemente, si el señor Viteri Ungaretti presenta una denuncia por supuestas amenazas, y de ser procedente, podría ser protegido por las autoridades nacionales a través del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, de conformidad con las disposiciones del artículo 78 de la Constitución <sup>97</sup>, el artículo 11 numerales 8 y 12 del Código Orgánico Integral Penal <sup>98</sup> y el Reglamento del Sistema Nacional de Protección

<sup>95</sup> Intervención de Farith Simón durante la audiencia pública ante la Corte IDH de 20 de marzo de 2023.

<sup>96</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 220.

<sup>97</sup> Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, el 20 de octubre de 2008, artículo 78: "Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación (...) Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales".

<sup>98</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 11: "(...) 8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y la ley."; y, "(...) 12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana. Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del territorio

y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal<sup>99</sup>. Sin perjuicio de ello, en ausencia de dicha denuncia penal, cuando se encuentren dentro del territorio ecuatoriano, el señor Viteri y su familia gozaría de todas las garantías relacionadas con el derecho a la integridad personal, como cualquier persona bajo la jurisdicción del Ecuador.

En segundo lugar, es preciso aclarar que, desde la época de los hechos y hasta la presente fecha, el señor Viteri y su familia han viajado al Ecuador, ingresando libremente al territorio ecuatoriano, como se desprende de los registros migratorios que detallan sus entradas y salidas del Ecuador<sup>100</sup>. Tan es así que el señor Viteri ha regresado al Ecuador en 21 ocasiones y su esposa en 27 ocasiones desde la época de los hechos, quedándose para estadías de larga duración, por varios meses, como por ejemplo en el período 2014-2015, cuando la señora Alarcón permaneció en el territorio ecuatoriano del 27 de enero 2014 al 10 de junio de 2014, y nuevamente del 14 de julio de 2014 al 18 de agosto de 2014, y una vez más viajó al Ecuador del 22 de septiembre de 2014 al 3 de abril del 2015, por lo que en el año 2014, la señora Alarcón pasó más tiempo en el Ecuador que en el país de su residencia. Asimismo, el señor Viteri y la señora Alarcón permanecieron en el Ecuador del 26 de enero de 2020 hasta el 26 de agosto de 2020, es decir 7 meses consecutivos. De esta forma, contrario a lo afirmado por los representantes de las presuntas víctimas, los registros migratorios evidencian que las alegadas amenazas no impidieron su retorno periódico y frecuente al Ecuador. Además, puesto que la Fiscalía General del Estado señaló que nunca se había presentado ninguna denuncia relacionada con las alegaciones del señor Viteri<sup>101</sup>, se puede inferir que sus repetidas estadías en el

---

nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal".

<sup>99</sup> Reglamento del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, Resolución de la Fiscalía General del Estado 25, publicada en el Registro Oficial 239, el 11 de mayo de 2018.

<sup>100</sup> Certificados de Movimientos Migratorios, emitido por la Unidad de Control Migratorio, Sistema Migratorio Ecuatoriano, Ministerio de Gobierno, reportes de 1 de diciembre de 2021, del señor Julio Rogelio Viteri Ungaretti y la señora Ligia Rocío Alarcón Gallegos.

<sup>101</sup> Oficio FGE-CGAJP-DDHPC-2021-007479-O de 30 de noviembre de 2021, suscrito por el Director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado.

territorio ecuatoriano se desarrollaron con plena normalidad, sin que se haya manifestado ningún incidente.

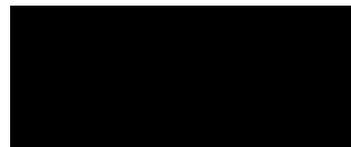
Es más, de las declaraciones del señor Viteri y de la señora Alarcón, y del registro de sus movimientos migratorios, se desprende que, la razón por la cual no regresaron al Ecuador entre el 2002 y el 2006 fue porque, teniendo la calidad de asilados, estaban legalmente impedidos de regresar al Ecuador, o hubieran perdido su estatus y su residencia en el Reino Unido. Sin embargo, a penas su situación migratoria en el Reino Unido lo permitió, es decir, cuando consiguieron la nacionalidad británica, tuvieron la libertad de viajar de nuevo al Ecuador. Esa situación revela que lo que les impidió estar en el Ecuador fueron las restricciones inherentes a su situación migratoria en el Reino Unido, y no el miedo por las alegadas amenazas.

Es importante conocer el proceso de asilo y en qué condiciones fue otorgado al señor Viteri, toda vez que esa decisión Reino Unido es susceptible de dar credibilidad a las alegaciones del señor Viteri. El Estado señala que la decisión del Reino Unido de conceder el asilo al señor Viteri debe ser evaluada a la luz de los elementos que la fundamentaron.

Las autoridades británicas negaron el asilo en primera instancia, el 17 de marzo de 2003. La apelación le fue favorable, se le concedió el asilo mediante decisión de 14 de julio de 2003. Pero las autoridades británicas, el *Secretary of State for the Home Department*, apelaron el asilo concedido, porque consideraron que el accionante no había demostrado que el Ecuador en su conjunto había fallado en su obligación de proveerle protección en contra de los hostigamientos de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir que el gobierno británico evaluó que la mera animosidad por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas no bastaba para demostrar que el Estado en su conjunto le había negado su protección.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Anexo 10. Decisión de 23 de marzo de 2004, Immigration Appeal Tribunal.



Oficio N°01838

Página 44

En su decisión de última instancia, de 23 de 2004, el tribunal de migración de Reino Unido considera que la institución militar se ha negado a implementar la decisión judicial del Tribunal Constitucional de cancelar los efectos de las sanciones disciplinarias. Las autoridades británicas creyeron que la decisión del Tribunal Constitucional que fue favorable a los intereses del señor Viteri, fue ignorada por las Fuerzas Armadas:

“The military refused to accept the finding and the decision has not been implemented in the face of their opposition to it.”<sup>103</sup>

Las Fuerzas Armadas se negaron a aceptar la decisión judicial, la cual no ha sido ejecutada. [traducción libre]

Esta consideración fue clave para convencer el tribunal de migración de otorgar el asilo, pues se alegó que las Fuerzas Armadas, además de perseguir al señor Viteri, se negaban a ejecutar una decisión judicial a su favor. Esta consideración es absolutamente falsa. Las Fuerzas Armadas no se negaron a aplicar la decisión del Tribunal Constitucional y, como ya se expuso en ocasiones anteriores, mediante Acta de modificación de 28 de octubre de 2002, la Armada canceló los efectos de los arrestos impuestos al señor Viteri, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional. Así, la decisión de conceder el asilo se basa en una falacia según la cual las autoridades militares no habrían cumplido con la decisión judicial favorable al señor Viteri.

Además, la decisión del tribunal de migración de concederle el asilo se fundamentó en el peritaje dado por el señor Gareth Jones, considerando que era un “experto del país”. Este supuesto experto del Ecuador es el mismo que los representantes querían hacer declarar ante el tribunal interamericano, sobre la situación política y de corrupción en Ecuador el año 2002. Al respecto, en su Resolución de 21 de febrero de 2023, el Presidente de esta Honorable Corte advirtió que la trayectoria profesional presentada en la hoja de vida del señor Gareth Jones no le permitía pronunciarse de forma pertinente y relevante respecto a la situación del Ecuador:

La Presidencia nota, que los representantes en el objeto de la declaración del señor Gareth refieren un informe supuestamente elaborado por él, sobre el cual rendirá el peritaje, sin indicar información alguna que permita identificar con precisión el

---

<sup>103</sup> Decisión de 23 de marzo de 2004, Immigration Appeal Tribunal.

documento en cuestión, de que se trata, en que contexto lo elaboró, por lo que no se cuenta con dicho documento. Adicionalmente, el Presidente advierte que la trayectoria profesional presentada en la hoja de vida del señor Gareth no se relaciona con el objeto del peritaje propuesto. Por tanto, ante la falta de relevancia y pertinencia de dicho dictamen pericial, el Presidente resuelve inadmitirlo.<sup>104</sup>

La intervención de dicho perito fue inadmitida por el Presidente de la Corte Interamericana, sin embargo, fue admitida por el tribunal que concedió el asilo al señor Viteri, y de hecho fue un elemento clave que fundamentó esa decisión.

De lo anterior, se desprende que la decisión de las autoridades británicas de concederle asilo fue basada en elementos probatorios sesgados, y ajenos a la realidad de los hechos del caso. En ese contexto, el asilo concedido no debe ser considerado por esta Honorable Corte como un elemento convincente para determinar si las alegadas amenazas fueron o no susceptibles de impedir la permanencia del señor Viteri y su familia en el Ecuador.

Por lo tanto, el Estado recalca que las alegaciones emitidas por los representantes de las presuntas víctimas respecto a las supuestas amenazas que la familia Viteri Alarcón recibiría hasta la presente fecha no se encuentran sustentadas. Los representantes de las presuntas víctimas no demuestran que hayan existido reales amenazas a la seguridad e integridad del señor Viteri y su familia, toda vez que el señor Viteri planeó su regreso al Ecuador desde febrero del 2003, cuando pidió ser reincorporado al servicio activo, y que las presuntas víctimas nunca interpusieron una denuncia ante las autoridades competentes y nunca cesaron de viajar al Ecuador, regresando de forma periódica y reiterada, sin reportar ningún inconveniente. De esta forma, el temor relatado por las presuntas víctimas respecto a su integridad personal, el cual nunca se ha materializado, no se encuentra fundado ni justificado por las circunstancias del presente caso. En ese sentido, el Estado solicita a este Honorable Tribunal que evalúe la veracidad de las alegaciones del señor Viteri a la luz de los elementos fácticos y probatorios antes descritos.

---

<sup>104</sup> Presidente Corte IDH, Resolución de 21 de febrero de 2023.



Oficio N°01838

Página 46

Por lo anterior, se evidencia que no se configura una vulneración del derecho a la integridad personal, en el contexto de las supuestas amenazas descritas por los representantes del señor Viteri y su familia.

### Sobre las condiciones de detención durante los arrestos de rigor

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas alegan que las condiciones en las cuales cumplió las sanciones disciplinarias constituirían tratos crueles y degradantes:

[...] Cabe destacar que, durante dicha detención Rogelio Viteri fue víctima de tratos crueles y degradantes como privarle de alimentación y agua; restricción del sueño y prohibición de contacto con personas del exterior. [...]

Rogelio Viteri fue retenido en una celda sin ventilación, sin alimentación e infestada de cucarachas. [...]

Las condiciones precarias se mantuvieron durante todas las detenciones ocurridas.  
105

Respecto a las condiciones de detención, en su jurisprudencia, la Corte IDH ha determinado lo siguiente:

221. De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que la detención en condiciones de hacinamiento, el aislamiento en celda reducida, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, la incomunicación o las restricciones indebidas al régimen de visitas constituyen una violación a la integridad personal.<sup>106</sup>

En el presente caso, el 13 de noviembre de 2001, 5 de diciembre de 2001 y 8 de febrero de 2002, respectivamente, se pronunciaron tres sanciones disciplinarias en contra del señor Viteri de 3, 15 y 5 días de arresto de rigor. Como se desprende de la información proporcionada por la Comandancia General de la Armada del Ecuador, el arresto de rigor debía cumplirse en “piezas, camarotes o entrepuentes” designados en el interior de reparto

<sup>105</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 145, 146 y 148.

<sup>106</sup> Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005, párr. 221.

militar que contaban con “todas las condiciones necesarias de habitabilidad (cama, baño, servicios básicos como agua, luz, ventilación, TV)”<sup>107</sup>. De la información disponible también se evidencia que el personal militar de guardia preparaba en la cocina del recinto militar, las comidas de la persona que cumplía el arresto de rigor.

Así, los militares que eran sancionados con un arresto de rigor no podían ser detenidos por más de 15 días, y la detención se cumplía en una pieza adecuada con luz natural o artificial, con ventilación suficiente, lo que garantizaba el respeto de su dignidad e integridad personal. Por lo tanto, según la información antes mencionada y la normativa aplicable, las condiciones de cumplimiento de los arrestos de rigor eran conformes a los estándares exigidos por la Corte IDH en la materia.

Además de lo anterior, en el caso concreto, el Estado señala que, el 20 de diciembre de 2001, durante el cumplimiento del arresto de rigor de 15 días, el señor Viteri recibió la visita de un médico de la Cruz Roja Ecuatoriana, quien constató que se encontraba en “buenas condiciones generales”, y bien alimentado, aunque con aparentes molestias debido a los “condimentos de la dieta” que recibía. El Estado se remite al contenido del reporte médico suscrito el 20 de diciembre de 2001, en el cual el médico informa al Presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana sobre el estado de salud del señor Viteri durante su privación de libertad:

“Remito a Usted el informe de evaluación médica realizada al señor CPNV Rogelio Viteri de 47 años de edad, en una habitación del quinto piso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el día de hoy a las 7:20 horas.

Anamnesis:

Refiere molestias epigástricas y flatulencias desde hace unos 10 días aproximadamente. Aduce como causa aparente los condimentos de la dieta que recibe. [...]

Examen Físico:

---

<sup>107</sup> Oficio No. ARE-COGMAR-CDO-COGMAR-JUR-2021-2722 de 14 de diciembre de 2021 emitido por la Comandancia General de la Armada del Ecuador, suscrito por [REDACTED], Contralmirante Comandante General de la Armada.

Individuo atlético en buenas condiciones generales, facies de preocupación y ansiedad. [...]”<sup>108</sup>

De las constataciones realizadas a la época de los hechos por el médico de la Cruz Roja Ecuatoriana se puede evidenciar que, contrario a lo afirmado en el Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, el señor Viteri no fue privado de alimentación ni agua. El señor Viteri se encontraba dentro de una habitación, y no de una celda como lo pretenden los representantes de las presuntas víctimas. Las condiciones precarias referidas por los representantes de las presuntas víctimas, las cuales habrían afectado su integridad, tampoco fueron observadas por el médico que procedió a evaluar su estado de salud.

Respecto a la supuesta incomunicación a la cual el señor Viteri habría sido sometido, cabe recalcar que durante el primer arresto de rigor que duró 15 días, entre el 5 de diciembre y el 20 de diciembre de 2001, el señor Viteri fue llamado a declarar:

- El 12 de diciembre en la Contraloría General del Estado;
- el 13 de diciembre ante el Congreso Nacional;
- el 18 de diciembre en la Comisión Cívica Anticorrupción,
- el 19 de diciembre ante el Congreso Nacional nuevamente.

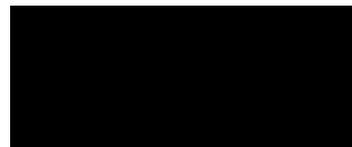
La comparecencia del señor Viteri ante estas autoridades, en el medio de su arresto de rigor, con el fin de declarar sobre los supuestos delitos que fueron el objeto de su denuncia, no se asemeja a la situación de una persona en situación de incomunicación.

En el ESAP, los representantes de las presuntas víctimas también señalan que, durante su detención, el señor Viteri “subsistió gracias a los alimentos que eran proporcionados a escondidas por sus familiares o la cocinera de la Armada.”<sup>109</sup> Los representantes indican entonces que los familiares conocían el lugar en el cual el señor Viteri cumplía su arresto de rigor, dado que le proporcionaban alimentos, sin embargo, estas circunstancias no

---

<sup>108</sup> Reporte del Doctor [REDACTED], médico de la Cruz Roja Ecuatoriana suscrito el 20 de diciembre de 2001, y dirigido al Doctor [REDACTED] Presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana.

<sup>109</sup> ESAP.



coinciden con la declaración de la señora Alarcón, quien pretende que desconocía hasta si su esposo seguía con vida:

“Se incluyeron llamadas de líderes políticos. Todos querían saber: ¿qué pasó y dónde estaba Rogelio? Mi nivel de desesperación crecía cada momento. Me preguntaba ¿si fuera a Ecuador en búsqueda de Rogelio? ¿Cómo se quedan mis hijos? ¿Qué pasaba y dónde estaba Rogelio? Ya entre las diversas llamadas me decían que él ya estaba muerto.”<sup>110</sup>

Durante otro arresto de rigor, el señor Viteri recibió la visita del Defensor del Pueblo adjunto del Litoral y Galápagos, [REDACTED], por disposición del entonces Defensor del Pueblo Claudio Mueckay, para constatar su salud y condiciones de detención. Lamentablemente, la constancia oficial de dicha visita no ha podido ser recabada por las autoridades nacional, considerando el paso del tiempo, puesto que se trata de información antigua, de más de veinte años atrás. Sin embargo, la visita del Defensor al señor Viteri fue reportada por los medios de comunicación de la época, como consta de un artículo de prensa de 1 de febrero de 2002, sometido al conocimiento de la Corte IDH por el propio señor Viteri. En una entrevista de la época, el Defensor del Pueblo adjunto del Litoral y Galápagos manifestó que “pudo hablar a solas con Viteri durante 20 minutos y que ocupaba una habitación sencilla, donde dispone de una cama y un televisor.”

---

<sup>110</sup> Declaración de Rocío Alarcón, ante fedatario público.

# Viteri cumple 2 arrestos

VIÉNES 1 FEBRERO 2002

El defensor del pueblo adjunto del Litoral y Galápagos, Franklin Saltos, visitó ayer al capitán Rogelio Viteri, quien cumple dos nuevos arrestos de seis días en el Centro de Movilización Occidental de Guayaquil.

El funcionario acudió al lugar por disposición del defensor del Ecuador, Claudio Mueckay, para constatar la salud y en qué condiciones está el arrestado.

Saltos dijo que habló a solas con Viteri durante 20 minutos y que ocupa una habitación sencilla, donde dispone de una cama y un televisor.

El Defensor agregó que el ex agregado naval está físicamente bien, pero según él, es víctima de presiones psicológicas igual que su familia.

Sostuvo que el 25 de enero pasado se envió el oficio a los hijos de Viteri en Londres para informarle que debía cumplir un arresto de 72 horas, en lugar de comunicar la novedad al oficial que estaba en Quito.

Señaló que si Viteri y sus abogados lo solicitan, la Defensoría del Pueblo presentará un amparo constitucional ante un juez civil o penal de Quito o Guayaquil para que se declaren inconstitucionales las san-

ciones.

Viteri recuperará su libertad el próximo martes y luego asumirá la jefatura del Centro de Movilización en Guayaquil por disposición del director de personal de la Marina, contralmirante Gonzalo Vega.

La única persona que puede verlo mientras permanezca arrestado es monseñor Federico Gagliardo, capellán de la Armada.

Gagliardo afirmó que lo visitó ayer y que Viteri anímicamente está bien.

Dijo que el trato que recibe "es indigno y no es justo" para un oficial de su jerarquía.

El Estado señala que en ese mismo artículo de prensa, se reporta que monseñor [REDACTED], capellán de la Armada, y amigo personal del señor Viteri, considera que el trato recibido por él "es indigno y no es justo para un oficial de su jerarquía". Es apreciación también fue manifestada por el señor Recalde en su declaración en los siguientes términos:

"[...]su dormitorio que quedaba en la parte alta del edificio, el cual no era lo indicado, ya que no reunía las condiciones necesarias para su jerarquía como Oficial de la Armada [...]"

"[...] encontrándonos todo el grupo de seguridad en la habitación, la cual le habían designado [...]"

le acondicionaron un dormitorio, ahí él dormía y realizaba sus necesidades. El dormitorio tenía un solo foco el cual le alumbraba su habitación, poseía poca ventilación, tenía acceso al agua mientras permanecía en esa habitación solamente para asearse y bañarse, y tenía una cama. [...]"<sup>111</sup>

Así, según las observaciones del señor Recalde, el señor Viteri se encontraba en una habitación privada, en la parte alta de un edificio, con ventilación, luz, agua, una cama,

<sup>111</sup> Declaración Wilfrido Recalde.

inclusive era una habitación suficientemente amplia para recibir un grupo de nueve personas, según las indicaciones del señor Recalde. A pesar de esas cómodas condiciones, el señor Recalde consideraba que la habitación asignada al señor Viteri durante el cumplimiento de sus funciones en Guayaquil “no era lo indicado, ya que no reunía las condiciones necesarias para su jerarquía como Oficial de la Armada.”<sup>112</sup> Esa apreciación compartida por el capellán de la Armada, nos permite percibir que las exigencias inherentes al grado militar del señor Viteri pueden haber sido la causa de su inconformidad con las condiciones de su detención, sin embargo, las condiciones observadas tanto por el médico de la Cruz Roja, como por el Defensor del Pueblo adjunto, de ninguna forma pueden asemejarse a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Por otro parte, el Estado recalca que, durante el proceso interno, el señor Viteri nunca mencionó que las condiciones de detención durante sus arrestos de rigor hayan sido precarias, ni que hayan vulnerado sus derechos. El 11 de marzo de 2002, el señor Viteri interpuso una acción de amparo constitucional ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para someter al conocimiento de las autoridades judiciales sus alegaciones en cuanto a la vulneración de sus derechos constitucionales generadas a raíz de las sanciones disciplinarias impuestas en su contra<sup>113</sup>. Dicho recurso fue definitivamente resuelto mediante resolución del Tribunal Constitucional el 28 de agosto de 2002<sup>114</sup>. En su demanda de marzo de 2002<sup>115</sup> y a lo largo de ese proceso judicial, el señor Viteri y sus abogados patrocinadores, [REDACTED], no se refirieron en ningún momento a las supuestas condiciones de detención precarias, las cuales evidentemente habrían constituido circunstancias relevantes a la hora de evaluar vulneraciones a sus derechos constitucionales. Esa situación permite cuestionar la realidad de las alegaciones emitidas por el señor Viteri en cuanto a las condiciones de detención, pues resulta inverosímil que sus abogados patrocinadores no hayan referido esas circunstancias en el marco de su amparo constitucional.

<sup>112</sup> Declaración Wilfrido Recalde.

<sup>113</sup> Acción de Amparo constitucional, demanda sometida el 11 de marzo de 2002 al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito.

<sup>114</sup> Resolución N°239-2002-RA del Tribunal Constitucional de 28 de agosto de 2002.

<sup>115</sup> *Ibidem*.

Cabe señalar también que la CIDH en su informe de fondo determinó que no contaba con elementos suficientes para pronunciarse respecto a las alegadas condiciones precarias de detención:

103. El peticionario alegó que su arresto fue dictado sin garantías y que las condiciones de detención fueron precarias, que se le negó comida y se le impidió dormir, lo cual implicó una violación del artículo 5 de la Convención Americana. Sin embargo, de la prueba aportada en el expediente ante la Comisión no se deriva la existencia de elementos que permitan demostrar lo alegado por el señor Viteri, ni se cuenta con información respecto a la interposición de una denuncia a este respecto a nivel interno. Por esta razón, la Comisión no tiene elementos suficientes para concluir que el Estado violó el derecho a la integridad personal en perjuicio de Julio Viteri con motivo de las condiciones de detención durante la ejecución del arresto de rigor dictado en su contra.<sup>116</sup>

Asimismo, en su decisión de 23 de marzo de 2004, el tribunal de migración de Reino Unido que resolvió la apelación interpuesta por el *Secretary of State for the Home Department*, dio razón al agente que apeló la decisión de otorgar el asilo, al considerar que los alegados malos tratos a los cuales el señor Viteri se quejaba haber sido sometido durante su detención no presentaban la gravedad, “*high severity threshold*”, que justifique se conceda el asilo por ese motivo.<sup>117</sup>

Sobre ese punto, en su ESAP, los representantes de las presuntas víctimas anticiparon que el perito Aguilar iba a producir la prueba faltante respecto a las condiciones de detención:

“[...] tampoco se desprende del proceso ante la Comisión que el Estado Ecuatoriano haya desvirtuado las alegaciones del peticionario sobre los tratos atentatorios contra su integridad personal (falta de alimentación, falta de hidratación, hostigamiento, incomunicación, falta de condiciones de salud e higiene). Al respecto de la carga probatoria, en esta clase de procesos se debe presumir como válidas las alegaciones de las víctimas, especialmente porque existe información suficiente que estas prácticas no era aisladas, al contrario, eran comunes en las detenciones por ciertas faltas, como lo demostraremos mediante el informe pericial que se propone” [Nota al pie: Peritaje del perito propuesto: Dr. Juan Pablo Aguilar]<sup>118</sup>

<sup>116</sup> CIDH, Informe de Fondo.

<sup>117</sup> Decisión del Immigration Appeal Tribunal, de 23 de marzo de 2004.

<sup>118</sup> ESAP.

Sin embargo, en su peritaje, Juan Pablo Aguilar no menciona siquiera las condiciones de detención en el marco de los arrestos de rigor. Así, los representantes de las presuntas víctimas pretenden que la sentencia de la Corte IDH se fundamente exclusivamente en la palabra del señor Viteri.

Asimismo, el objeto de la declaración del señor Recalde, propuesto por los representantes de la presunta víctima tenía que haber declarado sobre “lo que alega escuchó junto a la habitación de Julio Rogelio Viteri Ungaretti respecto de los presuntos castigos a los que habría sido sometido”. De ese titulado se entiende que el señor Recalde habría sido un testigo directo de los alegados malos tratos durante los arrestos de rigor a los cuales fue sometido. Se presumía entonces que el señor Recalde iba a declarar sobre lo que escuchó personalmente, es decir los castigos. Sin embargo, la declaración del señor Recalde en la materia se limita a lo siguiente:

Después de su jornada de trabajo nos sentábamos a conversar e inclusive lo acompañábamos a su dormitorio que quedaba en la parte alta del edificio, el cual no era lo indicado, ya que no reunía las condiciones necesarias para su jerarquía como Oficial de la Armada y él indicaba que cuando regresó de Inglaterra llegó a la ciudad de Quito a presentarse antes [sic] sus superiores, enseguida lo encerraron en un calabozo donde lo propinaban severos castigo [sic] e inclusive no le daban de comer, lo insultaban le deseaban lo peor del mundo la muerte [...]<sup>119</sup>

Lo que el señor Recalde reporta aquí es el relato contado por el señor Viteri. El señor Recalde no es de ninguna forma un testigo de los supuestos castigos que el señor Viteri alega haber sufrido durante su detención, por lo que su declaración en la materia deberá ser desechada.

Así, el relato del señor Viteri respecto a sus condiciones de detención se encuentran sustentadas por ningún elemento probatorio. Por su parte, el Estado ha demostrado que, de manera general, las condiciones de cumplimiento de los arrestos de rigor eran conformes a los estándares exigidos por la Corte IDH, y que, en el caso concreto, las

---

<sup>119</sup> Declaración de Wilfrido Recalde ante fedatario público.

constataciones del médico de la Cruz Roja Ecuatoriana que evaluó al señor Viteri en la habitación en la cual cumplía el arresto de rigor más largo, no correspondían a las alegaciones expuestas en el Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas. Así, el Estado solicita que se aprecie la veracidad de las alegaciones planteadas por el señor Viteri a la luz de los elementos probatorios antes citados.

De lo anterior se desprende que el Ecuador precauteló cualquier eventual vulneración a su integridad y la de su familia, sin que exista denuncia ni prueba de tal afectación, por lo que el Estado ecuatoriano no vulneró las disposiciones del artículo 5 de la CADH sobre la integridad personal.

### **2.3.2. Inexistencia de responsabilidad estatal internacional en cuanto al derecho a la libertad personal (artículo 7 de la CADH)**

El artículo 7 de la CADH garantiza el derecho a la Libertad Personal. Las disposiciones convencionales sobre la libertad personal se encuentran recogidas en el derecho interno, y en particular en la Constitución ecuatoriana vigente al tiempo de los acontecimientos, en sus artículos 23 y 24.<sup>120</sup>

En la Constitución vigente en la actualidad, los principios rectores de la libertad personal se encuentran establecidos en los artículos 66 numeral 29 literales a y c, y el artículo 77.<sup>121</sup>

Así, en virtud de lo anterior, el Estado señala que las normas internas, vigentes en la época de los hechos, al igual que las actuales, permitían la tutela efectiva del derecho a la libertad de los ciudadanos, por lo que el Ecuador no vulneró sus obligaciones convencionales respecto al artículo 7 de la CADH, en relación con el artículo 2 del mismo instrumento.

---

<sup>120</sup> *Ibíd.*

<sup>121</sup> Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, el 20 de octubre de 2008.



Oficio N°01838

Página 55

De hecho, la Constitución del Ecuador contaba con el hábeas corpus y el amparo constitucional, recursos adecuados y eficaces para subsanar el caso ante la presunta vulneración del derecho a la libertad, los cuales fueron interpuestos por los representantes del señor Viteri.

En primer lugar, los representantes del señor Viteri interpusieron una acción de hábeas corpus, en virtud del artículo 93 de la Constitución del Ecuador vigente a la época de los hechos:

Art. 93.- “Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre [...]”<sup>122</sup>

En su resolución de 13 de diciembre de 2001, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito emitió una resolución negando el recurso, al considerar que:

“El artículo 24 numeral 6 de la Constitución Política de la Republica establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad, sino por orden escrita del juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley y de conformidad con la norma constitucional, y en la parte final del mencionado numeral dispone que: **“Se exceptúan los arrestos disciplinarios previstos por la ley dentro de los organismos de la fuerza pública.”**”<sup>123</sup> (Lo resaltado me pertenece)

Así, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, autoridad competente para resolver el hábeas corpus, consideró que el arresto de rigor no vulneraba como tal los principios constitucionales. Además, el artículo 74 de la Ley del Régimen Municipal, el cual establecía que:

De la sustanciación del recurso de hábeas corpus - Art. 74.- “Es, además, deber y atribución del Alcalde, o de quien haga sus veces, hacer efectiva la garantía constitucional del hábeas corpus, sustanciándolo conforme se dispone en los

---

<sup>122</sup> Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 1, el 11 de agosto de 1998.

<sup>123</sup> Resolución de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, de 13 de diciembre de 2001.

siguientes incisos: [...]

**No podrán acogerse a este recurso los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Civil Nacional que sufran arrestos disciplinarios o sean encausados y penados por infracciones de carácter militar o policial.”**<sup>124</sup> (Lo resaltado me pertenece)

Considerando la normativa vigente, el Alcalde negó el recurso de Habeas Corpus planteado. Al respecto, el Estado señala que el señor Viteri tenía la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 276 numeral 3 de la Constitución vigente en la época de los hechos:

Art. 276.- Competerá al Tribunal Constitucional: [...] 3. Conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo, y los casos de apelación previstos en la acción de amparo.<sup>125</sup>

Así, de haber agotado los recursos judiciales disponibles, el señor Viteri hubiera tenido la oportunidad de someter su recurso ante una autoridad judicial, sin embargo, el señor Viteri se abstuvo de interponer la apelación correspondiente, situación que no puede ser atribuible al Estado.

Por otra parte, la acción de amparo constitucional se encontraba prevista en el artículo 95 de la Constitución Política:

“Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias **de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución** o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. [...]”<sup>126</sup>

<sup>124</sup> Artículo 74 de la Ley del Régimen Municipal, publicada en el Registro Oficial Suplemento 331, el 15 de octubre de 1971

<sup>125</sup> Constitución de 1998, artículo 276.

<sup>126</sup> Artículo 95 de la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 1, el 11 de agosto de 1998.

En virtud de la norma antes citada, el recurso de amparo es una medida cautelar cuya finalidad es la protección de los derechos constitucionales que podrían ser vulnerados por un acto u omisión ilegítimo, emitido por una autoridad pública, el cual es susceptible de causar un daño grave.

En el presente caso, el señor Viteri impugnó las tres sanciones disciplinarias de privación de libertad<sup>127</sup> mediante la acción de amparo, solicitando que se dejen sin efecto dichas resoluciones, y que “se ordene que se borre o elimine de mi libro de vida las sanciones”<sup>128</sup>. Como ya lo mencionó el Estado, el recurso del señor Viteri fue negado en primera instancia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, el Tribunal Constitucional dio lugar a su acción de amparo, en segunda instancia. Mediante la Resolución No. 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002<sup>129</sup>, el Tribunal Constitucional consideró que las resoluciones emitidas por la institución militar, por las cuales se pronunciaron tres sanciones disciplinarias de arresto de rigor, eran actos ilegítimos. En su motivación, el Tribunal Constitucional recordó las condiciones por las cuales un acto emitido por una autoridad puede ser considerado ilegítimo:

“[...] un acto se torna ilegítimo cuando proviene de una autoridad que no tiene competencia para realizarlo, o teniendo competencia lo realiza sin respetar los procedimientos propios establecidos por la Constitución o la ley, o cuando ha sido dictado sin suficiente fundamento o motivación, o en definitiva, cuando de manera arbitraria viola el ordenamiento jurídico sustantivo o adjetivo establecido en la legislación ecuatoriana.”<sup>130</sup>

Así, el Tribunal consideró que, en el contexto de los mencionados procesos disciplinarios seguidos en contra del señor Viteri, mediante los cuales se pronunciaron las sanciones de

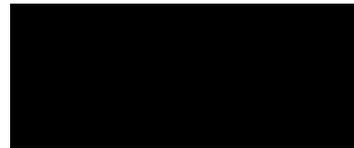
---

<sup>127</sup> Las resoluciones mediante las cuales se pronunciaron los tres arrestos de rigor son las siguientes: Resolución del Comandante General de la Marina comunicada en oficio N° COGMAR-DFJ-014-C de 13 de noviembre de 2001, se le impuso 3 días de arresto de rigor; luego, Resolución del Consejo de Disciplina de 5 de diciembre de 2001 le sancionó con 15 días de arresto de rigor, y Resolución del Comandante de Operaciones Navales y Jefe de la primera Zona Naval le impuso la sanción disciplinaria de 5 días de arresto de rigor.

<sup>128</sup> Acción de amparo suscrita por Rogelio Viteri, y sus abogados, recibida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Quito, el 11 de marzo de 2002.

<sup>129</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

<sup>130</sup> *Ibidem*.



Oficio N°01838

Página 58

3, 15 y 5 días de arresto de rigor, las normas constitucionales del debido proceso fueron vulneradas.

En este sentido, el Tribunal Constitucional resolvió dejar sin efectos los arrestos de rigor pronunciados en contra del señor Viteri, por lo que dichas sanciones fueron eliminadas de su hoja de vida<sup>131</sup>, conforme a su petición<sup>132</sup>. Posteriormente, el 28 de octubre de 2002, la dirección de Personal de la Armada del Ecuador cumplió con la resolución del Tribunal Constitucional, al eliminar dichas sanciones disciplinarias de su libro de vida mediante el acta de modificación N°008.<sup>133</sup>

De lo anterior se desprende que el ejercicio de la acción de amparo permitió al señor Viteri hacer valer sus derechos constitucionales, y resolver la situación jurídica denunciada en cuanto a las sanciones disciplinarias por las cuales estuvo privado de la libertad. Por lo tanto, el Ecuador señala que la controversia en cuanto a la legalidad de los actos de privación de libertad ya fue resuelta de manera adecuada por las autoridades judiciales del Ecuador, por lo que se deberá desestimar la alegación de responsabilidad internacional del Estado respecto al cumplimiento del artículo 7 de la CADH.

En cuanto a las alegaciones relacionadas con las condiciones de detención, el Estado se remite a lo expuesto en el acápite anterior, en el cual se analizó el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto al artículo 5 de la CADH.

### **2.3.3. Inexistencia de vulneración del derecho a la libertad de Pensamiento y de Expresión (artículo 13 de la CADH)**

<sup>131</sup> Libreta de vida naval de CPNV Viteri Ungaretti Julio Rogelio, emitida por la Dirección General del Talento Humano de la Armada del Ecuador, reporte de 1 de diciembre de 2021.

<sup>132</sup> Acción de amparo suscrita por Rogelio Viteri, y sus abogados. Petición recibida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Quito, el 11 de marzo de 2002.

<sup>133</sup> Acta de modificación No. 008 de 28 de octubre de 2002, emitido por la Armada del Ecuador, dirección de Personal, Departamento de Oficiales, suscrito por [REDACTED] Asesor jurídico, [REDACTED], [REDACTED], auxiliar de análisis de personal, [REDACTED], jefe del Departamento, [REDACTED], jefe de la división, [REDACTED], director de personal y [REDACTED], director general de personal de la Armada.



El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de Pensamiento y de Expresión. La libertad de expresión se encuentra plasmada a lo largo del texto constitucional como una garantía y un derecho perteneciente a cualquier individuo en el marco del efectivo goce de sus derechos constitucionales<sup>134</sup>. En este sentido, la Carta Constitucional recoge en su texto, la dimensión individual y social que caracteriza al derecho de libertad de expresión, lo que está contemplado en el artículo 16:

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.<sup>135</sup>

Las normas ecuatorianas vigentes en la época de los acontecimientos respondían precisamente al estándar interamericano, puesto que la Constitución Política protegía y garantizaba el derecho a la libertad de opinión y expresión, en los siguientes términos:

Artículo 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: [...] **9. El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas**, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley.

La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica.

<sup>134</sup> Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia O47-15- SIN-CC. Caso 009-12-IN de 23 de septiembre de 2015.

<sup>135</sup> Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, el 20 de octubre de 2008.

10. El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión.<sup>136</sup>

En la actualidad, el artículo 66 numeral 6 de la Constitución consagra el derecho de libertad de expresión en los siguientes términos:

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: [...] 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”<sup>137</sup>.

Una vez determinado el marco normativo relacionado al derecho de libertad de expresión, se verifica que el ordenamiento jurídico del Ecuador contaba, y sigue contando en la actualidad, con las normas adecuadas para garantizar el goce efectivo del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, de conformidad con las disposiciones convencionales, pero además se comprueba que la normativa interna se acopla con el texto de la Convención Americana, por lo que el Estado cumplió con su obligación de adecuar sus normas al estándar interamericano, tal como lo establece el artículo 2 de la Convención Americana.

En su jurisprudencia, la Corte IDH estableció lo siguiente respecto a la libertad de expresión:

[...] es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre<sup>138</sup>.

En esta línea, el derecho a la libertad de expresión presenta algunas dimensiones. En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende, además, inseparablemente, el

<sup>136</sup> Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 1, el 11 de agosto de 1998.

<sup>137</sup> Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, el 20 de octubre de 2008.

<sup>138</sup> Corte IDH, OC 5/87, párr. 70. También en Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, párr. 85.

derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... procedimiento", está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente<sup>139</sup>.

Por su parte, en su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia<sup>140</sup>.

No obstante, la libertad de expresión no constituye un derecho absoluto, es un derecho que tiene límites, por lo que puede estar sujeta a condiciones o limitaciones. El artículo 13.2 establece dos circunstancias por las cuales el derecho a la libertad de expresión es susceptible de ser restringido:

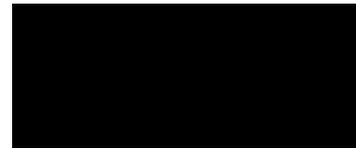
- a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
- b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

En su jurisprudencia, la Corte IDH ha señalado que las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión, establecidas en el artículo 13.2 de la Convención deben cumplir con tres requisitos:

---

<sup>139</sup> Corte IDH. Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 65.

<sup>140</sup> Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr.148.



1. Deben estar expresamente fijadas por ley;
2. Deben estar destinadas a proteger los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral pública;
3. Deben ser necesarias en una sociedad democrática<sup>141</sup>.

Asimismo, el artículo 32.2 de la CADH define las condiciones en las cuales los derechos consagrados en la CADH puedan ser limitados:

Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.<sup>142</sup>

En el caso concreto, el señor Viteri alega que se habría afectado su libertad de expresión. Al respecto, el Estado solicita a la Honorable Corte Interamericana, que se valore que, a la época de los hechos, la denuncia que realizó en contra de los altos mandos militares fue comentada por todos los medios de comunicación en el Ecuador. Solamente en la prensa escrita, se cuentan más de 500 artículos reportando sobre los hechos que fueron el objeto de la denuncia, o directamente sobre la situación profesional y personal del señor Viteri. La señora Alarcón y el señor Viteri dieron varias entrevistas en televisión<sup>143</sup>. Además, el señor Viteri fue llamado a rendir su versión ante el Congreso Nacional, ante la Contraloría General del Estado, ante la Fiscalía General del Estado.

En ese contexto, resulta inaudito que se alegue que se limitó su libertad de expresión si los presuntos delitos denunciados por el señor Viteri y las consecuencias de esa denuncia, fueron temas de los más comentados por los medios de comunicación y toda la sociedad ecuatoriana a la época.

Durante la audiencia ante la Corte, al responder a las preguntas planteadas por el juez Sierra Porto, el señor Viteri declaró lo siguiente:

[Juez Sierra Porto] ¿Cuántas veces ha ido usted a la prensa?

[Rogelio Viteri] Una sola vez. una vez y fue un programa que era igualmente de mucha acogida exclusivamente hablando sobre lo que fue[..]

<sup>141</sup> Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 120 y caso Tristán Donoso vs. Venezuela, párr. 110.

<sup>142</sup> Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 32.

<sup>143</sup> Declaración ante Fedatario Público de la señora Alarcón, Declaración del señor Viteri en la audiencia.



[Juez Sierra Porto] ¿Qué programa? ¿en qué consistía?

[Rogelio Viteri] Era de televisión, [...] Cero Tolerancia se llamaba el programa. Era conducido por un periodista que todavía tiene una acogida muy muy fuerte en el Ecuador, Carlos Vera, que me ha contactado varias veces para intentar hablar conmigo yo no hablo con él [...].

[Juez Sierra Porto] ¿En esa ocasión usted contó todo lo que nos está diciendo acá?

[Rogelio Viteri] Absolutamente con mayor detalle quizás.

[Juez Sierra Porto] ¿Cuáles fueron las repercusiones de esa declaración? ¿Hubo editoriales, hubo denuncia sobre la corrupción en el ejército? ¿qué pasó? ¿cuál fue la repercusión que tuvo esa declaración?

[Rogelio Viteri] Fue una situación no solamente por mi declaración, sino ya cuando se conoció en el Ecuador, yo guardo en mis recortes varias carpetas con todo que se publicó en todos los medios de comunicación del Ecuador. Incluso, era tan grande la apreciación hacia la acción que yo había hecho de la gente del Ecuador, porque la gente estaba cansada de ver que habían actos inmorales, y no había quien diga nada, incluso me tentaron a que yo me convirtiera en político y yo dije “yo no hago esto porque quiero ser político, yo hago esto porque es un acto netamente de conciencia y porque estoy dejando” [...] <sup>144</sup>

El señor Viteri reconoció ante la Corte IDH que, en medios de comunicación con muy altos índices de audiencia, pudo exponer su caso, y según él, inclusive con mayor detalle que lo que el tribunal interamericano le permitió. La sociedad ecuatoriana tenía una opinión fundamentalmente positiva de las acciones del señor Viteri, y le apoyaba. Su popularidad llegó a tal punto que, según él, le habrían ofrecido participar como actor político.

El señor Viteri obtuvo numerosos reconocimientos por parte de la sociedad ecuatoriana, como lo manifiesta en su carta a la opinión pública suscrita en julio de 2002 <sup>145</sup>:

<sup>144</sup> Audiencia Pública ante la Corte IDH de 20 de marzo de 2023.

<sup>145</sup> ANEXO 11. Carta de 1 de julio de 2002, suscrita por el señor Viteri y dirigida a la opinión pública ecuatoriana.

**En el plano positivo,** debemos ampliar expresando nuestra imperecedera gratitud a las miles de personas, que de manera espontánea, a lo largo y ancho del país, nos expresaron sus mensajes de solidaridad, con frases muy emotivas y sinceras, **demonstrando que hemos ganado la guerra.** A los miembros en servicio activo y pasivo de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. A los miembros en servicio activo y pasivo de la Policía Nacional. A nuestros hermanos, los tripulantes infantes de marina en servicio activo y pasivo. A los más de 6000 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Central del Ecuador, quienes estamparon su firma dándonos su apoyo. A los casi niños del Colegio Politécnico de Quito, ustedes son la muestra de que el Ecuador quiere un futuro sano.....háganlo. Al Concejo Provincial del Cotopaxi y al Municipio de Latacunga por sus mensajes y reconocimiento. A la Coordinadora Política de Mujeres. A la Unión Nacional de Periodistas, Nucleo del Guayas, por su homenaje. A la ciudad de Vinces por su acogida. A quienes nos enviaron sus mensajes de apoyo desde la Amazonía, de las Nacionalidades Indígenas y de las comunidades Afroecuatorianas. Al apoyo con cadenas de oración de las Iglesias Católicas, Cristianas y Evangélicas. A los adolescentes que nos arrancaron lágrimas de emoción. A la Defensoría del Pueblo, organismo probo. A la empresa aérea ICARO, por su apoyo y trato cordial. A los organismos de protección de los Derechos Humanos. A diferentes **Organizaciones no Gubernamentales (CARE, JATUN SACHA, ECOCIENCIA, CUMAS y otras)**

En ese contexto, el Estado rechaza el argumento según el cual el señor Viteri habría sido limitado en su libertad de expresión.

Los representantes de las presuntas víctimas alegan lo siguiente:

101. Esencialmente, el Estado ecuatoriano vulneró el derecho de libertad de expresión de Rogelio Viteri en dos momentos distintos. El primero, al sancionar a la víctima por supuestamente violar al Reglamento de Disciplina Militar, en razón de su denuncia de actos de corrupción. El segundo, al requerir a la víctima que obtenga una autorización previa, por parte de autoridades militares superiores, para difundir sus denuncias, ideas y opiniones en los medios de comunicación.

146

A continuación, el Estado analizará las dos pretensiones antes citadas, respecto a la alegada vulneración del derecho a la libertad de expresión a raíz de las sanciones disciplinarias, por una parte y a raíz de la necesidad para un miembro de las Fuerzas

<sup>146</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 101.

Armadas de obtener una autorización previa para dirigirse a los medios de comunicación sobre aspectos de sus actividades militares, por otra parte.

Respecto a las sanciones disciplinarias, alegada represalia por la denuncia de supuestos actos de corrupción

Respecto a las sanciones disciplinarias que, según los representantes del señor Viteri, habrían vulnerado su derecho a la libertad de expresión, cabe reiterar que dichas sanciones fueron dejadas sin efecto, y por lo tanto no tienen existencia legal desde el año 2002.

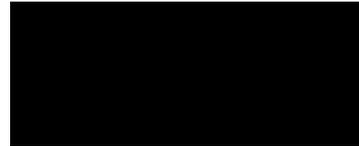
El Estado recuerda que mediante la Resolución No. 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002<sup>147</sup>, el Tribunal Constitucional resolvió el amparo constitucional interpuesto por el señor Viteri a su favor al considerar que las resoluciones emitidas por la institución militar, por las cuales se pronunciaron tres sanciones disciplinarias de arresto de rigor, eran actos ilegítimos. En su motivación, el Tribunal Constitucional recordó las condiciones por las cuales un acto emitido por una autoridad puede ser considerado ilegítimo:

“[...] un acto se torna ilegítimo cuando proviene de una autoridad que no tiene competencia para realizarlo, o teniendo competencia lo realiza sin respetar los procedimientos propios establecidos por la Constitución o la ley, o cuando ha sido dictado sin suficiente fundamento o motivación, o en definitiva, cuando de manera arbitraria viola el ordenamiento jurídico sustantivo o adjetivo establecido en la legislación ecuatoriana.”<sup>148</sup>

Así, el Tribunal consideró que, en el contexto de los mencionados procesos disciplinarios seguidos en contra del señor Viteri, mediante los cuales se pronunciaron las sanciones de 3, 15 y 5 días de arresto de rigor, las normas constitucionales del debido proceso fueron vulneradas.

<sup>147</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

<sup>148</sup> *Ibíd.*



**Oficio N°01838**

Página 66

En este sentido, el Tribunal Constitucional resolvió dejar sin efectos los arrestos de rigor pronunciados en contra del señor Viteri, por lo que dichas sanciones fueron eliminadas de su hoja de vida<sup>149</sup>, conforme a su petición<sup>150</sup>. Posteriormente, el 28 de octubre de 2002, la dirección de Personal de la Armada del Ecuador cumplió con la resolución del Tribunal Constitucional, al eliminar dichas sanciones disciplinarias de su libro de vida mediante el acta de modificación N°008.<sup>151</sup>

Los obstáculos que podrían haber afectado a la libertad de expresión del señor Viteri, al establecer sanciones que afecten su carrera militar ante su denuncia, fueron removidos por el Tribunal Constitucional. Sus oportunidades de ascenso fueron reestablecidas en el estado en el cual estaban antes de la denuncia por actos de corrupción. El Tribunal Constitucional declaró la vulneración de sus derechos constitucionales, y declaró también la necesidad de control judicial sobre los actos administrativos emitidos por las autoridades militares.

En tal virtud, las autoridades judiciales nacionales ya resolvieron la controversia relativa a las sanciones disciplinarias, dejándoles sin efectos, al constatar la vulneración de derechos constitucionales en perjuicio del señor Viteri. Por lo tanto, la pretensión planteada en cuanto a la vulneración del derecho a la libertad de expresión por la imposición de las sanciones disciplinarias es improcedente, dado que estos actos ya no tienen existencia legal en el ámbito interno.

#### Otras supuestas afectaciones a su carrera militar

<sup>149</sup> Libreta de vida naval de CPNV Viteri Ungaretti Julio Rogelio, emitida por la Dirección General del Talento Humano de la Armada del Ecuador, reporte de 1 de diciembre de 2021.

<sup>150</sup> Acción de amparo suscrita por Rogelio Viteri, y sus abogados. Petición recibida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Quito, el 11 de marzo de 2002.

<sup>151</sup> Acta de modificación No. 008 de 28 de octubre de 2002, emitido por la Armada del Ecuador, dirección de Personal, Departamento de Oficiales, suscrito por [REDACTED], Asesor jurídico, [REDACTED] auxiliar de análisis de personal, [REDACTED], jefe del Departamento, [REDACTED], jefe de la división, [REDACTED], director de personal y [REDACTED], director general de personal de la Armada.

El señor Viteri alega que, además de los arrestos de rigor que fueron cancelados, habrían existido otras sanciones que afectaron a su carrera militar, específicamente, el cese de sus funciones en la Agregaduría en Londres, la postergación de su participación a un curso para ascenso, y la alegada suspensión de su sueldo.

Respecto al cese de sus funciones en la Agregaduría, cabe señalar que las funciones de agregado de defensa ante el Reino Unido y como representante permanente del Ecuador ante la Organización Marítima Internacional fueron atribuidas por el período de 18 meses, a partir del 18 de agosto de 2000.<sup>152</sup> Por lo tanto, el señor Viteri hubiera tenido que regresar a otras funciones dentro de la Fuerza Naval a partir del 18 de febrero de 2002, es decir que su tiempo en dichas funciones se acortó por apenas 2 meses.

Además, el Estado señala que las funciones asumidas por un agregado de defensa corresponden a una actividad de representación de un Estado en el exterior, siendo así, las autoridades militares consideraron que el escándalo público generado a raíz de la difusión en la prensa nacional e internacional de la denuncia del señor Viteri, no le permitirían ejercer sus funciones de representación del Ecuador en el exterior con serenidad. El cese de sus funciones no era una sanción pues, no era susceptible de afectar su carrera militar, y no disminuyó su puntaje para el ascenso. Por otro lado, el señor Viteri tenía que declarar ante las autoridades nacionales que estaban investigando los hechos que había denunciado, es decir, tenía que entregar la documentación recabada y participar de la investigación. En efecto, el señor Viteri fue llamado a declarar ante el Congreso Nacional, la Comisión Cívica anti-Corrupción, la Contraloría General del Estado etc. En esas condiciones, su presencia en el Ecuador era indispensable, e incompatible con el ejercicio de funciones en el exterior.

Respecto la postergación de su participación al curso, requisito para el ascenso, es importante notar que, en su decisión respecto al recurso de amparo constitucional, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre ese punto, determinando lo siguiente:

---

<sup>152</sup> ANEXO 12. Acción de personal del señor Viteri de 2 de agosto de 2000.

[...] a folio 55 del expediente puede verse el oficio No. DIGPER-DIR-084 de 8 de febrero de 2002, suscrito por el señor Director General del Personal, en el que se remite información sobre el XXI Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto en el INAGUE, indicando al Capitán Rogelio Viteri que su asistencia al curso se encuentra postergada, lo que **bajo ningún concepto puede considerarse una sanción, ni que le ocasione un daño grave en definitiva puesto que el Capitán Rogelio Viteri tendrá la oportunidad de realizar tal curso en otra ocasión**, por lo que no se trata de un acto ilegítimo [...] <sup>153</sup>. [Lo resaltado me pertenece]

La postergación al curso no era una sanción, puesto que no era susceptible de generar una afectación a su carrera militar. En su peritaje, el señor Aguilar indica que, el ascenso debe producirse en el tiempo determinado que corresponde a la permanencia en su grado.<sup>154</sup> Conforme a las disposiciones del artículo 118 de la entonces vigente Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, el tiempo de permanencia en el grado para un capitán de navío era de 6 años<sup>155</sup>. Según consta en su hoja de vida militar, el señor Viteri accedió al grado de capitán de navío el 20 de diciembre de 1998, por lo que tenía que ascender al grado superior hasta diciembre del 2004, a falta de lo cual hubiera sido separado de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, a la época de los hechos, esto es a principio del año 2002, el señor Viteri **hubiera tenido todavía 2 años para realizar dicho curso**.

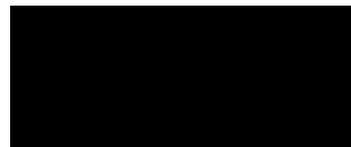
En un documento oficial, el entonces Ministro de Defensa manifestó lo siguiente respecto a las supuestas afectaciones a la carrera militar:

- a. El nombramiento de Agregado Naval y por consiguiente la cancelación del mismo, en primer lugar, constituye un pase o trasbordo, al que de acuerdo con la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, están sujetos todos los miembros en servicio activo de la Institución Armada y en segundo lugar era necesaria su presencia en el país, para que pueda comparecer ante los organismos de control de justicia que es de conocimiento público.
- b. La suspensión como alumno al Curso de Estado Mayor Conjunto, igualmente está previsto en el Reglamento de Instituto Nacional de Guerra, cuando por necesidades del servicio no es posible su asistencia, aclarando que dentro del tiempo de permanencia en su grado, lo puede efectuar en cualquier momento y el

<sup>153</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

<sup>154</sup> Peritaje Juan Pablo Aguilar.

<sup>155</sup> Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, artículo 118.



Oficio N°01838

Página 69

mando consideró conveniente que sea llamado al curso programado para el presente año por las circunstancias constantes en el literal anterior.<sup>156</sup>

En ese sentido, la inconformidad del señor Viteri con esos actos emitidos por la institución militar no constituyen vulneración a derechos humanos.

En lo que corresponde al cargo que el señor Viteri asumió a su regreso de Londres, en Guayaquil, durante la audiencia pública, se alegó lo siguiente:

[Sierra Porto] Usted aquí me ha señalado que cuando llegó, lo colocaron a realizar una actividad que no era adecuada con el cargo. ¿En qué consistió la retaliación que usted recibió en su honor, en su familia por el hecho de haber denunciado este tipo de circunstancias?

[Rogelio Viteri] [...] Qué reparto me asignaron, un reparto que no tiene para nada que ver con mi información profesional; que es la junta de calificación junta de calificación para lidiar con quienes quieren ser conscriptos en el Ecuador, eso no tiene nada que ver con mi preparación profesional a cargo de un Coronel del ejército que era el único que manejaba todo porque él tenía la tenía el control absoluto de lo que sucedía en ese organismo militar, es decir, a mí me pusieron en un rincón con un escritorio y no hacía absolutamente nada, entonces un desperdicio de recurso humano increíble. ¿Qué hago aquí?, mientras tanto incluso oficiales con menos antigüedad que yo, estaban de directores en la Armada [...] <sup>157</sup>

Cabe aclarar que, a su retorno de Londres, el señor Viteri fue designado como Jefe del Centro de Movilización Occidental de Guayaquil. Al respecto, el entonces Ministro de Defensa manifestó que:

En lo que respecta a la situación del mencionado oficial, es la de encontrarse en servicio activo, cumpliendo funciones en un cargo que de acuerdo al Reglamento Orgánico Estructural, le corresponde a su grado y jerarquía.<sup>158</sup>

<sup>156</sup> ANEXO 13. Oficio No. 020506-MS-7-1 de 4 de abril de 2002, suscrito por [REDACTED], Ministro de Defensa Nacional, dirigido a [REDACTED], Defensor del Pueblo encargado.

<sup>157</sup> Audiencia pública ante la Corte IDH, de 20 de marzo de 2023.

<sup>158</sup> Oficio No. 020506-MS-7-1 de 4 de abril de 2002, suscrito por [REDACTED], Ministro de Defensa Nacional, dirigido a [REDACTED], Defensor del Pueblo encargado.



**Oficio N°01838**

Página 70

Por lo tanto, las apreciaciones del señor Viteri en cuanto a la oportunidad de su designación como Jefe del Centro de Movilización Occidental de Guayaquil, tienen que ser apreciadas a la luz de lo expresado por el Ministro antes citado.

Respecto al cese de funciones, la suspensión provisional de su participación al curso, y su designación en nuevas funciones, el Estado demostró que esas decisiones no pueden ser consideradas de ninguna forma como sanciones, ni susceptibles de causar un daño a la carrera militar del señor Viteri, como lo determinó el Tribunal Constitucional en su sentencia de 28 de agosto de 2002.

El Tribunal Constitucional se pronunció respecto a las supuestas afectaciones a la carrera militar, determinando que no se asemejaban a sanciones susceptibles de generar un daño grave a la carrera del señor Viteri.

#### Respecto a un eventual efecto intimidatorio de las alegadas amenazas

Aunque los representantes de las presuntas víctimas no lo aleguen, con relación a un eventual efecto intimidatorio que las alegadas amenazas podrían haber tenido sobre el ejercicio de la libertad de expresión, el Estado considera relevante recalcar nuevamente que no existe prueba alguna de la existencia de dichas amenazas. Para contrastar las alegaciones de las presuntas víctimas, a continuación, el Estado se referirá a cuatro circunstancias que, consideradas en conjunto, permiten evidenciar que el supuesto temor generado a raíz de las alegadas amenazas no tiene sustento alguno.

En primer lugar, el señor Viteri nunca denunció las alegadas amenazas antes las autoridades competentes para que sean investigadas. En segundo lugar, las alegadas amenazas nunca se materializaron, es decir la integridad personal del señor Viteri y de su familia nunca fue efectivamente vulnerada. Además de ello, se desprende de la impugnación de los actos mediante los cuales se pronunció su disponibilidad y baja que, a todas luces, el señor Viteri tuvo la intención de regresar al Ecuador y reanudar sus actividades dentro de la institución militar desde el año 2003, lo que cuestiona la realidad

del supuesto temor generado por los hostigamientos que el señor Viteri alega haber sufrido, puesto que resulta sorprendente que una persona tenga el proyecto de volver a un país en el cual dice temer por su seguridad e incluso su vida y la de su familia. Por último, desde que establecieron su residencia en otro país, el señor Viteri y su esposa regresaron en múltiples ocasiones al Ecuador, por estadias de muy larga duración, e incluso algunos años pasando más tiempo en el territorio ecuatoriano que en el país de su residencia. Así, las alegaciones de los representantes de las presuntas víctimas según los cuales el temor y las amenazas se habrían mantenido hasta la presente fecha, impidiendo su regreso a su país de origen, contrasta con los múltiples viajes antes descritos, y la absoluta tranquilidad de la cual la pareja Viteri Alarcón parece gozar cuando se encuentra en el Ecuador, puesto que hasta la fecha no se ha registrado nunca una denuncia por parte de ellos respecto a amenazas a su integridad.

Sin perjuicio de lo anterior, y aunque el temor manifestado no esté justificado en lo absoluto, hasta su salida voluntaria del territorio ecuatoriano, la seguridad e integridad personal del señor Viteri y de su familia se encontraban garantizadas, frente a la situación de peligro alegada, puesto que las autoridades nacionales brindaron a la familia Viteri Alarcón protección policial con cinco agentes de seguridad acompañándoles tanto en Quito como en Guayaquil. Por lo tanto, el Estado rechaza las alegaciones según las cuales no habría tomado medidas para precautelar la seguridad del señor Viteri y de sus familiares.

De lo anterior se desprende que las alegadas amenazas no pueden ser tomadas en cuenta como posible afectación a la libertad de expresión, por el efecto intimidatorio que habrían tenido, puesto que la existencia misma de estos hostigamientos no ha sido comprobada, y que el Estado ha brindado varios elementos que permiten rebatir estas alegaciones.

Respecto a la normativa militar que limita el ejercicio de la libertad de expresión para los miembros de las Fuerzas Armadas.

Los representantes de la presunta víctima alegan que se habría vulnerado su derecho a la libertad de expresión por la existencia de una normativa militar que exige que los miembros de las Fuerzas Armadas soliciten autorización para dirigirse a los medios de comunicación. En la época de los hechos, el señor Viteri era militar en servicio activo, por lo que se encontraba sometido a las normas aplicables a tal condición. En efecto, las Fuerzas Armadas cuentan con normas propias, las cuales permitan que se garantice el cumplimiento de su misión fundamental, tal como se encontraba definida en el artículo 183 de la Constitución:

“Art. 183.- La fuerza pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. **Su misión, organización, preparación, empleo y control serán regulados por la ley.**

**Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico.**

Además de las Fuerzas Armadas permanentes, se organizarán fuerzas de reserva, según las necesidades de la seguridad nacional.

La Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden públicos. Constituirá fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional. Estará bajo la supervisión, evaluación y control del Consejo Nacional de Policía, cuya organización y funciones se regularán en la ley. La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el desarrollo social y económico del país.”<sup>159</sup>

Respecto a los miembros de la Fuerza Pública, el artículo 186 de la Constitución establecía que:

“Art. 186.- **Los miembros de la fuerza pública tendrán las mismas obligaciones y derechos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que establecen la Constitución y la ley.**

Se garantizan la estabilidad y profesionalidad de los miembros de la fuerza pública. No se los podrá privar de sus grados, honores ni pensiones sino por las causas y en la forma previstas por la ley.”<sup>160</sup>

<sup>159</sup> Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 1, el 11 de agosto de 1998.

<sup>160</sup> *Ibidem*.



Oficio N°01838

Página 73

Así, los miembros de las Fuerzas Armadas se encontraban sujetos al Reglamento de Disciplina Militar, emitido el 7 de agosto de 1998, mediante Acuerdo ministerial No. 831. El artículo primero del Reglamento establecía que:

“Las fuerzas Armadas, para el cumplimiento de su misión de seguridad y servicio a la Patria, exigen de sus miembros una disciplina severa, estricta y consciente, que se traduce en el fiel cumplimiento del deber.”<sup>161</sup>

El artículo 2 del Reglamento define el concepto básico de la disciplina militar:

“La disciplina militar consiste en la exacta observancia de las leyes y reglamentos establecidos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y el acatamiento integral de las órdenes y disposiciones emanadas del superior.”<sup>162</sup>

Sobre el ejercicio de la libertad de expresión, el artículo 29 del Reglamento de Disciplina Militar establece que:

**“Cualquier militar puede hacer publicaciones de prensa, radio, televisión o en otro medio de comunicación, previa autorización del Comandante General de Fuerza, observando las prescripciones que se establecen en los artículos siguientes”**<sup>163</sup>

El artículo 45 literal k), en concordancia con los artículos 10 y 72 literal c) [FALTAS GRAVES] del Reglamento de Disciplina Militar señalaban:

**Art. 45.- FALTAS GRAVES:**

**k) Efectuar publicaciones o declaraciones en los medios de comunicación relacionadas con los actos del servicio militar sin la correspondiente autorización.**

Art. 10.- Es obligación de todo superior prevenir la consumación de faltas disciplinarias; en consecuencia, deberá ejercer constante vigilancia sobre la conducta y comportamiento de sus subordinados dentro y fuera de la Institución Armada, para mantener su prestigio y disciplina.

<sup>161</sup> Reglamento de Disciplina Militar, emitido el 7 de agosto de 1998, mediante Acuerdo ministerial No. 831, por el entonces ministro de Defensa Nacional, [REDACTED] y el entonces Subsecretario de Defensa Nacional, [REDACTED].

<sup>162</sup> Ibídem.

<sup>163</sup> Reglamento de Disciplina Militar, emitido el 7 de agosto de 1998, mediante Acuerdo ministerial No. 831, por el entonces ministro de Defensa Nacional, [REDACTED] y el entonces Subsecretario de Defensa Nacional, [REDACTED].



Art. 72.- FALTAS GRAVES:

c) Arresto de rigor de UNO a NUEVE días.<sup>164</sup>

Así, de conformidad con las normas antes citadas, los miembros de las Fuerzas Armadas son libres de opinar y expresar su pensamiento en todos los medios de comunicación, sin embargo, las características de la institución militar exigen que obtengan previamente la autorización del Comandante General de la Fuerza antes de emitir sus criterios en la prensa.

Conforme a la jurisprudencia interamericana, conviene realizar un análisis de proporcionalidad para evaluar si esa limitación al ejercicio de la libertad de expresión para los militares es conforme a los estándares interamericanos. A continuación, el Estado evaluará la legalidad, la finalidad y la necesidad de esa restricción.

En primer lugar, respecto a la **legalidad** de la restricción del derecho a la libertad de expresión, el Estado señala que las disposiciones antes citadas que son extraídas del Reglamento de Disciplina Militar<sup>165</sup> surgen en aplicación de las facultades concedidas por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas publicada en el Registro Auténtico 1990 de 28 de septiembre de 1990, cuyo artículo 15 literal c) señalaba:

Art. 15.-Las principales atribuciones y obligaciones del Ministro de Defensa Nacional, son (...)

c) Expedir los reglamentos internos de aplicación general en las tres Ramas de las Fuerzas Armadas, así como los reglamentos internos de cada Fuerza.<sup>166</sup>

Al respecto, en el caso Flor Freire vs. Ecuador, la Corte IDH señaló, por ejemplo, que las sanciones impuestas fueron dictadas con base en una norma legal más general. Así señaló:

<sup>164</sup> *Ibíd.*

<sup>165</sup> Reglamento de Disciplina Militar, emitido el 7 de agosto de 1998, mediante Acuerdo ministerial No. 831, por el entonces ministro de Defensa Nacional, [REDACTED] y el entonces Subsecretario de Defensa Nacional, [REDACTED].

<sup>166</sup> Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, publicada en el Registro Oficial Suplemento 660, el 10 de abril de 1991.

La Corte ha establecido que, en materia disciplinaria sancionatoria, ciertos conceptos abiertos o indeterminados como la “mala conducta”, pueden ser precisados en cuanto a su interpretación o contenido por vía reglamentaria o jurisprudencial, de forma tal de evitar la excesiva discrecionalidad en el uso de dichos supuestos. En virtud de lo anterior, la Corte no encuentra que el simple hecho de que la conducta sancionada fuera precisada en el Reglamento de Disciplina Militar infrinja el principio de legalidad.<sup>167</sup>

Conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, el hecho de que la restricción del ejercicio de la libertad de expresión sea precisada en el Reglamento de Disciplina Militar no infringe el principio de legalidad. También es importante señalar que la conducta sancionada estaba redactada sin frases inexactas o ambiguas, al contrario, establecían claramente la existencia de la falta disciplinaria: efectuar publicaciones o declaraciones en los medios de comunicación relacionadas con los actos del servicio militar sin la correspondiente autorización. Esa falta debidamente especificada en un instrumento normativo, preveían una sanción.

En este sentido, al estar establecido por ley la potestad reglamentaria y al no existir la ambigüedad que señalan los representantes, en el presente caso se cumplió con el requisito de legalidad que permite establecer una restricción a la libertad de expresión.

Con respecto a la **finalidad de la restricción** a la libertad de expresión, de conformidad con el artículo 13.2 de la CADH, ésta debe ser destinada a proteger los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral pública.

En ese sentido, la existencia de la reserva impuesta a los miembros de las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de cumplir con su misión fundamental de conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico, misión establecida en el artículo 183 de la Constitución vigente a la época de los hechos, antes citado. La obligación de reserva tiene como finalidad impedir la divulgación de informaciones confidenciales, garantizar la autoridad y mantener el orden y unidad institucional, componentes esenciales del buen

---

<sup>167</sup> Corte IDH, Caso Flor Freire vs. Ecuador, Sentencia de 31 de agosto de 2016, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148.



Oficio N°01838

Página 76

funcionamiento de las Fuerzas Armadas, para asegurar el cumplimiento adecuado de su misión antes señalada. En ese sentido la finalidad perseguida de esta regla es conforme a las disposiciones del artículo 13.2 de la CADH y la jurisprudencia en la materia.

Respecto a la **absoluta necesidad de esa restricción**, el Estado señala que los militares no son los únicos servidores públicos que deben someterse a una obligación de reserva según el ordenamiento jurídico vigente. Así según el artículo 42 de la Ley Orgánica de Servicio Público, se considera como una falta leve el “uso indebido de medios de comunicación”, susceptible de ser sancionada con una amonestación verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa.<sup>168</sup>

Respecto a la obligación de reserva que rige en la función pública, en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, especialmente en el caso Vogt, la Corte estableció que un Estado podían legítimamente someter a condiciones, la libertad de expresión de los funcionarios públicos, en razón de su estatuto, exigiendo de ellos que cumplan con una obligación de reserva<sup>169</sup>. El mismo Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su artículo 10 § 2, establece que el ejercicio de la libertad de expresión puede ser sujeto a restricciones:

**“El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones,** previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.”<sup>170</sup>

Al respecto, en el contexto del caso Vogt, la Corte Europea estableció que:

<sup>168</sup> Ley Orgánica de Servicio Público, publicada en el Registro Oficial Suplemento 294, el 6 de octubre de 2010.

<sup>169</sup>Corte Europea de Derechos Humanos, Vogt c. Alemania, de 2 de septiembre de 1996 p.30, §64.

<sup>170</sup> Convenio Europeo de Derechos Humanos artículo 10 § 2.

“[...] al ejercer su control, la Corte tiene que tomar en cuenta que cuando la libertad de expresión de los funcionarios se encuentra afectada, los “deberes y responsabilidades” referidos en el artículo 10 § 2 conllevan una importancia especial que justifica dejar un margen de apreciación a las autoridades nacionales para juzgar si la injerencia denunciada es proporcionada al objetivo legítimo”.<sup>171</sup>

En este sentido, la Corte Europea ha aplicado el criterio antes indicado en el caso *Rekvenyi contra Hungría*<sup>172</sup>, en el contexto del cual un miembro de la policía invocaba la existencia de una vulneración de la libertad de expresión (artículo 10 del Convenio) y de la libertad de reunión y asociación (artículo 11 del Convenio), porque una ley prohibía a los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas, los magistrados, y los fiscales que se afilien a un partido político o que participen en actividades políticas. Al respecto, la Corte Europea estableció que la restricción a dichas libertades se encontraba justificada, y reconoció que el rol que llevaba la policía en la sociedad, constituía un objetivo legítimo que sus miembros conserven neutralidad frente a temas políticos<sup>173</sup>.

En el contexto del presente caso, el Estado señala que existe la necesidad de mantener la disciplina militar y jerarquizada, pues desde la misma definición del derecho militar la doctrina la destaca como un especialísimo valor que singulariza a la vida castrense, y que precisamente, constituye un objeto o materia que se proyecta a la regulación jurídica. En efecto, como indica Alejandro Carlos Espinosa:

El derecho militar es la rama de la ciencia jurídica que se encuentra inspirada en la existencia de la sociedad armada, la que a su vez se funda en el **principio de la disciplina, elemento que otorga cohesión y eficacia a las Fuerzas Armadas**; por tanto el derecho militar se ocupa del estudio correspondiente a la

<sup>171</sup> Corte Europea de Derechos Humanos, *Vogt c. Alemania*, de 2 de septiembre de 1996, § 53 texto original en francés: “*Il revient donc à la Cour, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 10 § 2. En exerçant ce contrôle, la Cour doit tenir compte du fait que, quand la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 revêtent une importance particulière qui justifie de laisser aux autorités nationales une certaine marge d’appréciation pour juger si l’ingérence dénoncée est proportionnée » à l’objectif légitime.*”

<sup>172</sup> Corte Europea de Derechos Humanos, *Caso REKVÉNYI c. Hungría* (Petición n° 25390/94) Sentencia de 20 de mayo de 1999 <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62814>.

<sup>173</sup> *Ibidem*, § 46, texto original en francés: “*Compte tenu du rôle de la police dans la société, la Cour a reconnu qu’avoir des forces de police politiquement neutres constitue un but légitime pour toute société démocratique.*”

conformación y funcionamiento de las instituciones armadas, su normatividad y el cabal cumplimiento de la disciplina castrense<sup>174</sup> [Lo resaltado me pertenece].

Respecto a la preservación del buen funcionamiento de la institución militar a través de la disciplina, la doctrina determina que:

La disciplina militar, por tanto, es expresión de aquella obediencia al ordenamiento jurídico y a las órdenes superiores, que permite el cumplimiento de los fines y funciones de las instituciones armadas y que funciona como un factor moral y funcional que dota de unidad, cohesión y coherencia a la actividad militar<sup>175</sup>.

Como dice el autor Juan Carlos Benalcázar, la disciplina militar corresponde a un elemento esencial de la unidad y cohesión de la institución, que permite a las Fuerzas Armadas cumplir con sus fines y funciones.

La disciplina militar está recogida en algunos instrumentos normativos de países de la región. Por ejemplo, en Colombia, la Ley 1862 de 2017, por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar, señala:

Artículo 3°. Disciplina militar. Es el conjunto de normas de conducta que el militar debe observar en el ejercicio de su carrera, **condición esencial para la existencia de las Fuerzas Militares.**

Es el factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Militares como regla de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas; contrarresta los efectos disolventes de la lucha, crea íntima cohesión y permite al superior exigir y obtener del subalterno que las órdenes sean ejecutadas con exactitud y sin vacilación. Implica la observancia de las normas y órdenes que consagra el deber profesional. [Lo resaltado me pertenece]<sup>176</sup>

<sup>174</sup> Espinosa, Alejandro Carlos, Derecho militar mexicano, 3a. ed., México, Porrúa, 2005, p. 3.

<sup>175</sup> Benalcázar, Juan Carlos, Fundamentos jurídicos de la disciplina militar, UNAM, s.f.

<sup>176</sup> Ley 1862 de 2017 - Código Disciplinario Militar Colombiano, publicado en el Diario Oficial, año CLIII. N. 50315 de 4 agosto de 2017, pág. 11.



Además, en esta Ley se establece como falta el hecho de realizar publicaciones en la prensa, de acuerdo con el artículo 77:

Art. 77.- Son faltas:

**14. Realizar publicaciones sobre asuntos militares por medio de prensa, radio, televisión o cualquier otro medio, sin autorización.** [Lo resaltado me pertenece]

En Perú se aborda la disciplina militar mediante la Ley No. 29131 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que señala:

Art. 2.- Disciplina militar

**La disciplina es condición esencial para la existencia de toda Institución Militar.** Permite al Superior exigir y obtener del subalterno, bajo cualquier circunstancia, la ejecución de las órdenes impartidas y el cumplimiento de los deberes militares. Se articula en razón del mandato y la obediencia, y debe realizarse dentro de las atribuciones del Superior y las obligaciones y deberes del subalterno. Su finalidad es posibilitar el cumplimiento de la misión, objetivos o tareas trazados en las Instituciones Armadas.

Los medios para encauzar la disciplina son preventivos y sancionadores.

Los medios preventivos se utilizan para conservar, mantener y vigorizar la disciplina. Se ejecutan mediante evaluaciones, difusión de deberes, obligaciones y otorgamiento de estímulos. Estos son dispuestos por cada Superior Jerárquico en función de la conducta del subordinado.

Los medios sancionadores se aplican en caso de quebrantamiento de la disciplina militar.<sup>177</sup>

Art. 13.- Clasificación de las infracciones

Las infracciones disciplinarias en que incurre el Personal Militar se clasifican en:

a. Leve

Es toda acción u omisión que implica una trasgresión al régimen disciplinario militar y que no afecta en forma significativa al Servicio, a la Unidad, Dependencia o Institución. La relación de infracciones leves y sus sanciones se encuentran en el Anexo I.

b. Grave

Es toda acción u omisión que representa una mayor trasgresión del régimen disciplinario militar afectando de forma significativa al Servicio, a la Unidad, Dependencia o Institución. También lo es la mala conducta habitual. La relación de infracciones graves y sus sanciones se encuentran en el Anexo II.

c. Muy Grave

<sup>177</sup> Ley No. 29131 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas Peruanas, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" No. 357034 de 9 de noviembre de 2007.



Oficio N°01838

Página 80

Es toda acción u omisión que afecta muy gravemente al Servicio, Unidad, Dependencia o Institución y puede implicar el cambio de la situación militar del personal investigado. La relación de infracciones muy graves y sus correspondientes sanciones se encuentran en el Anexo III.<sup>178</sup>

### ANEXO III. INFRACCIONES MUY GRAVES

**III.6.2. Permitir el acceso a la documentación oficial a personal ajeno a la Unidad / Dependencia con riesgo de la seguridad o de las operaciones militares. La sanción es de 6 días a 15 días de arresto de rigor.**

III.10.1. Expresarse públicamente mal de la Institución / Instituciones Armadas. La sanción es de 6 a 15 días de arresto de rigor. [Lo resaltado me pertenece]<sup>179</sup>

Lo anterior ilustra la importancia del respeto de la disciplina militar para asegurar el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas y el cumplimiento de su misión, y también el hecho de que la obligación de reserva de los militares se encuentra recogida en varias otras normativas de la región, regla que tiene como propósito fomentar la unidad y cohesión en el seno de las instituciones militares latinoamericanas.

Así, al amparo de lo citado, el Estado recalca que la diferencia que existe entre el ejercicio de la libertad de expresión por los miembros de las fuerzas armadas y por los civiles, se justifica por los deberes y responsabilidades especiales que la vida militar conlleva, y la necesidad de mantener el buen funcionamiento de la institución militar, por lo que esa limitación a la libertad de expresión es estrictamente necesaria al cumplimiento de su función de protección de la seguridad nacional, la integridad territorial y seguridad pública.

Los miembros de las Fuerzas Armadas son sujetos a un régimen específico que les impone solicitar una autorización previa antes de pronunciarse públicamente sobre aspectos de su servicio. Del análisis anterior se desprende que esa limitación a la libertad de expresión es conforme a los estándares interamericanos toda vez que cumple con el requisito de legalidad, persigue un fin legítimo y es absolutamente necesaria.

<sup>178</sup> *Ibíd.*

<sup>179</sup> Ley No. 29131 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas Peruanas, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" No. 357034 de 9 de noviembre de 2007.

Cabe aclarar que el señor Viteri no fue impedido de dirigirse a la prensa, es más, en una de las entrevistas que dio, el 2 de abril de 2002 al diario El Telegrafo, el señor Viteri agradeció al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por permitirle expresarse sobre el efecto que habría tenido su denuncia sobre su situación personal y familiar:

“Gracias a Dios, la posibilidad me la ha dado el señor General Oscar Isch de poder expresarme sobre la situación personal y familiar, sin topar absolutamente los temas de seguridad nacional. Eso ha sido aceptado y por esa razón es que ya puedo hablar públicamente desde el viernes pasado.”<sup>180</sup>

De lo anterior se evidencia que la afirmación según la cual el señor Viteri habría sido “silenciado” es falsa. Las palabras expresadas libremente en la prensa por el señor Viteri a la época de los hechos son claras al indicar que las Fuerzas Armadas le autorizaron a expresarse sobre el caso, bajo la condición que se precautele la seguridad nacional, que constituye el fin legítimo que dicha limitación persigue.

Los representantes del señor Viteri pretenden que el acceso ilimitado a los medios de comunicación sería la única forma de luchar en contra de la corrupción. En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes sostienen que:

Esto, el mantener la disciplina militar, si bien puede considerarse, en principio un objetivo razonable, no es un fin ilegítimo [se entiende que quisieron escribir “legítimo”] cuando esto implica el silenciamiento de las denuncias frente a actos de corrupción.<sup>181</sup>

Ahora bien, la restricción de la libertad de expresión en los medios de comunicación de militares sometidos a una obligación de reserva, no impide de ninguna forma a los denunciantes de actos de corrupción de denunciar ante la autoridad competente, es decir ante la Fiscalía General del Estado, entidad pública a cargo de llevar a cabo la

---

<sup>180</sup> ANEXO 14. Diario El Telegrafo de 2 de abril de 2002, entrevista del señor Viteri “Viteri rompe silencio”, por Patricio González Recalde.

<sup>181</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, parr. 119.

investigación penal e iniciar la persecución de los presuntos responsables, o la Policía Judicial, de acuerdo con la normativa vigente en la época de los hechos:

Art. 42.- Denuncia.- La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella a quien la ley se lo prohíbe, puede presentar su denuncia ante el Fiscal competente o ante la Policía Judicial.<sup>182</sup>

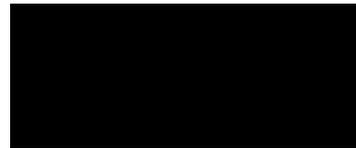
Así, todo ciudadano que considere que se haya cometido un delito, tiene la posibilidad de presentar una denuncia, a fin de poner los hechos alegados en conocimiento de las autoridades competentes, para que dichos hechos sean investigados y que se ejerza la acción pública correspondiente. Sin embargo, los representantes del señor Viteri pretenden ignorar la posibilidad que su representado tenía de denunciar formalmente los alegados actos de corrupción ante la autoridad competente, al señalar que “no existía, y aún no existe, un mecanismo de reporte seguro que permita la presentación de denuncias en el marco del servicio público”<sup>183</sup>. Esa afirmación es falsa, como será demostrado en el acápite consagrado al análisis del artículo 2 de la CADH dentro del presente escrito. Los representantes pretenden que el acceso ilimitado a los medios de comunicación era la única forma de luchar contra la corrupción, y justifican su teoría rechazando la posibilidad que el señor Viteri tenía de someter sus alegaciones al conocimiento de las autoridades competentes.

Al respecto, vale resaltar el artículo 33 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, citado por los propios representantes en su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, que establece lo siguiente en cuanto a la protección de los denunciantes de actos de corrupción:

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las **personas que denuncien ante las autoridades competentes**, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos

<sup>182</sup> Código de Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 360, el 13 de enero de 2000.

<sup>183</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 131.



Oficio N°01838

Página 83

relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.<sup>184</sup> [Lo resaltado me pertenece]

Así, la normativa internacional dispone que los denunciantes de actos de corrupción deben someter sus acusaciones ante las autoridades competentes.

La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, también citada por los propios representantes, adopta la misma lógica, en un caso de limitación de la libertad de expresión de un funcionario público sometido a una obligación de reserva. Se trata del caso Guja vs. Moldavia en el cual la Corte Europea, como bien la citaron los representantes, determina que:

[...] es importante establecer si la persona en cuestión, al divulgar la información, ha actuado de buena fe y con la convicción de que la información era auténtica, si la divulgación servía al interés general y **si el autor disponía o no de medios más discretos para denunciar las actuaciones en cuestión.** [Lo resaltado me pertenece]<sup>185</sup>

Además, cabe referirse a otro párrafo de la misma sentencia de la Corte Europea, en el cual se precisa el concepto antes descrito:

73. Teniendo en cuenta la obligación de discreción antedicha, es importante que la persona en cuestión proceda a la divulgación, en primer lugar, ante su superior u otra autoridad o instancia competente. **La divulgación al público no debe considerarse mas que como último recurso, en caso de imposibilidad manifiesta de actuar de otro modo** (ver, Haseldine vs. Reino Unido, no 18957/91, decisión de la Comisión de 13 de mayo de 1992, Décisions et rapports (DR) 73). Por tanto, para juzgar el carácter proporcionado o no de la restricción impuesta a la libertad de expresión del demandante en este caso concreto, **el Tribunal debe examinar si el interesado disponía de otros medios efectivos para poner remedio a la situación que consideraba criticable.**<sup>186</sup> [Lo resaltado me pertenece]

<sup>184</sup> Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

<sup>185</sup> Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Guja vs. Moldavia, No. 14277/04, Sentencia de 12 de febrero de 2008, párr. 77.

<sup>186</sup> Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Guja vs. Moldavia, No. 14277/04, Sentencia de 12 de febrero de 2008, párr. 73.

Así, según la jurisprudencia internacional referida por los propios representantes de las presuntas víctimas, la divulgación de información al público, por parte de un funcionario sometido a una obligación de reserva, debe darse como último recurso, cuando no existan “medios más discretos” para para denunciar las conductas o actos indebidos, aun cuando la información serviría el interés general. Ahora bien, en el caso concreto, tratándose de delitos tipificados en la normativa penal, es evidente que existían otros medios para someter al conocimiento de las autoridades los actos de corrupción, a parte de la divulgación de información a la prensa.

Tanto la normativa como la jurisprudencia internacional señalan que las denuncias de actos de corrupción, emitidas por personas sometidas a una obligación de reserva o no, debe realizarse ante las autoridades competentes, y no ante medios de comunicación.

En ese sentido, es sorprendente que los representantes de las presuntas víctimas citen esas mismas referencias, sin por ello concluir que lo adecuado era dirigirse en primer lugar a las autoridades competentes para recibir denuncias y actuar frente a estas, en vez de someter acusaciones a medios de comunicación.

El Estado insiste que la limitación del derecho a la libertad de expresión en medios de comunicación para los militares no les impide denunciar actos de corrupción; tal es así que, a manera de ejemplo, se anexa información de la Armada del Ecuador, en la que constan casos de presuntos actos de corrupción en los cuales se activaron mecanismos para investigar irregularidades en el manejo de recursos públicos<sup>187</sup>. En cada uno de esos procesos investigativos se impuso sanciones previstas previamente e incluso se derivó el conocimiento a instituciones como la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado, para que actúen en el marco de sus competencias, ya sea iniciando una investigación penal o un examen especial, respectivamente. Esa información

---

<sup>187</sup> Oficio Nro. ARE-INSGAR-PME-2021-0088-O de 14 de diciembre de 2021.

demuestra que la institución militar no prohíbe el escrutinio necesario para luchar contra la corrupción susceptible de generarse en sus filas.

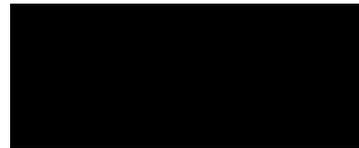
Por lo tanto, el Estado señala que la obligación de reserva de los militares antes analizada, cumple con los requisitos previstos en los artículos 13.2 y 32.2 de la CADH, y con la jurisprudencia interamericana, y, además, que esta restricción a la libertad de expresión no afecta de ninguna forma la posibilidad que tenía cualquier ciudadano, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas, de denunciar actos de corrupción ante las autoridades competentes. De hecho, como será analizado en el acápite consagrado al artículo 2 de la CADH, en la actualidad las personas que tengan conocimiento de la comisión de un acto de corrupción tienen la obligación legal de presentar una denuncia ante la autoridad competente, que sean militares, funcionarios públicos o ciudadanos comunes.

De lo anterior se desprende que las sanciones disciplinarias impuestas al señor Viteri no tienen existencia legal desde el año 2002, que la realidad de los supuestos hostigamientos sufridos a raíz de la denuncia de actos de corrupción no fue comprobada por los representantes del señor Viteri, que la obligación de reserva impuesta a los militares es conforme a los estándares interamericanos y no impide que se denuncien actos de corrupción ante las autoridades competentes, elementos que permiten concluir que no se configura la vulneración del derecho a la libertad de expresión en el presente caso.

#### **2.3.4. Inexistencia de vulneración del derecho a la protección de la familia, contemplado en el artículo 17 de la CADH.**

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla el derecho a la protección de la familia.

Por un lado, se debe precisar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de fondo No. 8/20, no concluyó en que el Estado ecuatoriano haya presuntamente vulnerado el derecho a la protección de la familia, en los términos que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares



internacionales relacionados al artículo 17.<sup>188</sup> Igualmente, resaltar que los representantes de las presuntas víctimas no han alegado la supuesta vulneración de este derecho a lo largo del proceso sustanciado ante CIDH.

Por otro lado, los representantes de las presuntas víctimas alegan que:

198. Además, el proceso de refugio y de asilo político tuvieron graves implicaciones en la dimensión moral y psíquica de la familia Viteri Alarcón. Específicamente la angustia de la familia por el constante hostigamiento que provocó su salida. La desesperación de la separación de su núcleo familiar, de su lugar de origen, así como la impotencia de no poder mantener sus relaciones de familia en su lugar de residencia habitual.

200. En este sentido el estado ecuatoriano no cumplió con la obligación de protección a la familia y los derechos del niño, en términos del numeral primero del artículo 17 de la CADH, ya que no se brindó las medidas de protección adecuadas para la familia, incluida esposa, suegra e hijos, quienes en ese momento eran menores de 18 años; como resultado de los abusos relatados y la inexistencia de normativa y de un sistema que de protección de denunciantes de actos de corrupción. Los actos de hostigamiento generaron la separación de la familia. (...).<sup>189</sup>

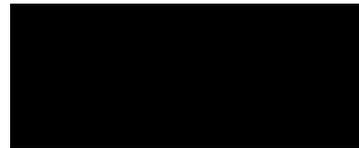
Al respecto, el Estado ecuatoriano insiste en que el Tribunal interamericano tome en cuenta los argumentos expuestos acerca del derecho a la integridad personal, en donde se evidenció que el señor Viteri Ungaretti y su familia, fueron beneficiarios de protección policial mientras se encontraban en el Ecuador. Esto, en el marco de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 11 de febrero de 2002 por un período de seis meses, y las cuales, quedaron sin efecto tras su salida a Reino Unido en junio de 2002.<sup>190</sup>

De este modo, en lo que concierne al derecho contemplado en el primer numeral del artículo 17 y que la familia debe ser protegida por el Estado, se debe recalcar que en cuanto

<sup>188</sup> CIDH, Informe de fondo No. 8/20, Caso No. 12.999 Julio Rogelio Viteri Ungaretti y Familia, 03 de marzo de 2020, OEA/Ser.L/V/II.175.

<sup>189</sup> Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de septiembre de 2021.

<sup>190</sup> CIDH, Informe de admisibilidad No. 36/15, petición No. 717-05 Julio Rogelio Viteri Ungaretti y Familia, 22 de julio de 2015, OEA/Ser.L/V/II.155, Doc. 15.



Oficio N°01838

Página 87

a las medidas de protección que adoptó el Estado ecuatoriano con la familia del señor Viteri Ungaretti, se refleja que:

El 18 de febrero del 2002, el Mayor de Policía [REDACTED], Comandante del Grupo de Intervención y Rescate, mediante oficio 239-GIR-PN, informe al señor Procurador General del Estado que “en cumplimiento del memorando No. 2002-0574-CG, de fecha 15 de febrero del 2002, se dispuso a un señor Oficial y cuatro señores Policías tanto en el GIR – Quito como en el GIR – Guayas, para que brinden protección y seguridad al señor Capitán de Navío Rogelio Viteri y su familia.<sup>191</sup>

Más adelante, el 05 de julio del 2002, el Comandante del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional (GIR), reportó al Comandante General las actuaciones emprendidas a fin de brindar protección al señor Viteri Ungaretti y su familia. Así, señaló que:

- a) El Grupo de Intervención y rescate del IV Distrito de la PPNN, empieza a brindar protección y seguridad al Sr. Cap. Rogelio Viteri, desde el 13 de febrero del 2002, hasta el 07 de junio del 2002, fecha en la cual viajó a la ciudad de Quito, en uso de vacaciones.
- b) Se le asignaron 2 Srs. Oficiales y 4 de Persona, en un vehículo de esta Unidad para su protección durante todos los desplazamientos en esta ciudad. (...) <sup>192</sup>

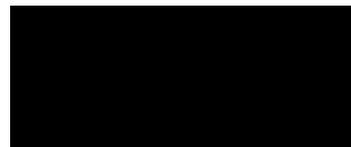
En el mismo reporte, el GIR detalló el cronograma de actividades diseñadas y emprendidas bajo la causa de “Protección y Seguridad Personal al Señor Capt. De Navío Rogelio Viteri U.”<sup>193</sup>, en el que se menciona el acompañamiento a los distintos lugares a los que acudía la presunta víctima y su familia. Todas estas actividades identificadas con hora y fecha, así como el personal policial a cargo de brindar seguridad, dan cuenta de la oportuna actuación estatal a fin de salvaguardar la integridad del señor Viteri Ungaretti y su familia.<sup>194</sup>

<sup>191</sup> Procuraduría General del Estado, Oficio No. 22974, 01 de marzo de 2002, contestación a la CIDH en el marco de las medidas cautelares.

<sup>192</sup> Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, Oficio No. 1128-GIR-IV-D-PN, del 05 de julio del 2002, suscrito por el Mayor de Policía, Ab. [REDACTED].

<sup>193</sup> Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, Fax No. 5934275992, Cronograma de actividades suscrito por el Subteniente de Policía, [REDACTED], el 17 de septiembre de 2002.

<sup>194</sup> *Ibíd.*



Oficio N°01838

Página 88

Ahora bien, en cuanto a la protección de la familia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en el caso Norín Catrimán que:

404. La Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Asimismo, ha afirmado que implica el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, así como también que los Estados tienen obligaciones positivas a favor del respeto efectivo de la vida familiar. El Tribunal también ha reconocido que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia.<sup>195</sup>

Conforme el estándar citado y los antecedentes expuestos sobre las medidas de protección instauradas por el Estado ecuatoriano, se logra inferir que internamente se articuló con la institución pública competente, GIR de la Policía Nacional, para que miembros policiales brinden seguridad tanto al señor Viteri, como a su familia. Estas medidas de protección se extendieron a todas las actividades que realizaban, tales como traslados a aeropuertos, visitas a universidades y traslado a su domicilio.<sup>196</sup>

En consecuencia, la actuación de los agentes estatales no solo dio cumplimiento a la resolución de la CIDH, sino que también, se ajustó a lo señalado por el presente tribunal, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las presuntas víctimas y dar efectivo cumplimiento a lo previsto en la CADH.

Del mismo modo, la jurisprudencia interamericana establece que el derecho a la protección de la familia también implica que:

276. (...) corresponde a las autoridades estatales que toman conocimiento de una situación de riesgo especial, identificar o valorar si la persona objeto de amenazas y hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir a la autoridad

---

<sup>195</sup> Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279, Párrafo 404.

<sup>196</sup> Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, Fax No. 5934275992, Cronograma de actividades suscrito por el Subteniente de Policía, [REDACTED], el 17 de septiembre de 2002.

competente para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo información oportuna sobre las medidas disponibles.<sup>197</sup>

En relación a esto, conforme se expone en el oficio No. 22974 de la Procuraduría General del Estado, el 18 de febrero del 2002, a penas el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional tuvo conocimiento del riesgo de las presuntas víctimas, y de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, se dispuso a un señor Oficial y cuatro señores policías que “brinden protección y seguridad al señor Capitán de Navío Rogelio Viteri y su familia”.<sup>198</sup>

Es decir, bajo lo previsto por la Corte IDH a lo largo de su jurisprudencia correspondiente a la intervención oportuna del Estado frente a la situación de riesgo de una persona y que esto, sea por parte de autoridad competente, lo anterior expuesto refleja que el departamento de la Policía Nacional encargado de brindar mecanismos para salvaguardar la integridad de las presuntas víctimas actuó de manera pronta, buscando mitigar el riesgo que pudiera existir entorno al señor Viteri y su familia. Por tanto, no se logra configurar la vulneración del derecho contemplado en el artículo 17, numeral 1 de la CADH.

Paralelamente, el Estado ecuatoriano también ha tomado nota de lo señalado por el tribunal interamericano en el caso V.R.P., V.P.C. y otros vs Nicaragua, en sentido de que:

311. (...) la separación de niñas, niños y adolescentes de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una violación de su derecho a la familia reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana<sup>391</sup>, toda vez que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de familia.<sup>199</sup>

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas mencionan que el señor Viteri y su esposa “tuvieron que enviar a sus hijos con

---

<sup>197</sup> Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370., Párrafo 276.

<sup>198</sup> Procuraduría General del Estado, Oficio No. 22974, 1 de marzo de 2002, contestación a la CIDH en el marco de las medidas cautelares.

<sup>199</sup> Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350., Párrafo 311.

amigos en territorio extranjero para velar por su seguridad”<sup>200</sup>. Esa alegación da a entender que los hijos del señor Viteri habría tenido que movilizarse a un país extranjero, a cargo de “amigos”. Pero la versión que las presuntas víctimas dieron en sus declaraciones más recientes es bien distinta, toda vez que Michelle y Sebastián permanecieron en el Reino Unido, donde ya habían vivido por 16 meses, permanecieron en su escuela, y en la misma casa, al cuidado de su abuela, hasta que sus padres regresaron a Inglaterra en junio de 2002.

Además, tal y como se expuso en el presente escrito acerca del derecho de circulación y de residencia, previsto en el artículo 22 de la CADH, las presuntas víctimas han podido ingresar libremente al territorio ecuatoriano, de manera que el Estado no generó obstáculos que impida la convivencia entre el señor Viteri y su esposa con sus hijos. Del mismo modo, los presuntos actos de hostigamiento que mencionan en el Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, no han logrado ser justificados, toda vez que, no presentaron ninguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado sobre esta situación.

Por tanto, al no quedar corroborado que existía un contexto de amenaza en contra de la familia del señor Viteri Ungaretti, no se puede argumentar que el Estado obstruyó el disfrute mutuo de convivencia en su familia. Siendo así que, la decisión de que los hijos del señor Viteri se queden en el exterior, constituyó una decisión de voluntad propia, situación que no puede ser atribuida a la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano, por presunta vulneración del derecho contemplado en el artículo 17 de la CADH.

En consecuencia, conforme los argumentos expuestos previamente, se logra evidenciar que el Estado emprendió de manera diligente mecanismos de protección para el señor Viteri Ungaretti y su familia a nivel nacional, de modo que, no existe un argumento fáctico o jurídico que permita inferir la vulneración del derecho a la protección a la familia, en los términos del artículo 17 de la CADH. Y como resultado, se ilustra ante

---

<sup>200</sup> Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de septiembre de 2021.

este tribunal la no existencia de responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano en relación al derecho en cuestión.

Finalmente, considerando que los otros numerales del artículo 17 de la CADH, refieren a la conformación de la familia y reconocimiento de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, situación que no ocurre en el presente caso, no presenta mérito para ser analizado en este escrito. Por tanto, no se constituye la responsabilidad internacional de Ecuador en relación del artículo 17, por los numerales 2, 3, 4 y 5 de aquel.

### **2.3.5. Inexistencia de vulneración de los derechos del niño (artículo 19 de la CADH).**

La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege los derechos del niño.

Al respecto, los representantes de las presuntas víctimas alegan que:

199. Existe una relación directa entre las vulneraciones de la que fue víctimas Rogelio Viteri y la vulneración al derecho a la protección a la familia y los derechos del niño, consagrados en los artículos 17 y 19 de la CAHD.

200. En este sentido el estado ecuatoriano no cumplió con la obligación de protección a la familia y los derechos del niño, (...), ya que no se brindó las medidas de protección adecuadas para la familia, incluida esposa, suegra e hijos, quienes en ese momento eran menores de 18 años; (...).<sup>201</sup>

En cuanto a los derechos del niño, la Corte IDH debe tomar en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de fondo No. 8/20, no concluyó en que el Estado ecuatoriano haya presuntamente vulnerado este derecho.<sup>202</sup> Y que, su presunta vulneración tampoco ha sido alegada por los representantes de las presuntas víctimas en el estudio del caso ante la CIDH. Además, su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas no expone una argumentación que permita inferir los actos

---

<sup>201</sup> Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de septiembre de 2021.

<sup>202</sup> CIDH, Informe de fondo No. 8/20, Caso No. 12.999 Julio Rogelio Viteri Ungaretti y Familia, 03 de marzo de 2020, OEA/Ser.L/V/II.175.

cometidos por el Estado, ni tampoco establecer responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos del niño.

Así, tal y como se expuso anteriormente en lo relativo a la protección de la familia, el Estado reitera que las medidas de protección brindada por el GIR de la Policía Nacional, fueron previstas y ejecutadas tanto para el señor Viteri, para su esposa y para sus hijos. Es decir, se precauteló los derechos de los niños, hijos del señor Julio Viteri y la señora Alarcón.

Además, considerando la estrecha relación entre los derechos contemplados en los artículos 17 y 19 de la CADH, alegada por las presuntas víctimas, el Estado ecuatoriano recalca que una vez que se ha evidenciado la no vulneración del derecho a la protección de la familia, no existe relación alguna que pueda derivar en la vulneración de los derechos del niño.

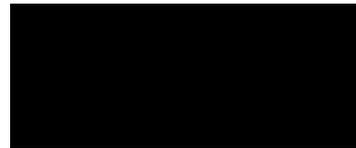
No obstante, considerando que la Corte IDH ha establecido en su jurisprudencia que, este derecho exige del Estado:

220. [...] la protección especial derivada del artículo 19 deberá proyectarse sobre los procedimientos judiciales o administrativos en los que se resuelva sobre sus derechos, lo cual implica una protección más rigurosa del artículo 8 y 25 de la Convención. Además, la Corte ya determinó en otros casos que existe una relación entre el derecho a ser oído y el interés superior del niño, pues es a partir de esta relación que se facilita el papel esencial de los niños en todas las decisiones que afecten su vida.<sup>203</sup>

Frente a esto, y conforme se lo ha expuesto en el presente escrito, el señor Julio Viteri y su esposa, en calidad de representantes legales de Michelle Viteri Alarcón y Sebastián Viteri Alarcón, no interpusieron ningún recurso en sede interna por la alegada situación de peligro en la que presuntamente se encontraban. Así, no se presentó una denuncia ante Fiscalía General del Estado y tampoco se activó el mecanismo del Sistema de Protección y Asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal de la misma institución.

---

<sup>203</sup> Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, Párrafo 220.



De este modo, el Estado ecuatoriano contaba con los procedimientos judiciales para brindar atención y protección de niños, niñas y adolescentes en situación de peligro, si así lo requirieran. Sin embargo, estos no fueron incoados por las presuntas víctimas, de modo que no se puede pretender que la inactividad procesal del señor Viteri y su familia, se extienda a la responsabilidad internacional del Estado.

Por otra parte, considerando que el presente tribunal ha establecido que los Estados están obligados no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, y que, la separación de su familia constituye, un trasgresión a sus derechos.<sup>204</sup> El Estado ecuatoriano reitera el argumento de que no emprendió actuaciones arbitrarias para separar a los adolescentes, Michelle Viteri Alarcón y Sebastián Viteri Alarcón, de su familia, sino que más bien, fue decisión voluntaria de las presuntas víctimas el mantenerlos en el extranjero.

Lo anterior, se relaciona estrechamente con el estándar previsto en el caso de la Familia Pacheco Tineo vs Bolivia, en lo relativo a “la no injerencia ilegal o arbitraria en la vida familiar de los niños y niñas, pues la familia tiene un rol esencial en su desarrollo”.<sup>205</sup> En consecuencia, conforme los argumentos previos, se evidencia que el Estado ecuatoriano, al no ejercer actos de injerencia de manera arbitraria e ilegal en contra de la familia del señor Viteri Ungaretti, no ha vulnerado el derechos de su hijo e hija, conforme el artículo 19 de la CADH y por lo tanto, no es responsable internacionalmente.

### **2.3.6. Inexistencia de vulneración del derecho de circulación y de residencia (artículo 22 de la CADH)**

El artículo 22 de la CADH garantiza el derecho de circulación y de residencia. El propio artículo 22 en su numeral 3 determina que el derecho de circulación y residencia no constituye un derecho absoluto, puesto que su ejercicio puede verse restringido en virtud

---

<sup>204</sup> Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272.

<sup>205</sup> *Ibidem*. Párrafo 227.

de una ley, dentro de una sociedad democrática que persiga prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. El artículo 30 de la CADH establece el alcance de las restricciones susceptibles de ser aplicadas al ejercicio de los derechos y libertades establecidas en la Convención, en los siguientes términos:

**Artículo 30. Alcance de las Restricciones**

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.<sup>206</sup>

Específicamente respecto a las restricciones del derecho de circulación y residencia, en su sentencia del caso *Álvarez Ramos vs. Venezuela*, la Corte IDH ha determinado que:

172. En este sentido, la Corte ha establecido que el derecho de circulación y residencia, incluido el derecho a salir del país, puede ser objeto de restricciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.3 y 30 de la Convención. No obstante, para establecer tales restricciones los Estados deben observar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.<sup>207</sup>

De conformidad con el artículo 2 de la CADH, el Ecuador adoptó normas pertinentes para garantizar el goce del derecho de circulación y de residencia, en el ordenamiento jurídico interno. Así, el numeral del artículo 23 de la Constitución Política vigente a la época de los hechos, preveía que:

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: [...] 14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia. Los ecuatorianos gozarán de libertad para entrar y salir del Ecuador. En cuanto a los extranjeros, se estará a lo dispuesto en la ley. La prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por juez competente, de acuerdo con la ley.<sup>208</sup>

<sup>206</sup> Convención Americana sobre Derechos Humanos.

<sup>207</sup> Corte IDH, Caso *Álvarez Ramos vs. Venezuela*, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas 30 de agosto de 2019, párr. 172.

<sup>208</sup> Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 1, el 11 de agosto de 1998.

En la actualidad, el artículo 66 numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de circulación y residencia en los siguientes términos:

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: [...] 14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente.<sup>209</sup>

En virtud de esas normas constitucionales se evidencia que el Estado garantizaba, y sigue garantizando, el derecho a transitar libremente por el territorio y a escoger su residencia, de conformidad con las disposiciones del artículo 22 de la CADH, por lo tanto, el Estado no ha vulnerado su obligación convencional de adecuar las normas internas al estándar interamericano.

En el caso concreto, los representantes de las presuntas víctimas invocan una supuesta vulneración del artículo 22 de la CADH por dos causas: porque el señor Viteri habría sido supuestamente obligado a abandonar el Ecuador, y por haber sido traslado de una ciudad a otra, dentro de sus funciones como miembro de las Fuerzas Armadas, como se desprende de las alegaciones contenidas en su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas:

186. Es así como el estado ecuatoriano ha vulnerado el derecho a la libre residencia y circulación debido que las circunstancias provocadas por el Estado obligaron a Rogelio Viteri y su familia, a salir del país a por razones ajenas a su voluntad e inclusive solicitar asilo en otro Estado. [...]

187. Por lo tanto, la vulneración a este derecho es evidente en el escenario de desplazamiento forzado. [...]

189. Por otro lado, el artículo 22.1 de la CADH consagra la libertad de las personas para desplazarse dentro de su territorio de residencia y elegir residir en el mismo con sujeción a sus leyes. Sin embargo, el estado ecuatoriano vulneró dicha libertad. Esto ocurría cuando el Alto Mando de las fuerzas armadas ordenaba, de forma arbitraria y como medio de amedrentamiento, a Rogelio Viteri trasladarse a distintos lugares.

---

<sup>209</sup> Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, el 20 de octubre de 2008.



En ese sentido, a continuación, el Estado analizará esas dos pretensiones, demostrando que la restricción del derecho de circulación y residencia del personal militar es legítima y conforme a los estándares interamericanos (a), y que los representantes de las presuntas víctimas no demuestran que el señor Viteri y su familia hayan sido forzados a salir y a permanecer fuera del Ecuador (b).

- a. La restricción del derecho de circulación y residencia del personal militar es legítima y conforme a los estándares interamericanos.

Cabe recordar que ser parte de las Fuerzas Armadas implica responsabilidades y deberes específicos que derivan de su misión, la cual se encuentra definida en la Constitución del 1998, en el artículo 183, segundo párrafo:

Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico.<sup>210</sup>

Cumpliendo con la misión de las Fuerzas Armadas antes citada, sus miembros se someten voluntariamente a condiciones de residencia más restrictivas que la población civil, condiciones que son inherentes a sus funciones, puesto que, en el contexto de su carrera profesional, los militares están sujetos a prestar servicio en distintos lugares del país y del mundo. Así, los traslados de los militares de un reparto a otro son parte integral de la vida militar, e incluso constituyen un requisito para poder beneficiar de un ascenso.

En ese sentido, la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, vigente desde la época de los hechos y hasta la actualidad, en su Título Octavo “Derechos y Obligaciones del Personal Militar de las Fuerzas Armadas Permanentes”, Capítulo I “De los Pases”, rige los traslados de los militares, los cuales se denominan “pases”:

---

<sup>210</sup> Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 1, el 11 de agosto de 1998.



Oficio N°01838

Página 97

Art. 161.- Pase, es el traslado de un militar de una Unidad o Reparto a otro, sujetándose a las normas previstas en esta Ley.<sup>211</sup>

La Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, en su artículo 162, determina las causas por las cuales los pases militares podrán realizarse:

Art. 162.- Los pases militares se realizarán por las siguientes causas:

- a) Para cubrir las vacantes previstas en el Reglamento Orgánico;
- b) Por solicitud del interesado, que hubiere permanecido por lo menos dos años en la misma Unidad; o, por calamidad doméstica, debidamente justificada;
- c) Para que el militar cumpla con su requisito de ascenso; y,
- d) Las demás previstas en esta misma Ley.<sup>212</sup>

De esta forma, el Estado demuestra que la limitación impuesta al personal militar respecto a su derecho de libre circulación, y derecho de escoger su lugar residencia se encuentra prevista en una normativa de rango legal, con claridad y precisión, cumpliendo con el requisito de legalidad exigido por la normativa convencional y la jurisprudencia interamericana. Además, la limitación al derecho de circulación y residencia del personal militar responde al objetivo legítimo de cumplir con la misión fundamental de las Fuerzas Armadas de conservación de la soberanía nacional, defensa de la integridad e independencia del Estado y garantía de su ordenamiento jurídico, fines que son conformes a las restricciones aceptadas al derecho de circulación y residencia, determinadas en los artículos 22 numeral 3 y 30 de la CADH.

Ahora bien, consta de uno de los escritos sometidos ante la CIDH dentro del proceso de fondo, que el entonces peticionario expuso lo siguiente:

“[...] al ordenar al Sr. Viteri, sin justificación alguna, a movilizarse continuamente de una ciudad a otra, y de un país a otro, se vulneró su derecho a la libre circulación y residencia ya que como militar no estaba en posición de desafiar esas órdenes perjudicando incluso a su patrimonio.”<sup>213</sup>

<sup>211</sup> Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, publicada en el Registro Oficial Suplemento 660, el 10 de abril de 1991.

<sup>212</sup> *Ibidem*.

<sup>213</sup> Escrito del peticionario remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo de 2016.

Sobre esas alegaciones, es preciso señalar que, al igual que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, el señor Viteri ha sido trasladado a varios repartos durante su carrera profesional, como se desprende de su hoja de vida, emitida por la Dirección General de Recursos Humanos de la Armada del Ecuador<sup>214</sup>. Dichos pases militares no son, de ninguna manera, un “medio de amedrentamiento”, como lo afirman los representantes de las presuntas víctimas en su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, sino que responden al cumplimiento de las necesidades institucionales de las Fuerzas Armadas. Como se desprende de su hoja de vida militar, el señor Viteri fue trasladado de Londres a Guayaquil, tras el cese de sus funciones como Agregado Naval en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido, sin embargo, ese pase, por ser el único que fue ordenado en el período de los hechos alegados, no podría constituir un cambio constante o anormal del lugar de residencia, como lo pretenden los representantes de las presuntas víctimas.<sup>215</sup>

Además, el Estado señala que, como militar en servicio activo, el señor Viteri salió del Ecuador, por períodos largos de tiempo, a varios países incluso Brasil, los Estados Unidos, y últimamente al Reino Unido como agregado naval, situación respecto de la cual los representantes de las presuntas víctimas no manifiestan que se habría afectado su derecho de circulación y residencia<sup>216</sup>.

Por lo anterior, el Estado solicita que se aprecie la situación del señor Viteri a la luz de las obligaciones específicas que son parte de la vida militar, y que se declare que la limitación del derecho de circulación y residencia del personal militar, en el contexto analizado, es conforme a los estándares interamericanos en la materia.

b. Sobre el alegado desplazamiento forzado

---

<sup>214</sup> Libreta de vida naval de CPNV Viteri Ungaretti Julio Rogelio, emitida por la Dirección General del Talento Humano de la Armada del Ecuador, reporte de 1 de diciembre de 2021.

<sup>215</sup> *Ibidem*.

<sup>216</sup> *Ibidem*.

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas alegan que la supuesta falta de acción por parte del Estado para detener las alegadas vulneraciones a derechos humanos habría sido la causa de su salida del Ecuador el 10 de junio del 2002, invocando que la situación del señor Viteri y su familia correspondería a un desplazamiento forzado.<sup>217</sup>

Respecto a las circunstancias susceptibles de propiciar un desplazamiento forzado, cabe referirse a la jurisprudencia de la Corte IDH que estableció lo siguiente:

[...] el derecho de circulación y de residencia puede resultar afectado cuando una persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos provienen de actores no estatales.<sup>218</sup>

En el mismo sentido, la Corte IDH ha determinado lo siguiente:

Asimismo, la Corte ha indicado que la falta de una investigación efectiva de hechos violentos puede propiciar o perpetuar un exilio o desplazamiento forzado.<sup>219</sup>

En el caso concreto, como ya se ha expuesto en el acápite que versa sobre la integridad personal, el señor Viteri y su familia beneficiaron de una protección policial durante los últimos meses de su permanencia en el Ecuador<sup>220</sup>, de conformidad con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. De esta manera, Estado recalca que, al momento de su salida del país, el señor Viteri y su familia gozaban de una protección efectiva de su derecho a la integridad personal a través de medidas específicas emprendidas por las autoridades nacionales para garantizar su seguridad. Por lo tanto, el Estado rechaza las

<sup>217</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 187.

<sup>218</sup> Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, de 27 de noviembre de 2008, párr. 139, y Caso Yarce y otras Vs. Colombia, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, de 22 de noviembre de 2016, párr. 215.

<sup>219</sup> Corte IDH, Caso Yarce y otras Vs. Colombia, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, de 22 de noviembre de 2016, párr. 215, Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas, de 15 de junio de 2005, párr. 120.

<sup>220</sup> Oficio N°22974 de 1 de marzo de 2002, suscrito por el Procurador General del Estado.

alegaciones según las cuales no habría tomado medidas para precautelar los derechos del señor Viteri y de sus familiares.

Además, se debe notar que, en ningún momento el señor Viteri ni los miembros de su familia, presentaron una denuncia ante las autoridades competentes, respecto a las alegadas amenazas que habrían sufrido en el Ecuador. De esta forma, las medidas de protección en beneficio del señor Viteri y su familia no hubieran podido ser emprendidas con anterioridad a la intervención de la CIDH, puesto que las autoridades desconocían las alegaciones del señor Viteri respecto a dichas amenazas.

El señor Viteri alega que su decisión de abandonar el país y de permanecer fuera del país se debió al temor que tenía y sigue teniendo por su seguridad.

Sin embargo, como ya se fue señalado por el Estado, el señor Viteri planeó regresar al Ecuador desde el mes de febrero de 2003, cuando solicitó que se revoquen los actos mediante los cuales se había generado su disponibilidad y posterior baja. Ahora bien, de haberse cumplido su solicitud, el señor Viteri hubiera tenido que volver al Ecuador y cumplir con sus obligaciones de militar en servicio activo, por lo que su actuación cuestiona el alegado temor que el señor Viteri y su familia habrían efectivamente experimentado.

Mientras el proceso de asilo seguía su curso, a la par, el señor Viteri ya planeaba su regreso al Ecuador. El 9 de julio de 2002, solicitó voluntariamente su disponibilidad y el mismo día solicitó el asilo ante las autoridades británicas. Sin embargo, antes de que las autoridades británicas nieguen su asilo el 17 de marzo de 2003, el señor Viteri ya había solicitado su reincorporación a las Fuerzas Armadas, el 18 de febrero de 2003. Tanto las Fuerzas Armadas como las autoridades británicas negaron las solicitudes del señor Viteri, y entonces impugnó las dos decisiones: el 25 de marzo ante las Fuerzas Armadas, y el 1 de abril apeló ante el tribunal de migración británico.

De lo anterior se evidencia que el señor Viteri planeaba a la par estos **dos proyectos de vida que son totalmente antagónicos**, toda vez que, en teoría, la solicitud de asilo implicaría la imposibilidad de regresar al Ecuador por el temor a su seguridad y la de su familia. Resulta absolutamente inentendible que, en el contexto planteado de unas amenazas que impedirían su permanencia al Ecuador, el señor Viteri proyecte de regresar y reincorporarse a una institución cuyas autoridades le estarían persiguiendo.

Así, la impugnación de los actos mediante los cuales se pronunció su disponibilidad y baja demuestra que, a todas luces, el señor Viteri tuvo la intención de regresar al Ecuador y reanudar sus actividades dentro de la institución militar desde el año 2003, lo que cuestiona la realidad del supuesto temor generado por los hostigamientos que el señor Viteri alega haber sufrido, puesto que resulta sorprendente que una persona tenga el proyecto de volver a un país en el cual dice temer por su seguridad e incluso su vida y la de su familia.

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas refieren que las amenazas nunca habrían cesado, manteniéndose hasta la presente fecha, situación que impediría su retorno al Ecuador, según exponen:

220. Sobre la medida de cesación la medida aplicable sería ordenar la cesación de los actos que vulneran los derechos, como los riesgos y ataques a las que aún se ven expuestos, y que no permiten a las víctimas retornar de forma segura a su país de origen.<sup>221</sup>

En atención a esa pretensión, como ya fue expuesto en el acápite consagrado a la integridad personal, en la actualidad, la Fiscalía cuenta con el Programa de Protección a Víctimas y Testigos que puede ser impulsado al existir una denuncia penal. Consecuentemente, si el señor Viteri Ungaretti presenta una denuncia por supuestas amenazas, y de ser procedente, podría ser protegido por las autoridades nacionales a través del Programa de Protección a Víctimas y Testigos, de conformidad con las

---

<sup>221</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 220.

disposiciones del artículo 78 de la Constitución<sup>222</sup>, el artículo 11 numerales 8 y 12 del Código Orgánico Integral Penal<sup>223</sup> y el Reglamento del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal<sup>224</sup>.

Por otro lado, desde el año en el cual habrían iniciado las supuestas amenazas, y hasta la presente fecha, el señor Viteri y su familia han viajado al Ecuador, ingresando libremente al territorio ecuatoriano, como se desprende de los registros migratorios que detallan sus entradas y salidas del Ecuador.<sup>225</sup> Sobre ese punto, el Estado se remite a lo expuesto con más detalle en el acápite correspondiente a la integridad personal, en el cual se demuestra que, contrario a lo afirmado por los representantes de las presuntas víctimas en su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas antes citado, las alegadas amenazas no impidieron su retorno periódico, incluso por estadías de larga duración al Ecuador, sin que se haya manifestado ninguna novedad. De las pruebas documentales se extrae que, a penas su estatus migratorio en Gran Bretaña lo permitió, regresaron al Ecuador, por lo que su permanencia fuera del Ecuador no dependía de la alegada situación de inseguridad, sino que de sus circunstancias migratorias en Gran Bretaña.

En ese contexto, los representantes de las presuntas víctimas no demuestran que hayan existido reales amenazas a la seguridad e integridad del señor Viteri y su familia, ni

---

<sup>222</sup> Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449, el 20 de octubre de 2008, artículo 78: "Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación (...) Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales".

<sup>223</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 11: "(...) 8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo con las disposiciones de este Código y la ley."; y, "(...) 12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, proceso y reparación, en relación con su dignidad humana. Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal".

<sup>224</sup> Reglamento del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, Resolución de la Fiscalía General del Estado 25, publicada en el Registro Oficial 239, el 11 de mayo de 2018.

<sup>225</sup> Certificados de Movimientos Migratorios, emitido por la Unidad de Control Migratorio, Sistema Migratorio Ecuatoriano, Ministerio de Gobierno, reportes de 1 de diciembre de 2021, del señor Julio Rogelio Viteri Ungaretti y la señora Ligia Rocío Alarcón Gallegos.



Oficio N°01838

Página 103

tampoco justifican que dichas circunstancias hayan impedido su permanencia en el país, ni su regreso al país, toda vez que desde el mes de febrero de 2003, el señor Viteri tuvo el proyecto de regresar al Ecuador y reanudar sus actividades dentro de las Fuerzas Armadas, y que desde entonces los miembros de la familia Viteri Alarcón regresaron de forma continua y reiterada a su país de origen, sin reportar ningún inconveniente. De esta forma, el temor expuesto por las presuntas víctimas para permanecer y regresar al país no se encuentra fundado ni justificado por las circunstancias del presente caso. Por lo tanto, se deberá desconocer las alegaciones emitidas en cuanto a un supuesto desplazamiento forzado.

Por lo anterior, se evidencia que no se configura una vulneración del derecho de circulación y de residencia, en el contexto de las circunstancias descritas por los representantes del señor Viteri y su familia.

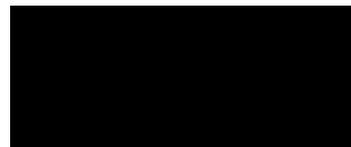
### **2.3.7. Inexistencia de vulneración del artículo 25 de la CADH (protección judicial)**

El artículo 25 de la CADH garantiza la protección judicial. Con relación al recurso efectivo al que se refiere la norma convencional del artículo 25, el mismo debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención. De éste, se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos<sup>226</sup>.

Para apreciar la situación concreta del señor Viteri, es preciso tomar como referencia la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual ha enfatizado que no basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. De este modo, la Corte ha considerado que: “No pueden considerarse efectivos aquellos

---

<sup>226</sup> Corte IDH, Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147., párr. 146.



Oficio N°01838

Página 104

recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios [...]”.<sup>227</sup> En particular, la sencillez del recurso implica despojar al recurso de cualquier “rigorismo formal”, o sea no subordinar su procedencia a requisitos procesales demasiados estrictos que puedan llegar a poner en duda la eficacia misma del recurso<sup>228</sup>.

Respecto a la efectividad de la acción de amparo constitucional y del hábeas corpus, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Cantoral Benavidez en contra de Perú, manifestó lo siguiente:

“la institución procesal del amparo y del hábeas corpus "reúnen las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve.”<sup>229</sup>

El recurso de amparo constitucional se encontraba previsto por el artículo 95 de la Constitución Política del Ecuador vigente en la época de los hechos:

Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias **de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución** o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública.

No serán susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.

También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso.

<sup>227</sup> Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 121

<sup>228</sup> Pizzolo Calogero, Los Mecanismos de Protección en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y el Derecho Interno de los Países Miembros, Caso Argentino, Universidad Nacional Autónoma de México. <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/342/24.pdf>

<sup>229</sup> Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Fondo, Sentencia de 18 de agosto de 2000, párrafo 165



**Oficio N°01838**

Página 105

Para la acción de amparo no habrá inhibición del juez que deba conocerla y todos los días serán hábiles.

El juez convocará de inmediato a las partes, para oírlos en audiencia pública dentro de las veinticuatro horas subsiguientes y, en la misma providencia, de existir fundamento, ordenará la suspensión de cualquier acto que pueda traducirse en violación de un derecho.

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez dictará la resolución, la cual se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de que tal resolución pueda ser apelada para su confirmación o revocatoria, para ante el Tribunal Constitucional. La ley determinará las sanciones aplicables a las autoridades o personas que incumplan las resoluciones dictadas por el juez; y a los jueces y magistrados que violen el procedimiento de amparo, independientemente de las acciones legales a que hubiere lugar. Para asegurar el cumplimiento del amparo, el juez podrá adoptar las medidas que considere pertinentes, e incluso acudir a la ayuda de la fuerza pública.

No serán aplicables las normas procesales que se opongan a la acción de amparo, ni las disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho.<sup>230</sup>

En virtud de la norma antes citada, el recurso de amparo es una medida cautelar cuya finalidad es la protección de los derechos constitucionales que podrían ser vulnerados por un acto u omisión ilegítimo, emitido por una autoridad pública, el cual es susceptible de causar un daño grave. Por lo tanto, el amparo constitucional constituye un recurso idóneo para prevenir posibles vulneraciones a derechos humanos, en el sentido del artículo 25 de la CADH.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, define la acción de amparo, como un medio de protección de los derechos constitucionales: “Desde una noción contemporánea, la expresión “amparo” se utiliza para significar al “juicio constitucional de amparo”, es decir, una garantía judicial, un proceso constitucional, un mecanismo de protección específica para salvaguardar los derechos fundamentales dentro de los sistemas de control de la constitucionalidad de leyes y dentro de la concepción genérica de la defensa de la constitución”.<sup>231</sup>

<sup>230</sup> Constitución Política de la República del Ecuador de 1998.

<sup>231</sup> Eduardo Ferrer Mac-Gregor, *Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional*, Primera Edición Mayo 2010.

La norma constitucional establecía que la acción de amparo podía presentarse ante un juez ordinario de primer grado, en donde se haya verificado la producción del acto que eventualmente hubiere podido violar los derechos constitucionales del recurrente<sup>232</sup>. Además, el artículo 95 de la Constitución preveía que el juez tenía que convocar las partes “inmediatamente”, que las partes tenían que ser oídas dentro de las veinticuatro horas, y que el juez tenía que resolver el recurso dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes<sup>233</sup>. Así, se evidencia que las normas prescribían reglas para garantizar la rapidez de la resolución de la causa, y que no existían requisitos formales estrictos para la presentación del amparo constitucional, de conformidad con el artículo 25 de la CADH y su interpretación por la Corte IDH.

Además, un estudio investigativo demostró que el período 1997-2004, período en el cual el señor Viteri recurrió a esa acción, el Tribunal Constitucional conoció un total de 6394 acciones de amparo constitucional, de las cuales se estima que casi una cuarta parte fueron concedidas, lo cual representa casi 1600 recursos que habrían sido resueltos a favor de los accionantes,<sup>234</sup> lo cual demuestra la efectividad del recurso.

A pesar de ello, los representantes alegan que, en el caso del señor Viteri, el amparo constitucional no permitió obtener los resultados deseados:

[...] En consecuencia, en el fallo de apelación el tribunal decidió dejar sin efecto los arrestos impuestos, pero no se pronunció sobre las vulneraciones a los derechos humanos alegadas.

172. Particularmente, el tribunal no consideró la afectación a los derechos de Rogelio derivados de su remoción del cargo de Agregado Naval y de Defensa Militar en la Embajada de Ecuador en Londres. Adicionalmente, el tribunal tampoco se pronunció sobre la resolución que lo excluía de la nómina para de oficiales para realizar el XXI Curso de Comando de Estado Mayor Conjunto. Curso era un pre-requisito para ascender dentro de la Armada Nacional. Por lo tanto, del proceso no se derivaron medidas de reparación adecuadas para las

<sup>232</sup> Artículo 95 de la Constitución de 1998.

<sup>233</sup> *Ibidem*.

<sup>234</sup> Alex Valle, *El amparo como garantía constitucional en el Ecuador*, p. 27-50 <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3123/1/SM105-Valle-El%20amparo.pdf>

vulneraciones alegadas a los derechos expuestos como consecuencia de los hechos expuestos.

173. El estado ecuatoriano vulneró el artículo 25 de la CADH en la medida que la decisión del Tribunal Constitucional no consistió en un mecanismo eficaz para la protección de los derechos de Rogelio Viteri. A pesar de que los arrestos de rigor fueron anulados, los mismos ya produjeron sus efectos. Es decir que, a causa de dichos arrestos, Rogelio Viteri fue excluido de su posición laboral en la Embajada de Londres. A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional, Rogelio Viteri no fue restituido a su cargo, siendo esta la medida de reparación lógica e idónea para el caso.<sup>235</sup>

Los representantes del señor Viteri reprochan al Tribunal Constitucional de haber resuelto la controversia *infra petita*, sin haberse pronunciado sobre la remoción del cargo de Agregado Naval, sin haberse pronunciado sobre la exclusión del curso, y para colmo, sin haberse pronunciado sobre las vulneraciones de derecho alegadas.

De la simple lectura del fallo del Tribunal Constitucional, comparándole con la demanda planteada por el señor Viteri, se desprende que la exposición de los representantes del señor Viteri es absolutamente ajena a la realidad.

En su demanda, el accionante planteó las siguientes pretensiones en su petitorio:

- “1.- La resolución del Consejo de disciplina por la que se me impuso el arresto de rigor de quince días en la sesión ordinaria del 5 de diciembre del año 2001.
- 2.- La resolución del Comandante de Operaciones Navales y Jefe de la Primera Zona Naval por la que se me impuso la sanción de cinco días de arresto de rigor, comunicada mediante Oficio N° COOPNA-CDO-003-C, del 08 de febrero del 2002.
- 3.- La Resolución del Comandante General de Marina por la que se me impuso la sanción de tres días de arresto de rigor, comunicada mediante Oficio N° COGMAR-DFL-014-C del 13 de noviembre del 2001.
- 4.- La Resolución del Consejo de Oficiales Almirantes por la que se resolvió “cesar en las funciones de Agregado Naval ante la embajada del Ecuador en el Reino Unido y representante ante la OMI al Sr. CPNV-EM Rogelio Viteri Ungarreti” comunicada con Oficio N° CONALM-SEC-044-C del 17 de diciembre del 2001.
- 5.- La Resolución por la que luego de haberseme incluido en la nómina de oficiales que realizaran el XXI Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto en el INAGUE se ha decidido no considerarme en esa nómina y se ha postergado mi

---

<sup>235</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 171 y siguientes.



**Oficio N°01838**

Página 108

asistencia a ese Curso “para otra oportunidad como consta en el Oficio N° DIGPER-DIR-084-0 del 08 de febrero del 2002.

Solicito además se ordene que se borre o elimine de mi libro de vida las sanciones que se declaren sin efecto de acuerdo con la presente petición.”<sup>236</sup>

Respecto a los puntos 1, 2, y 3 del petitorio antes citado, y la solicitud que que las sanciones sean borradas del libro de vida militar, el Tribunal Constitucional resolvió a favor del señor Viteri, considerando que se habían vulnerado sus derechos constitucionales:

[...] los arrestos de rigor impuestos al Capitán Rogelio Viteri son ilegítimos por cuanto contravienen el ordenamiento jurídico vigente, violan derechos subjetivos plasmados en la normativa del debido proceso recogida en el Art. 24 de la Constitución Política del Estado, principalmente el que corresponde al numeral 10 que dice que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento; y, ocasionan un daño grave al accionante puesto que los arrestos en su contra le significa disminuir el puntaje necesario para alcanzar su calificación al grado mayor, daño que no se produciría de manera individual por cada arresto sino solamente de manera conjunta porque sólo así existe acumulación de disminución del puntaje que anularía toda posibilidad de ascenso que es la aspiración de toda persona que ha emprendido en la carrera militar, siendo un motivo más por el que se hubiera tornado un sin sentido que interponga una acción de amparo por cada acto impugnado [...]”<sup>237</sup>

Así, contrario a lo afirmado por los representantes del señor Viteri, el Tribunal Constitucional consideró la afectación que las tres sanciones disciplinarias tuvieron sobre su carrera militar, y, considerando la normativa constitucional sobre el debido proceso, se dejaron sin efecto los arrestos de rigor, borrándoles de su hoja de vida militar, de conformidad con lo solicitado por el accionante. Como lo detalla el Tribunal Constitucional en su fallo, el registro de esas faltas disciplinarias en la hoja de vida militar del señor Viteri disminuía su puntaje de tal forma que hubiera aniquilado su oportunidad de beneficiarse de un ascenso. De esta forma, la medida reparatoria ordenada por el Tribunal Constitucional fue eficaz para reestablecer al señor Viteri en la situación anterior a la emisión de esas sanciones, de tener la oportunidad de seguir su carrera militar. Esa

<sup>236</sup> Recurso de amparo constitucional, de 11 de marzo de 2002, suscrito por Rogelio Viteri, y sus abogados.

<sup>237</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

medida es además la única medida de reparación que había sido solicitada por el señor Viteri dentro de su recurso de amparo constitucional.

Respecto a los puntos 4 y 5 del petitorio del recurso de amparo constitucional antes citado, que versan sobre el cese de sus funciones en Londres y su exclusión de un curso militar, el Tribunal Constitucional determinó lo siguiente:

“[...] a folio 51 del expediente consta la comunicación de la resolución tomada por el Consejo de Oficiales Almirantes en el cual cesan al Capitán Rogelio Viteri en las funciones que venía desempeñando y, a pesar de que no es función del Consejo de Oficiales Almirantes nombrar y cesar a los militares en el cargo de Agregado Naval, sino que aquello solamente le corresponde al Presidente de la República, a folios 123 y 124 consta el Decreto del Presidente de la República en el que efectivamente cesa en sus funciones al Capitán Rogelio Viteri; por lo que se concluye que si bien el acto del Consejo de Oficiales Almirantes es ilegítimo, la posibilidad de remediar el daño en este caso específico **no es materia de amparo constitucional, puesto que ya existe el acto legítimo dictado por quien tenía competencia para cesarlo en sus funciones, es decir, el Presidente de la República.**

[...] a folio 55 del expediente puede verse el oficio No. DIGPER-DIR-084 de 8 de febrero de 2002, suscrito por el señor Director General del Personal, en el que se remite información sobre el XXI Curso de Comando y Estado Mayor Conjunto en el INAGUE, indicando al Capitán Rogelio Viteri que su asistencia al curso se encuentra postergada, lo que **bajo ningún concepto puede considerarse una sanción, ni que le ocasione un daño grave en definitiva puesto que el Capitán Rogelio Viteri tendrá la oportunidad de realizar tal curso en otra ocasión**, por lo que no se trata de un acto ilegítimo [...] <sup>238</sup>.

Así, contrario a lo afirmado por los representantes del señor Viteri, el Tribunal Constitucional sí se pronunció sobre su remoción del cargo de Agregado Naval, y su exclusión del curso militar. Por lo tanto, la situación denunciada por los representantes del señor Viteri fue efectivamente solventada en el ámbito interno. No obstante, la inconformidad que subsiste por parte del señor Viteri tiene relación con el rechazo del Tribunal Constitucional de constatar la vulneración de derechos constitucionales respecto a estos actos emitidos por la institución militar, y el hecho de que el Tribunal

---

<sup>238</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

Constitucional no haya ordenado su reincorporación al cargo de Agregado Naval y no haya otorgado una indemnización por la vulneración de derechos constatada.

Sin embargo, valorando todas las circunstancias fácticas del caso y los fundamentos legales presentados por las partes procesales, y las facultades del juzgador en el marco específico del amparo constitucional, el Tribunal Constitucional consideró que la remoción del señor Viteri de su cargo en Londres no constituía un acto ilegítimo y que su exclusión del curso militar no le ocasionaba un daño grave que justifique su anulación. El Tribunal Constitucional realizó este análisis jurídico, al amparo de sus competencias y de conformidad con las exigencias del debido proceso.

Ahora bien, el hecho de que la jurisdicción nacional no haya resuelto la controversia plenamente a favor de los intereses del señor Viteri no demuestra de ninguna forma que el recurso empleado fue ineficaz, en el sentido del artículo 25 de la CADH.

Por otro lado, como ya se expuso en ocasiones anteriores, la naturaleza y fin constitucional del recurso de amparo constitucional no permitía al juez ordenar indemnizaciones pecuniarias, y, de hecho, en el caso concreto, el accionante tampoco había solicitado que se otorgue una indemnización. Así, no se podría alegar que el recurso de amparo constitucional fue inefectivo por el solo hecho de que no permitió obtener un remedio, si este recurso no fue concebido para ello.

### El Habeas Corpus

Por otro lado, el hábeas corpus se encontraba previsto en el artículo 93 de la Constitución de 1998:

Del hábeas corpus. Art. 93.- **“Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o ante quien haga sus veces.** La autoridad municipal, en el **plazo de veinticuatro horas** contadas a partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato será

obedecido sin observación ni excusa, por los encargados del centro de rehabilitación o del lugar de detención.

**El alcalde dictará su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes.** Dispondrá la inmediata libertad del reclamante si el detenido no fuere presentado, si no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales, si se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, si se hubiere justificado el fundamento del recurso.

Si el alcalde no tramitare el recurso, será civil y penalmente responsable, de conformidad con la ley.

El funcionario o empleado que no acate la orden o la resolución será inmediatamente destituido de su cargo o empleo sin más trámite, por el alcalde, quien comunicará tal decisión a la Contraloría General del Estado y a la autoridad que deba nombrar su reemplazo.

El funcionario o empleado destituido, luego de haber puesto en libertad al detenido, podrá reclamar por su destitución ante los órganos competentes de la Función Judicial, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que fue notificado.”<sup>239</sup>

El hábeas corpus también se encontraba contemplado en el artículo 74 de la Ley del Régimen Municipal, el cual establecía que:

De la sustanciación del recurso de hábeas corpus - Art. 74.- “Es, además, deber y atribución del Alcalde, o de quien haga sus veces, hacer efectiva la garantía constitucional del hábeas corpus, sustanciándolo conforme se dispone en los siguientes incisos: (...)

**No podrán acogerse a este recurso los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Civil Nacional que sufran arrestos disciplinarios o sean encausados y penados por infracciones de carácter militar o policial.**

Presentada la solicitud o reducida a escrito, si fuere verbal, el Alcalde, dispondrá que **el recurrente sea conducido a su presencia dentro de veinticuatro horas**, y que la autoridad o juez que ordenó la detención o dictó la sentencia, informe sobre el contenido de la denuncia, a fin de establecer los antecedentes.

Con el mismo objeto solicitará de cualquier otra autoridad y del encargado del establecimiento carcelario o penitenciario en que se encontrare el recurrente, los informes y documentos que estime necesarios. Las autoridades o empleados requeridos los presentarán con la urgencia con que se les exija y si no lo hicieren, impondrá a los remisos una multa de doscientos a ochocientos dólares, y entrará a estudiar inmediatamente los antecedentes que le permitan dictar, en forma motivada, y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, si no rechazare el recurso, cualquiera de estas resoluciones:

1o.- La inmediata libertad del recurrente, si no aparecen justificadas la detención o la prisión;

<sup>239</sup> Artículo 93 de la Constitución de 1998.

- 2o.- La orden de que se subsanen los defectos legales, si el recurso se contrae a reclamar vicios de procedimiento o de investigación;
- 3o.- La orden que de se ponga al recurrente a disposición de los jueces propios, si la denuncia alude a la competencia o el estudio del caso lo llevare a esa conclusión. (...)<sup>240</sup>

Así, de lo anterior se desprende que el hábeas corpus podía ser interpuesto por cualquier persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde de la ciudad donde la persona detenida se encuentre. Ambas normas citadas prescriben reglas para garantizar que el recurso sea resuelto con rapidez, por lo que el Estado señala que el hábeas corpus constituye un recurso sencillo, rápido y eficaz.

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes alegan que el hábeas corpus interpuesto ante la Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, no habría sido efectivo dado que no se resolvió a favor de la presunta víctima. Al respecto, el Estado señala que el señor Viteri tenía la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 276 numeral 3 de la Constitución vigente en la época de los hechos:

Art. 276.- Competerá al Tribunal Constitucional: [...] 3. Conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo, y los casos de apelación previstos en la acción de amparo.<sup>241</sup>

Así, de haber agotado los recursos judiciales disponibles, el señor Viteri hubiera tenido la oportunidad de someter su recurso ante una autoridad judicial, sin embargo, el señor Viteri se abstuvo de interponer la apelación correspondiente, situación que no puede ser atribuible al Estado.

Cabe referirse al criterio de la Corte Interamericana que ha afirmado en repetidas ocasiones que la existencia de la garantía de protección judicial contemplada en el artículo 25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del

<sup>240</sup> Artículo 74 de la Ley del Régimen Municipal de 1971.

<sup>241</sup> Constitución de 1998, artículo 276.

propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”<sup>242</sup>, pero en ningún momento existe la obligación estatal de que estos procesos tengan resultados favorables para los recurrentes. En virtud de lo anterior, el Estado señala que el mero hecho de que el hábeas corpus no haya sido resuelto a favor del señor Viteri no constituye una vulneración de las disposiciones del artículo 25 de la CADH en cuanto a la efectividad del recurso, puesto que no agotó las vías judiciales disponibles. Por lo anterior, no se configura una vulneración del artículo 25 de la CADH en el presente caso.

### **2.3.8. Inexistencia de vulneración del derecho al trabajo, en el marco de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 26 de la CADH)**

La Convención Americana, en su artículo 26, establece el compromiso de los Estados Partes respecto al desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para la determinación de los derechos que componen la noción de DESCAs, en su jurisprudencia, la Corte IDH ha establecido que convenía referirse a la Carta de la OEA, instrumento que consagra el derecho al trabajo:

84. Para identificar aquellos derechos que pueden ser derivados interpretativamente del artículo 26 de la Convención, se debe considerar que este realiza una remisión directa a las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA.<sup>243</sup>

Así también, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, consagra el derecho al trabajo en su artículo 6, y establece en su artículo 7 que:

---

<sup>242</sup> Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de noviembre de 2005, párrafo 184; Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de junio de 2005, párrafo 93.

<sup>243</sup> Caso Spoltore Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de junio de 2020. Serie C No. 404, Párrafo 84.

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: [...] d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional.<sup>244</sup>

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas alegan que:

211. Consideramos esencial tener en cuenta la violación al derecho al trabajo del que fueron víctimas Rogelio Viteri y a su esposa Rocío Alarcón, pues, como se mencionó anteriormente ambos tenían carreras honestas e impecables, siendo reconocidos por sus méritos en distintos ámbitos, como es el hecho de que Rogelio Viteri fue tomado en cuenta como Agregado Naval y Militar en la embajada de Londres, cuando ese es un cargo al que se designa solo a los mejores miembros en la carrera militar y el capitán Viteri hasta aquella fecha había cumplido 29 años y 11 meses de trabajo en las fuerzas armadas sin un solo inconveniente, una impecable hoja de servicio. Del mismo modo, su esposa, Rocío Alarcón, tenía un trabajo que lo cumplía de forma brillante, siendo reconocida por sus estudios, así como su práctica en el ámbito de la medicina natural, etnobotánica y biología en las mejores universidades del mundo, situación que fue afectada por los abusos y omisiones estatales y que solo con el transcurso del tiempo y luego de muchos problemas y dificultades pudo retomar, ella, debido a los atentados que sufrió, así como la persecución a su familia tuvo que abandonar sus actividades durante un tiempo y dedicar muchos de sus esfuerzos a enfrentar, conjuntamente con Rogelio Viteri, los efectos de los abusos contra la familia por parte de los organismos de seguridad del Estado, de manera específica, de los organismos de inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.<sup>245</sup>

De manera preliminar, el Estado recalca que, al igual que el derecho a la protección de la familia y los derechos del niño, la alegada vulneración del artículo 26 de la CADH no fue valorada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo No. 8/20, la cual no concluyó que el Estado ecuatoriano haya presuntamente vulnerado el derecho al trabajo, en los términos que establece la Convención Americana sobre

<sup>244</sup> Organización de los Estados Americanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, OEA/Ser.A/44.

<sup>245</sup> Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de septiembre de 2021.



Oficio N°01838

Página 115

Derechos Humanos y los estándares internacionales relacionados al artículo 26.<sup>246</sup> Igualmente, resaltar que los representantes de las presuntas víctimas no han alegado la supuesta vulneración de este derecho a lo largo del proceso sustanciado ante CIDH.

Sin perjuicio de ello, considerando lo que ha señalado la Corte IDH respecto de las garantías que componen el derecho al trabajo, el Estado ecuatoriano procederá a analizar la situación laboral del señor Rogelio Viteri y de la señora Rocío Alarcón.

### c. Situación del señor Rogelio Viteri

En su Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, el señor Viteri alega que:

212. La hoja de vida del señor Viteri era impecable; durante su vida académica y profesional obtuvo éxitos relevantes por sus méritos, un oficial graduado con honores de la Escuela Superior Naval, con diversos cursos de tanto de promoción dentro de la Marina y de especialización, todos realizados como parte de las Fuerzas Armadas en varios países, habían hecho que sea considerado como uno de los oficiales de las Fuerzas Armadas con el mayor número de cursos de especialización realizados. Todo esto se vio truncado por las acciones y omisiones estatales (...).<sup>247</sup>

Frente a la presunta dificultad para continuar con sus funciones en las Fuerzas Armadas y su permanencia en ella, cabe señalar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que este derecho “no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo”, pero que también “implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo”.<sup>248</sup>

De este modo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en su resolución sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor Viteri Ungaretti consideró que:

Con fecha 8 de julio del 2002, a la fecha el Capitán de Navío EM. ROGELIO VITERI UNGARETTI, Oficial en servicio activo, a través de su apoderada general, Lcda. Ana

<sup>246</sup> CIDH, Informe de fondo No. 8/20, Caso No. 12.999 Julio Rogelio Viteri Ungaretti y Familia, 03 de marzo de 2020, OEA/Ser.L/V/II.175.

<sup>247</sup> Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de septiembre de 2021.

<sup>248</sup> Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419., Párrafo 106.



**Oficio N°01838**

Página 116

Lucía Alarcón Gallegos, mediante comunicación s/n, dirigida al señor Ministro de Defensa Nacional, con copia al señor Comandante General de la Fuerza Naval, solicita “que de conformidad con el Art. 76, literal a), de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, en concordancia con el literal j) del mismo artículo, se ha colocado en situación de disponibilidad previo a la Baja, con fecha 9 de julio del 2002, día en que termina el plazo de la Licencia que se ha concedido” [...].<sup>249</sup>

Con base en este pedido, el Presidente de la República, sujeto a las atribuciones legales que le concedía la normativa, aceptó la solicitud voluntaria del entonces CPNV. EM. Rogelio Viteri, y lo colocó en la condición de disponibilidad con fecha 9 de julio de 2002.<sup>250</sup> Posteriormente, por medio del Decreto Ejecutivo No. 3550 de 03 de enero de 2003, el Presidente procedió conforme el artículo 87, literal c) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas<sup>251</sup> y colocó al señor Rogelio Viteri en servicio pasivo.<sup>252</sup>

Es decir, la salida del señor Viteri de las filas institucionales de las Fuerzas Armadas, respondió a una solicitud voluntaria y no a un proceso de obstrucción laboral arbitrario por parte del Estado.

En el marco de la audiencia ante la Corte IDH, los representantes del señor Viteri alegaron que, de no haber solicitado su disponibilidad, el señor Viteri hubiera sido acusado de desertión. Sobre ese punto, el Estado aclara que, a partir del 7 de junio de 2002, y hasta el 8 de julio de 2002, el señor Viteri había solicitado un mes de vacaciones.<sup>253</sup> Ese período coincidió con su salida del país, el 10 de junio de 2002. Al término de esa licencia, el señor Viteri hubiera tenido que volver a sus funciones en Guayaquil, a falta de lo cual, hubiese incurrido en un **abandono de puesto**. En la disciplina militar, el abandono de puesto conlleva a posibles sanciones, puesto que constituye una falta a la puntualidad y la asistencia, según el Reglamento de Disciplina Militar:

<sup>249</sup> Informe MS-7-1-2003-09, emitido por el Director Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, el 15 de abril de 2003.

<sup>250</sup> Decreto Ejecutivo N°2917 de 19 de julio de 2002.

<sup>251</sup> Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, publicada en Registro Oficial 5 de 22 de enero del 2007, Art. 87.- El militar será dado de baja por una de las siguientes causas: (...) c) Una vez cumplido, el período de disponibilidad, establecido en la Ley.

<sup>252</sup> Informe MS-7-1-2003-09, emitido por el Director Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, el 15 de abril de 2003.

<sup>253</sup> Hoja de Vida militar del señor Viteri.



**Oficio N°01838**

Página 117

Art. 43.- Son FALTAS LEVES: [...] b. Abandonar el puesto de trabajo o instrucción, sin autorización

Art. 44.- Son FALTAS GRAVES: [...] e. Abandonar la Plaza o Zona Militar sin la debida autorización

Art. 45.- Es FALTA ATENTATORIA: a. Faltar a la unidad o reparto militar en forma injustificada por más de tres días consecutivos, en cuyo caso, a más de la sanción disciplinaria, el pago de la remuneración estará sujeta a lo que al respecto prevea la Constitución de la República y/o la Ley Orgánica de Servicio Público.<sup>254</sup>

El abandono de puesto es muy distinto al delito militar que corresponde a la deserción, dado que se trata de la ausencia del servidor militar en tiempo de conflicto armado<sup>255</sup>, situación que no se asemeja a la del señor Viteri. El Estado hace notar que cualquier servidor público o inclusive empleado del sector privado está sujeto a sanciones en caso de no presentarse a su puesto de trabajo, sin justificativo.

Así, la jurisprudencia interamericana menciona que:

[...] la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido o separación arbitraria, se realice bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para ello con las debidas garantías [...].<sup>256</sup>

Según la jurisprudencia interamericana, la protección del derecho a la estabilidad laboral implica lo siguiente:

<sup>254</sup> Reglamento de Disciplina Militar.

<sup>255</sup> COIP, Art. 357.- Deserción.- Será sancionado con pena privativa de libertad de tres meses a un año, la o el servidor militar que en tiempo de conflicto armado se ausente por más de ocho días, en los siguientes casos:

1. Falte al reparto o unidad militar, instituto u otro lugar en que esté destinado o, hallándose en servicio activo y sin haber obtenido su baja, se separe de él.
2. En el momento de la partida o marcha de su unidad, fuerza, tropa, nave u otro vehículo no se incorpore a ellos.

A la o al desertor se le impondrá el máximo de la pena privativa de libertad si la deserción se comete por complot o en territorio enemigo.

<sup>256</sup> Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2020. Serie C No. 419., Párrafo 110.



Oficio N°01838

Página 118

[...] el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos.<sup>257</sup>

En relación a esto, cabe añadir que luego de la emisión de los actos mediante los cuales el señor Viteri fue colocado en situación de disponibilidad y posterior baja, su apoderada Ana Lucía Alarcón Gallegos compareció ante el Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval, a fin de solicitar que dichos documentos se dejen sin efectos, en virtud de que la solicitud de disponibilidad que se había presentado anteriormente, carecía de voluntad manifiesta.<sup>258</sup> Es decir, existía efectivamente un recurso disponible que permita impugnar los actos que según el señor Viteri vulneraron su derecho al trabajo.

Sin embargo, el artículo 201 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas establecía que:

Art. 201.- El Militar que fuere colocado a disposición, disponibilidad o dado de baja y se considere dicha Resolución ilegal, puede presentar su reclamo, al Consejo respectivo dentro de un plazo de cuarenta y cinco días calendario, después de haberse publicado en la Orden General el Decreto o la Resolución correspondiente. Los consejos resolverán los reclamos presentados en el plazo máximo de treinta días.<sup>259</sup>

En el caso concreto, el reclamo de la apoderada del señor Viteri fue presentado de manera extemporáneo y, por lo tanto, el reclamo fue rechazado.<sup>260</sup>

Lo anterior, refleja que aun cuando el señor Julio Viteri haya podido considerar que fue destituido de las Fuerzas Armadas de manera contraria a su voluntad, contaba con el recurso adecuado para presentar su oposición e impugnar tal decisión. No obstante, el reclamo que presentó a través de su apoderada, fue activado extemporáneamente. Esta

---

<sup>257</sup> *Ibidem*. Párrafo 111.

<sup>258</sup> Informe MS-7-1-2003-09, emitido por el Director Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, el 15 de abril de 2003.

<sup>259</sup> Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, art. 201. Artículo derogado por Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 5 de 22 de enero del 2007.

<sup>260</sup> *Ibidem*.

situación no puede ser imputada al Estado ecuatoriano, puesto que es el resultado de un acto atribuible a la defensa técnica elegida por el señor Viteri Ungaretti.

En su ESAP y en su declaración ante la Corte IDH, el señor Viteri alegó que su sueldo habría sido suspendido. Al respecto, la Jueza Verónica Gómez solicitó aclaración:

[Jueza Verónica Gómez] Tengo una última pregunta, ahora ya para los representantes de la presunta víctima y tiene que ver con un hecho que trajo el Estado en su alegato que sonaba a primera vista contradictorio con las alegaciones de hecho que se hicieron con relación a las remuneraciones, diciendo que, entiendo que si el Estado trajo este elemento es porque como el mismo Estado señaló antes está basado en documentación oficial, en el sentido que las remuneraciones fueron liquidadas y que no fueron disminuidas. Entonces creo que sería importante que tuviéramos el punto de vista, porque eso no apareció en la réplica; que tuviéramos una confirmación de por lo menos hasta el momento en el cual se produjo la solicitud de la baja [...] desde diciembre del 2001, ya está ese momento si verdaderamente se percibieron o no los salarios si tiene la información ahora sería bueno.

[Farith SIMON] Sí no sabemos la información exactamente con pruebas, sin embargo, de la información que el propio Estado entregó, lo que existe es la información sobre el entrega de su seguro de cesantía, que era un ahorro que el señor Viteri tenía a través de un representante, pero le haremos llegar a la corte de la información sobre los salarios.

[Jueza Verónica Gómez] Bueno entonces le pedimos a ambas partes que haya una aclaración que si era simplemente un seguro de cesantía o si eran los salarios, porque aquí casi daba la impresión de que se hablaba como de salarios caídos y el Estado dice no los salarios se pagaron y no disminuyeron en valor obviamente hasta el 2006, cuando empezó a tramitarse la separación de la fuerza pero creo que eso es importante para la Corte saberlo es eso señor presidente, muchas gracias.

Respecto a la solicitud de la jueza Verónica Gómez, el Estado informa que los roles de pago del señor Viteri evidencian que, para el período contado diciembre de 2001 hasta su salida de la institución, en enero de 2003, todos sus sueldos fueron pagados a cabalidad.<sup>261</sup>

Paralelamente, cabe resaltar que el señor Julio Viteri pudo acceder a los beneficios laborales que se derivan del ejercicio de sus funciones en las Fuerzas Armadas, relativos

---

<sup>261</sup> ANEXO 15. Confidenciales del señor Viteri de diciembre de 2001 a enero de 2003. Armada del Ecuador, División de sueldos, liquidación individual, emitido el 16 de marzo de 2023.



Oficio N°01838

Página 120

al “Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte” y el “Seguro de Cesantía”. Así el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (en adelante ISSFA) reportó que, en calidad de beneficios prestacionales, se le otorgó a la presunta víctima los siguientes valores:

Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte con una pensión mensual de retiro inicial equivalente a USD 684,95, en calidad de prestación vitalicia, sujeta a revalorizaciones de conformidad con el marco legal vigente a cada época, misma que a la fecha de acuerdo con el expediente y registros constantes en la base de datos que se mantienen en el Instituto, alcanza el valor de USD 2.662,06, pensiones transferidas a la cuenta no. 581107927 del Banco General Rumiñahui, pertenecientes a quien se mantiene como su apoderada; y,

Seguro de Cesantía por el valor de USD 57.351,60, del que una vez efectuadas las respectivas deducciones legales e institucionales por las obligaciones pendientes que mantenía el referido militar y que a continuación se detallan, dieron lugar que en su favor se transfiriera un valor total líquido de USD 38.172,47.<sup>262</sup>

#### **BENEFICIO ECONÓMICO CONCEDIDO<sup>263</sup>**

<b>SEGURO DE CESANTÍA</b>	<b>57.315,60</b>
---------------------------	------------------

#### **DEDUCCIONES<sup>264</sup>**

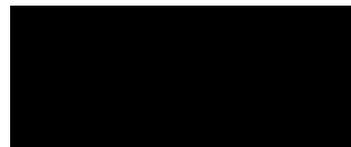
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR (USD)</b>
Crédito cesantía ISSFA	18.677,34
Pago a unidad militar – Pagaduría General de la Armada	465,79
<b>TOTAL DEDUCCIONES POR OBLIGACIONES MANTENIDAS POR EL AFILIADO</b>	<b>19.143,13</b>
<b>VALOR LÍQUIDO EN FAVOR DEL AFILIADO</b>	<b>38.172,47</b>

Así, en virtud de la información proporcionada por el ISSFA, el Estado señala que, por concepto de Seguro de Cesantía, la suma de USD 38.172,47 fue cancelada el 13 de mayo

<sup>262</sup> ANEXO 16. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Oficio No. ISSFA-DG-2021-2193-OF, 08 de diciembre de 2021

<sup>263</sup> Ibídem. Tabla adjunta.

<sup>264</sup> Ibídem. Tabla adjunta.



Oficio N°01838

Página 121

de 2005 a la cuenta de la señora Ana Lucía Alarcón Gallegos, apoderada del pensionista, presunta víctima en el presente caso. Por otra parte, la pensión de retiro, la cual en el 2021, era valorada a 2.662,06 dólares, fue transferida sin interrupción mensualmente desde febrero de 2003, y sigue transferida hasta la fecha, a la cuenta perteneciente a quien se mantiene como su apoderada.

El Estado sustenta sus afirmaciones proporcionando los confidenciales, que son los roles de pago emitidos por la Armada, y la constancia de pago de la cesantía y la pensión de retiro a la cuenta perteneciente a la apoderada del señor Viteri. Por lo tanto, considerando la carga probatoria que incumbe a cada parte procesal, el Estado solicita que la Corte IDH exija a su vez a la contra parte que las alegaciones del señor Viteri sean sustentadas con pruebas.

Como resultado, toda vez que la disponibilidad y baja se dieron por solicitud voluntaria del señor Julio Viteri y que, ha quedado demostrado que el Estado contaba con los mecanismos necesarios para recurrir cualquier situación jurídica ajena a la solicitada por el funcionario militar, queda demostrado que no se configura una vulneración al derecho al trabajo en perjuicio del señor Viteri, conforme el desarrollo progresivo de los DESCAs establecido por la Corte IDH.

De este modo, el Estado ecuatoriano no es responsable internacionalmente por la vulneración del derecho contemplado en el artículo 26 de la CADH.

#### **d. Situación de la señora Rocío Alarcón**

En cuanto a la situación laboral de la señora Rocío Alarcón, los representantes de las presuntas víctimas alegan que:

213. Como se ha señalado, el núcleo familiar también se vio afectado, ya que Rocío Alarcón tuvo que abandonar su trabajo debido a las amenazas recibidas y atentados contra su vida [...].<sup>265</sup>

---

<sup>265</sup> Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas, presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de septiembre de 2021.



Oficio N°01838

Página 122

Con relación a estos alegatos, el Estado resalta que las presuntas víctimas no presentaron ninguna denuncia por las presuntas amenazas, a fin de que, a través de sus autoridades competentes logren desvanecer cualquier situación de riesgo que haya perjudicado el ejercicio de sus actividades laborales. En tal virtud, no se ha logrado comprobar la existencia de un contexto de amenaza que limitó el derecho al trabajo de la señora Alarcón y que pueda ser atribuido al Estado ecuatoriano.

Por otra parte, el Estado hace notar que la propia señora Alarcón reconoce que la afectación a su trabajo se generó a raíz del proceso de asilo.

En nuestra llegada a Reino Unido no imaginamos el infierno que se vendría adelante en el proceso de asilo. [...] nos dieron una tarjeta donde indican nuestra condición de protegidos en la que indicaba que no podíamos trabajar durante todo el proceso de asilo, tampoco salir del país [...]. Contábamos con una ayuda económica insuficiente para cubrir todas las necesidades básicas para sustentar a una familia de cinco en Inglaterra.<sup>266</sup>

La señora Alarcón, al igual que el señor Viteri, fue impedida de trabajar a causa del proceso de asilo. Al respecto, en un acápite anterior, el Estado demostró que, mientras se tramitaba la solicitud de asilo, la familia Viteri Alarcón proyectaba regresar al Ecuador, bajo la condición de que el señor Viteri sea reincorporado en la institución militar, situación que evidencia que las alegadas amenazas no eran susceptibles de impedir su permanencia en el Ecuador. Se demostró también que apenas su estatus migratorio les permitió regresar al Ecuador, pudieron realizar el viaje sin ningún inconveniente para su seguridad. Por lo tanto, las consecuencias inherentes al proceso de asilo, como la prohibición de trabajar impuesta por el Reino Unido, no pueden ser atribuidas al Estado.

Por otro lado, el Estado hace notar que, cuando su estatus migratorio lo permitió, la señora Alarcón volvió a emprender sus proyectos en la selva amazónica del Ecuador con frecuencia, lo que se evidencia de los numerosos viajes al Ecuador desde el año 2006<sup>267</sup>:

Siempre quise volver al centro de la biodiversidad del mundo, mi país, mi Ecuador. Mis sueño de vida siempre era mostrarle al mundo el potencial

---

<sup>266</sup> Declaración ante fedatario público de la señora Alarcón.

<sup>267</sup> Movimientos migratorios de la señora Alarcón.



Oficio N°01838

Página 123

etnobiológico del Ecuador, traer fondo para investigaciones e inversión. Mi país, mi familia, mis amigos, mi profesión, mis indígenas amados, mis contactos en la academia, todo lo perdí cuando salí de mi amado Ecuador. A los 7 años con la ciudadanía británica y con la protección de ser ciudadana del Reino Unido, no pude más y me lance [sic] a volver al país sin importar los riesgos.<sup>268</sup>

El regreso de la señora Alarcón a sus actividades profesionales en Ecuador no fue entorpecido de ninguna forma por las autoridades nacionales. Esta situación confirma que la posible afectación que haya existido a su carrera profesional se generó a raíz del impedimento de trabajar y salir de Reino Unido, durante el proceso de asilo, lo cual no puede ser atribuible al Estado ecuatoriano.

En consecuencia, y al amparo de los estándares interamericanos relacionados a la materia, se ilustra que no se configura la vulneración del derecho al trabajo en perjuicio de la señora Rocío Alarcón, en los términos del artículo 26 de la CADH.

### **2.3.9. Inexistencia de vulneración del artículo 2 de la CADH: la obligación de adecuar la legislación nacional a los estándares interamericanos.**

El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala:

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”

En torno a esta disposición, la jurisprudencia de la Corte Interamericana determinó que el deber del Estado de adecuar su normativa para hacer efectivos los derechos consagrados en la CADH implica la obligación de suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a garantías previstas en la Convención; y por

<sup>268</sup> Declaración de la señora Alarcón ante fedatario público.

otro lado, la obligación de expedir normas y prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías<sup>269</sup>.

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas pretenden observar una “falta de adopción de un mecanismo adecuado para promover las denuncias de hechos de corrupción y, asimismo, proteger a los denunciantes de dichos hechos”<sup>270</sup>. Esa afirmación es ajena a la realidad del ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. A continuación, y en respuesta a las preguntas realizadas por las juezas Verónica Gómez y Nancy Hernández López, el Estado expondrá la normativa vigente en el Ecuador respecto a la protección de los denunciantes de actos de corrupción.

Contrario a lo afirmado por los representantes de las presuntas víctimas, la normativa nacional actual garantiza un alto grado de protección a favor de los denunciantes de los actos de corrupción, e incluso propone un incentivo monetario en su beneficio, demostrando la absoluta voluntad del legislador y de la Administración ecuatoriana para luchar en contra de los actos de corrupción que son nefastos para la democracia, y también para garantizar que los denunciantes no se vean afectados.

La normativa nacional de protección de los denunciantes de corrupción en Ecuador ha sido inspirada por las convenciones internacionales en la materia, y cumple con los estándares internacionales de protección de denunciantes de corrupción. El legislador ecuatoriano ha tomado en consideración la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 2003, que insta a los Estados a promover la protección de los denunciantes de actos de corrupción. La legislación ecuatoriana en materia de protección de denunciantes busca garantizar que los denunciantes estén protegidos contra represalias y que se les brinde asistencia y apoyo adecuados, siguiendo las directrices de esta convención, en su artículo 33.

En su peritaje, Vivian Newman determinó que:

---

<sup>269</sup> Corte IDH, Caso Castillo-Petruzzi y otros vs. Perú, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C, Número 52.

<sup>270</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 102.

“La Ley Modelo [Ley Modelo Para Facilitar e Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes] establece como uno de los objetivos principales en la lucha contra la corrupción, la adopción de un marco normativo en el ámbito de protección de denunciantes para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción.”<sup>271</sup>

Los principios establecidos en la Ley Modelo son idénticos a los objetivos de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción, toda vez que garantiza la protección de los denunciantes de corrupción, incluyendo la confidencialidad de su identidad, la prohibición de represalias y la provisión de canales seguros y efectivos para la presentación de denuncias.

La normativa nacional de protección de los denunciantes de corrupción se ha inspirado en las convenciones internacionales, con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales de protección de denunciantes de corrupción. Esta normativa busca salvaguardar la identidad de los denunciantes, e incentivar las denuncias en materia de corrupción, promoviendo la transparencia en el país.

En su artículo 421, el Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP) establece la posibilidad para cualquier persona de presentar una denuncia ante un delito común, lo cual contrasta con la **obligación de denuncia que incumbe a cualquier ciudadano que tenga conocimiento de la comisión de un acto de corrupción**, como se desprende del artículo 422.1 del mismo código:

Art. 421.- Denuncia.- La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal o ciencias forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito.

La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación personal del denunciante, procesado o de la víctima, se guarden en reserva para su protección.

---

<sup>271</sup> Peritaje escrito de Vivian Newman.

Cualquier persona podrá presentar una denuncia en el caso de infracciones que afecten derechos colectivos, difusos o de la naturaleza.<sup>272</sup>

Art. 422.1.- Deber ciudadano de denunciar.- Todo ciudadano que en el desempeño de su actividad, conociere de la comisión de un presunto delito de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobrepuestos en contratación pública, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada; actos de corrupción en el sector privado, acoso sexual, abuso sexual y demás delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en especial cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, **denunciará dichos actos de manera inmediata a las autoridades competentes.**

Los nombres, apellidos y demás datos de identidad del denunciante serán considerados información reservada, debiendo protegerse esta información por parte de las instituciones responsables y así garantizar la protección de la identidad de la persona que denuncia.<sup>273</sup>

Considerando la carga adicional que reposa sobre el denunciante de un acto de corrupción, que tiene la obligación de denunciar, contrario al ciudadano que constata la comisión de un delito común, el legislador estableció la necesidad de brindar una **protección reforzada a través de la reserva de identidad, con la atribución de un código alfa numérico especial**, que permite su participación dentro de la investigación y el subsecuente proceso penal, salvaguardando sus derechos:

COIP, Art. 430.1.- Denuncia con reserva de identidad.- La denuncia o información por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; obstrucción de la justicia, sobrepuestos en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado; así como lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, enriquecimiento privado no justificado, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes o sicariato, acoso sexual, abuso sexual y demás delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en especial cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, por razones de seguridad, podrá presentarse con reserva de la identidad de la o el denunciante. **Esta denuncia será registrada con un código alfa numérico especial que identifique a la persona denunciante y con el**

<sup>272</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 421, Nota: Inciso tercero agregado por artículo 76 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 107 de 24 de diciembre del 2019.

<sup>273</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 422.1, Nota: Artículo agregado por artículo 16 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 17 de febrero del 2021.



Oficio N°01838

Página 127

**propósito de preservar la integridad física, psicológica y material, así como las condiciones laborales actuales del denunciante y su familia.**

Se mantendrá un registro cronológico de las personas que intervengan en el trámite de las denuncias presentadas con reserva de identidad, quienes quedarán impedidas de divulgar cualquier información relacionada con la identidad de los denunciantes así como aquella que permita su identificación.

La persona que denuncie podrá solicitar el ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, y el otorgamiento de una o varias de las medidas contempladas en el reglamento correspondiente. La o el fiscal valorará la pertinencia de esta solicitud.<sup>274</sup>

Como se desprende del último inciso de la normativa antes citada, la seguridad del denunciante también se encuentra garantizada a través de las medidas de protección que puedan ser emprendidas en el marco de su ingreso en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, dirigido por la Fiscalía General del Estado, como se desprende de los artículos 445 y siguientes del COIP y del Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, normas que rigen este sistema:

**COIP, Art. 445.- Organización.-** La Fiscalía dirige el Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, a través del cual todos los partícipes en la investigación preprocesal o en cualquier etapa del proceso, podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia para precautelar su integridad y no revictimización, cuando se encuentren en peligro.

Este Sistema contará con los recursos necesarios provenientes del Presupuesto General del Estado, para su eficiente gestión.<sup>275</sup>

**Reglamento para el SPAVT, Art. 9.- Derechos de las personas protegidas.-** Siempre que una persona protegida cumpla con las obligaciones del presente reglamento, ésta tendrá los siguientes derechos:

<sup>274</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 430.1, Nota: Artículo agregado por artículo 78 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 107 de 24 de diciembre del 2019. Nota: Inciso primero sustituido por artículo 17 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 17 de febrero del 2021.

<sup>275</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 445.



Oficio N°01838

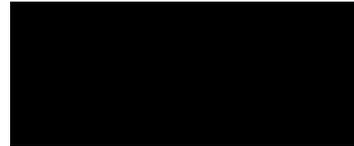
Página 128

1. Ingresar y permanecer en el SPAVT mientras subsistan los factores que motivaron su ingreso;
2. Solicitar el egreso del SPAVT en cualquier momento;
3. No ser discriminada por ninguna razón;
4. Aplicando el principio de voluntariedad la persona protegida podrá renunciar a la asistencia siempre que manifieste por escrito, quedando a salvo su derecho de ser el caso, recibir las mismas en otro momento.
5. Ser informada por el SPAVT respecto del estado del proceso penal y de las acciones que realice el SPAVT;
6. No ser revictimizada, para ello el Fiscal que lleve el caso deberá gestionar la recepción del testimonio anticipado, utilización de la cámara de Gessell y toda acción que garantice la no revictimización de la persona protegida;
7. Cuando las circunstancias lo ameriten, las medidas de protección y asistencia podrán extenderse a su familia ampliada cumpliendo con los parámetros establecidos en este Reglamento; y,
8. Ser asistido por un traductor cuando no hable el idioma español; así como también, recibir información en un lenguaje accesible a su grupo étnico y nacionalidad.<sup>276</sup>

Una de las disposiciones legales adoptadas más relevantes a favor de los denunciantes de los actos de corrupción es el **incentivo monetario** establecido en el COIP en caso de denuncia o entrega de información que permita recuperar los fondos públicos ilegalmente apropiados:

COIP, Art. 430.2.- Incentivos por denuncia o información efectiva.- La persona que aporte con elementos probatorios que permitan la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada; obstrucción de la justicia, sobrepagos en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado; enriquecimiento privado no justificado y producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, **podrá acceder a una compensación**

<sup>276</sup> Reglamento Sustitutivo para el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 581, el 12 de octubre de 2018, artículo 9.



Oficio N°01838

Página 129

**económica proporcional a los recursos económicos que el Estado logre recuperar, hasta un monto de entre el 10 % y máximo el 20 % de lo recuperado.** Una vez recuperados los fondos y activos el juez dispondrá la entrega inmediata de los recursos.

Se podrá acceder a este beneficio una vez que se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada.

No podrán acceder a este beneficio quienes, en cualquier grado, hayan participado en la comisión de la infracción.<sup>277</sup>

Esa herramienta que incentiva las denuncias ciudadanas responde a la voluntad inequívoca del legislador ecuatoriano de encontrar soluciones y estrategias concretas para prevenir los actos de corrupción, combatir la impunidad y recuperar los fondos públicos que fueron sustraídos. Cabe recalcar que el Ecuador es pionero en la región en implementar ese tipo de instrumentos dentro de una política pública de lucha contra la corrupción.

Otra medida legislativa de protección consiste en garantizar que **el denunciante no tenga participar en el proceso penal**, como lo establece el artículo 431 del COIP:

COIP, Art. 431.- Responsabilidad.- La o el denunciante no es parte procesal, pero responderá en los casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria.<sup>278</sup>

Esa medida también tiene como propósito garantizar la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los ciudadanos que de buena fe denuncien actos de corrupción.

Las medidas legislativas antes descritas cumplen con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción.

---

<sup>277</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 430.2, Nota: Artículo agregado por artículo 79 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 107 de 24 de diciembre del 2019. Nota: Inciso primero sustituido por artículo 18 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 17 de febrero del 2021.

<sup>278</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 431.



**Oficio N°01838**

Página 130

La normativa nacional garantiza también la provisión de varios canales seguros y efectivos para la presentación de denuncias. Así, además de las denuncias que puedan ser presentadas ante la Fiscalía y la protección antes descrita brindada al informante o denunciante dentro del proceso penal que se desarrolle, las denuncias también pueden ser presentadas ante dos instituciones públicas que conforman la Función de Transparencia y Control Social, encargada de prevenir y combatir la corrupción, estas son la Contraloría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Respecto a las atribuciones de estas dos entidades públicas en la lucha contra la corrupción, la Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente:

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: [...] 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.

Art. 206.- Los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de la Función. Serán atribuciones y deberes de la instancia de coordinación, además de los que establezca la ley:

1. Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.  
[...]

3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción.<sup>279</sup>

De la cita normativa, se desprende que nuestra Constitución, encarga principalmente a la Función de Transparencia Control Social, conformada por el Consejo de Participación

---

<sup>279</sup> Constitución del 2008.

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, la promoción y el impulso del control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad, fomentando e incentivando la participación ciudadana, protegiendo el ejercicio y cumplimiento de los derechos, previniendo y combatiendo la corrupción.

En este sentido, el mandato constitucional, claramente establece que esta Función será la encargada de articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción, disponiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (en adelante el CPCCS) el coadyuvar a la protección de personas que denuncien actos de corrupción, como se desprende del artículo 208 de la Constitución:

Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley:

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. [...]
4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción. [...]
7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.<sup>280</sup>

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 22 del 09 de septiembre de 2009, determina las atribuciones del CPCCS respecto a la lucha contra la corrupción y la protección de los informantes:

Art. 13.- Atribuciones en el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.  
- Son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo relativo al fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción lo siguiente:

1. Promover políticas institucionales sobre la transparencia de la gestión de los asuntos públicos, la ética en el uso de los bienes, recursos y en el ejercicio de las funciones públicas y el acceso ciudadano a la información pública.
2. Requerir de cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las

<sup>280</sup> *Ibidem*.

personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo a la ley.

[...]

4. Requerir de las instituciones del sector público la atención a los pedidos o denuncias procedentes de la ciudadanía así como investigar denuncias a petición de parte, que afecten la participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social.

5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad que sean calificados por el Consejo, de acuerdo a la reglamentación interna respectiva y siempre que esta determinación no haya sido realizada por otro órgano de la misma función, además de formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.

[...]7. Solicitar a la Fiscalía la protección de las personas que denuncien o testifiquen en las investigaciones que lleve a cabo el Consejo, a través del sistema de protección de víctimas y testigos. En caso de riesgo inminente instará la actuación inmediata de la Fiscalía [...] <sup>281</sup>

Art. 14.- Denuncia.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está obligado a receptor, calificar, aceptar a trámite, e investigar de haber mérito suficiente, las denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción. Se garantizará la reserva y protección de la o el denunciante. [...] <sup>282</sup>

En virtud de las normas anteriormente transcritas y en el ámbito de sus competencias legales y constitucionales el CPCCS expidió el “Reglamento de gestión de pedidos y denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción”, a través del cual, en el Título IV, Capítulo I, regula el procedimiento de admisión, investigación y gestión procesal de denuncias:

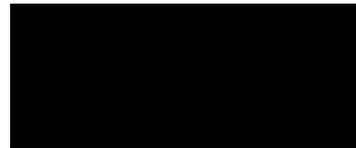
Art. 17.- Protección a la o el denunciante.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social procurará la protección de la o el denunciante, pudiendo coordinar además con la Fiscalía General del Estado, a través del Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos, su protección en los casos que corresponda. <sup>283</sup>

Art. 18.- Reserva de identidad a la o el denunciante y/o servidores que intervengan en la investigación.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

<sup>281</sup> Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 22 del 09 de septiembre de 2009.

<sup>282</sup> *Ibidem*.

<sup>283</sup> Reglamento de gestión de pedidos y denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación o generen corrupción, expedido por medio de la Resolución No. PLE-CPCCS-022-26-11-2015, publicada en el Registro Oficial No. 673 del 20 de enero de 2016, reformada con Resolución No. PLE-CPCCS-T-O-164-23-10-2018, de 23 de octubre de 2018, publicada en Registro Oficial Suplemento 360 de 5 de noviembre del 2018,



Oficio N°01838

Página 133

garantizará la reserva de la identidad de la o el denunciante y de la o el servidor que intervenga en la investigación.<sup>284</sup>

Es menester destacar igualmente que la Contraloría General del Estado, como parte de esta Función de Transparencia y Control Social constituye el organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, como se desprende de la Constitución:

Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.<sup>285</sup>

Así, los denunciantes también pueden denunciar actos de corrupción ante la Contraloría General del Estado, institución pública responsable de controlar los recursos públicos para precautelar su uso eficiente, en beneficio de la sociedad.

Por otro lado, respecto al caso particular de los denunciantes que sean funcionarios públicos, el Estado se refiere a las medidas de protección especiales dispuestas en la Ley Orgánica del Servicio Público:

Art. 4.1.- La o el servidor público que denuncie un acto de corrupción, se convierte en informante o testigo dentro de un proceso de corrupción; si proporciona datos sobre el destino de bienes o recursos provenientes de actos de corrupción, podrá solicitar a la autoridad correspondiente, la concesión de un traslado administrativo provisional a otro puesto de trabajo del mismo grado jerárquico y con la misma remuneración, sin que ello involucre cambio de domicilio.

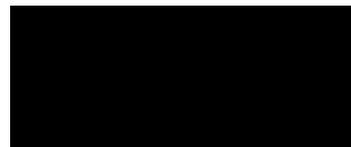
En los casos en los cuales no sea posible efectuar el cambio administrativo, se concederá licencia con remuneración por el tiempo que la autoridad estime conveniente. Mientras dure la licencia, la o el servidor público conservará su derecho a la antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. Dichas medidas podrán ser dispuestas también por la o el Fiscal o por la autoridad judicial, de hacerlo dentro de una investigación o proceso judicial, según corresponda. En ningún caso perderá el derecho a la reserva del puesto de trabajo que originalmente desempeña.<sup>286</sup>

---

<sup>284</sup> *Ibíd.*

<sup>285</sup> Constitución del 2008.

<sup>286</sup> Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Registro Oficial Suplemento 294, el 6 de octubre de 2010.



Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: (...)

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción.<sup>287</sup>

Cabe destacar que esta normativa es supletoria, por lo que la protección determinada para los funcionarios públicos es adicional a la contemplada en la normativa del COIP antes referida, que es de carácter general. el personal de Fuerzas Armadas, en todo lo que no esté contemplado en aquellas.

En el caso específico de la lucha contra la corrupción dentro de la institución militar, el Estado se remite a las disposiciones del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, armonizado con los principios constitucionales, en el cual se establece:

Art. 6.- Los miembros de Fuerzas Armadas están en la obligación de respetar y observar el debido órgano regular, procedimiento que deben cumplir en cualquier acto del servicio militar, para llegar escalonadamente y por escrito, hasta la Autoridad a quien compete su conocimiento y resolución.<sup>288</sup>

#### DISPOSICIONES GENERALES

TERCERA.- Todas las acciones u omisiones que tengan indicios de delito tales como el cohecho, injurias usura, acoso sexual, robo, hurto, entre otros, que fueren cometidos por el personal de Oficiales o Tropa en actos del servicio o fuera de él, deberán ser puestos en conocimiento de las autoridades respectivas. La denuncia deberá ser propuesta por parte del afectado o por la autoridad militar que llegare a conocer del hecho.<sup>289</sup>

Adicionalmente, vale mencionar el Reglamento de Funcionamiento de las Inspectorías de las Fuerzas Armadas, institución responsable de iniciar investigaciones administrativas ante la sospecha de irregularidades:

Art. 5.- DE LA INSPECTORÍA GENERAL.- Son atribuciones y obligaciones de la Inspectoría General de cada Fuerza, las siguientes:

<sup>287</sup> *Ibíd.*

<sup>288</sup> Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, expedido el 15 de diciembre del año 2008 mediante Acuerdo Ministerial N° 1909.

<sup>289</sup> Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, expedido el 15 de diciembre del año 2008 mediante Acuerdo Ministerial N° 1909.



Oficio N°01838

Página 135

- a. Cumplir y hacer cumplir las normas del control interno en tiempo continuo, mediante inspecciones o evaluación de gestión [...]
- e. Verificar que los procesos inherentes al control continuo, sean eficientes y eficaces y proponer la mejora continua de los mismos [...]
- h. Constituir comisiones especiales para la revisión técnico-operativa de los hechos que causaren perjuicio institucional [...]
- o. Inspeccionar los asuntos administrativos que puedan considerarse anómalos e impulsar los trámites ante los organismos competentes [...]<sup>290</sup>

De lo anterior citado se desprende que el ordenamiento jurídico actual está encaminado a ofrecer estrategias novedosas y eficaces de lucha contra la corrupción, promoviendo además la participación de la ciudadanía en ese esfuerzo de las autoridades nacionales de garantizar el uso adecuado de los fondos públicos. Para fomentar esa participación de denunciantes civiles, funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad del país, el legislador ha establecido un conjunto de instrumentos legales que incluyen: la obligatoriedad de denunciar actos de corrupción, incluso para ciudadanos comunes, la protección de identidad del denunciante, la posibilidad de excluir el denunciante o informante del proceso penal, el incentivo monetario para los informantes o denunciantes. La adopción de estos mecanismos concretos, y novedosos para la región, demuestran la voluntad inequívoca de las autoridades nacionales de construir un ordenamiento jurídico que permita luchar de forma eficaz contra la corrupción en el Ecuador. En ese sentido, el Estado rechaza las alegaciones emitidas por los representantes de las presuntas víctimas y señala que las autoridades nacionales cumplieron plenamente con sus obligaciones convencionales establecidas en el artículo 2 de la CADH.

### 3. REPARACIONES. -

El artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es aplicable en materia de reparación, al determinar que:

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte

<sup>290</sup> Reglamento de Funcionamiento de las Inspectorías de las Fuerzas Armadas, publicado en Orden General No. 087 de 6 de mayo de 2014.

lesionada.

En su jurisprudencia, la Corte IDH reconoció como uno de los principios fundamentales del derecho internacional general<sup>291</sup> el hecho de que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño, comporta el deber de repararlo adecuadamente<sup>292</sup>.

A lo largo del presente escrito, el Estado demostró haber cumplido con sus obligaciones internacionales, al proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos establecidos en la Convención Americana, por lo que no se configura ninguna infracción a las normas convencionales que implique la responsabilidad internacional del Ecuador, motivo por el cual, la Corte IDH deberá excluir de su conocimiento las reparaciones solicitadas por los representantes de las presuntas víctimas.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso no consentido de que la Corte IDH concluya que se verificaron violaciones a los derechos consagrados en la CADH, y determine la responsabilidad internacional del Estado, a continuación, el Estado presentará sus observaciones en cuanto a las pretensiones formuladas por los representantes de las presuntas víctimas.

Como observación preliminar, el Estado aclara que, en virtud del artículo 35.1 del Reglamento de la Corte IDH<sup>293</sup>, y según la jurisprudencia constante de la misma, las

---

<sup>291</sup> Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, pág. 21 y Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C. I.J., Series A, No. 17, pág. 29; Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J., Reports 1949, pág. 184.

<sup>292</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25; Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8, párr. 23; Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam, Reparaciones y Costas, Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 43; Caso El Amparo vs. Venezuela, Reparaciones y Costas, Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 14 y Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 36.

<sup>293</sup> Reglamento de la Corte IDH. Artículo 35. Sometimiento del caso por parte de la Comisión. 1. El caso será sometido a la Corte mediante la presentación del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas. [...]



Oficio N°01838

Página 137

presuntas víctimas deben haber sido identificadas durante el trámite ante la CIDH, sin posibilidad de añadir beneficiarios después de la emisión del Informe de Fondo referido en el artículo 50 de la CADH, exigencia procesal que responde al principio de seguridad jurídica.<sup>294</sup> En virtud de ello, las personas beneficiarias de las eventuales medidas de reparación que sean ordenadas por la Corte IDH, corresponden a las presuntas víctimas que fueron debidamente identificadas durante el trámite ante la CIDH, según consta del Informe de Fondo N°8/20, en su párrafo 30:

30. El peticionario, Rogelio Viteri Ungaretti, está casado con Ligia Rocío Alarcón Gallegos y tienen dos hijos: Michelle Rocío Viteri Alarcón y Rogelio Sebastián Viteri Alarcón. Asimismo, al momento de los hechos, residían con la señora Rosa María Humbertina Gallegos Pozo en Londres, suegra del peticionario, quien para los efectos del presente caso, hace parte de la familia del señor Viteri.<sup>295</sup>

Por lo tanto, los señores Rogelio Viteri Ungaretti, Ligia Rocío Alarcón Gallegos, Michelle Rocío Viteri Alarcón, Rogelio Sebastián Viteri Alarcón y Rosa María Humbertina Gallegos Pozo serían los beneficiarios de eventuales medidas de reparación que sean dictadas por la Corte IDH, en virtud del principio de seguridad jurídica.

A continuación, el Estado expondrá sus observaciones en cuanto a las pretensiones de las presuntas víctimas.

### **3.1. Medidas de compensación solicitadas**

#### **3.1.1. Daño Material**

La Corte IDH define el daño material de la siguiente manera:

El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos, los gastos

<sup>294</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso J. Vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 2013, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 23. Ver también: Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 65 a 68. Caso Chaparro Álvarez y Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 224 a 225. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, nota al pie 214, y Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 27.

<sup>295</sup> CIDH, Informe No. 8/20. Caso 12.999. Fondo. Julio Rogelio Viteri Ungaretti y Familia. Ecuador. 3 de marzo de 2020.

efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con las violaciones.<sup>296</sup>

En cuanto al daño material, los representantes de las presuntas víctimas solicitan la restitución de los salarios que el señor Viteri dejó de percibir, así como los beneficios y bonificaciones<sup>297</sup>, pretensiones que corresponden al lucro cesante.

En primer lugar, respecto a los salarios y bonificaciones, el Estado recalca que la separación del señor Viteri de las Fuerzas Armadas se generó a raíz de su baja, por solicitud voluntaria.

En efecto, como ya se expuso en acápites anteriores del presente escrito, el 9 de julio de 2002, Ana Lucía Alarcón Gallegos, en calidad de apoderada del señor Viteri Ungaretti, solicitó que se pronuncie su disponibilidad previamente a la baja de la institución, por lo que el señor Viteri fue colocado en una situación de disponibilidad mediante el Decreto ejecutivo N°2917, emitido el 19 de julio de 2002<sup>298</sup>. El 9 de enero de 2003, el señor Viteri fue dado de baja por solicitud voluntaria mediante el Decreto ejecutivo N°3550<sup>299</sup>, y fue puesto en servicio pasivo.

En ese sentido, la separación del señor Viteri de las Fuerzas Armadas corresponde a una decisión voluntaria, y los representantes del señor Viteri no demostraron que esa situación sea imputable a una acción u omisión del Estado. En efecto, como se expuso en acápites anteriores del presente escrito, los representantes del señor Viteri no lograron establecer la veracidad de las alegadas amenazas, ni tampoco que la situación descrita haya justificado su salida del país y su abandono de las Fuerzas Armadas, toda vez que al familia Viteri Alarcón nunca interpuso una denuncia ante las autoridades competentes, y que el señor Viteri nunca cesó de viajar al Ecuador, y desde entonces regresó de forma

---

<sup>296</sup> Corte IDH, Caso Huilca Tecse vs. Perú, Sentencia de 3 de marzo de 2005, (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 93; Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005, (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 150; Caso “Instituto de Reeducción del Menor” vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 283.

<sup>297</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 219.

<sup>298</sup> Decreto Ejecutivo N°2917 de 19 de julio de 2002.

<sup>299</sup> Decreto Ejecutivo N°3550 de 9 de enero de 2003.



Oficio N°01838

Página 139

continua y reiterada a su país de origen, sin reportar ningún inconveniente. Además, resulta que la impugnación de los actos mediante los cuales se dispuso la disponibilidad y baja del señor Viteri demuestra su intención de regresar al Ecuador y reanudar sus actividades en las Fuerzas Armadas, situación que cuestiona la realidad del temor por su seguridad o la de su familia.

Así, los representantes de las presuntas víctimas no evidencian la existencia de un hecho dañoso imputable a las autoridades estatales susceptible de haber sido la causa de su decisión de solicitar su baja de la institución militar. Por lo tanto, en ausencia de hecho dañoso susceptible de poner en riesgo la responsabilidad estatal, no se reúnen los requisitos para resarcir el lucro cesante alegado.

Por lo tanto, las pretensiones emitidas por las presuntas víctimas que estén vinculadas con su decisión unilateral de abandonar el país y salir de las Fuerzas Armadas deberán ser desechadas.

Además de lo anterior señalado, en cuanto a los “otros beneficios” por los cuales los representantes solicitan una reparación, sin precisar a qué beneficios se refieren<sup>300</sup>, cabe referirse a la jurisprudencia constante de la Corte IDH, en la cual se estableció que el monto de la indemnización depende del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial, y que las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores<sup>301</sup>. En tal sentido, la reparación integral implica la reparación de todo el daño, pero se limita al daño, es decir que el restablecimiento de la víctima en la situación en la cual se hubiera encontrado si no hubiera ocurrido el hecho dañoso, no puede implicar su enriquecimiento.

Ahora bien, de la información disponible se desprende que el señor Viteri, por estar en servicio pasivo, sigue gozando de prestaciones brindadas por el Instituto de Seguridad

---

<sup>300</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 219.

<sup>301</sup> Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Sentencia de 3 de diciembre de 2001, (Reparaciones y Costas), párr. 42; Caso Cesti Hurtado vs. Perú, Sentencia de 31 de mayo de 2001, (Reparaciones y Costas), párr. 36; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 26 de mayo de 2001, (Reparaciones y Costas), párr. 63; y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), Sentencia de 25 de mayo de 2001, (Reparaciones y Costas), párr. 79.

Social de las Fuerzas Armadas, beneficios que le corresponde percibir de forma vitalicia. En efecto, con acuerdo N°003159 de 12 de junio de 2003, emitido por la Junta de Calificación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas<sup>302</sup>, se resolvió otorgar las siguientes prestaciones en beneficio del señor Viteri:

- Seguro de retiro, invalidez y muerte con una pensión mensual de retiro, sujeta a revalorizaciones, que a la fecha alcanza el valor de 2.662,06 dólares. Los montos de esa prestación vitalicia se transfieren a la cuenta del Banco General Rumiñahui perteneciente a su apoderada, la señora Ana Alarcón;<sup>303</sup>
- Seguro de cesantía por el valor de 57.315,60 dólares, monto del cual se realizó las respectivas deducciones legales e institucionales, dejando un valor total de 38.172,47 dólares, monto cancelado en una sola vez el 13 de mayo de 2005 a la misma cuenta bancaria antes referida.<sup>304</sup>

Por otro lado, en virtud del mismo principio que prohíbe el enriquecimiento a través de la reparación, la presunta víctima no podría, de ninguna manera, solicitar una indemnización por un pago que no guarda relación con el supuesto hecho dañoso alegado. Ahora bien, los representantes del señor Viteri pretenden que se restituya el “pago de aportes efectuados al Club Naval de Oficiales, con los intereses”.<sup>305</sup>

Al respecto, el Estado hace notar que el señor Viteri se abstiene de aportar elementos probatorios para sustentar el pago de la cuota mensual para pertenecer al Club Naval, y se abstiene de indicar hasta cuando habría cumplido con el pago de esas mensualidades.

En todo caso, el Club Naval de Guayaquil corresponde a un centro de recreación, para Oficiales de la Armada en servicio activo, pasivo, socios civiles y sus dependientes, cuyo propósito es fomentar las actividades sociales, culturales y deportivas, como lo indica el estatuto de esa entidad de derecho privado<sup>306</sup>. En virtud de ello, la membresía de sus

---

<sup>302</sup> Acuerdo N°003159 de 12 de junio de 2003, emitido por la Junta de Calificación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

<sup>303</sup> Oficio ISSFA-DG-2021-2193-OF de 8 de diciembre de 2021, emitido por el Director General del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Encargado.

<sup>304</sup> *Ibíd.*

<sup>305</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 219.

<sup>306</sup> Estatuto del Club Naval de Guayaquil.

afiliados es meramente voluntaria. Por lo tanto, los aportes que habrían sido desembolsados para pertenecer a ese centro de recreación son absolutamente ajenos a lo que puede considerarse como un daño resarcible, puesto que su pago no guarda relación alguna con las supuestas vulneraciones analizadas dentro del presente caso. El señor Viteri no estaba obligado a pagar dichos montos, y si lo hizo fue por voluntad propia, para ser miembro de una asociación, y aprovechar de los beneficios correspondientes, por lo que esa pretensión deberá ser desestimada por ser manifiestamente improcedente.

### 3.1.2. Daño inmaterial

La Corte IDH determinó en su jurisprudencia que el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas o sus condiciones de existencia.<sup>307</sup>

Al respecto, cabe notar que, en el párrafo 226 de su escrito que dedican a la cuestión, los representantes de las presuntas víctimas no exponen en qué consistiría el supuesto daño inmaterial alegado ni tampoco presentan elementos probatorios que permita justificar su alcance.

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, respecto a otra medida de reparación tendiente a reparar el daño psicológico, los representantes de las presuntas víctimas también señalan lo siguiente:

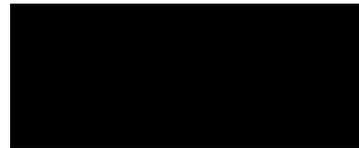
[...] En la actualidad no conocemos con certeza los problemas de fondo a nivel personal [...]<sup>308</sup>

Así, del propio reconocimiento de los representantes de las presuntas víctimas, no existe certeza en cuanto a la realidad del daño psicológico alegado. Ahora bien, la reparación del daño supone que se reúnan tres elementos esenciales: la demostración de un hecho

---

<sup>307</sup> Corte IDH, Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 11 de marzo de 2005, (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 125; Caso Huilca Tecse, párr. 96; y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, párr. 156.

<sup>308</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 221.



dañoso, la existencia de un daño y una relación de causalidad entre estos. En ausencia de certeza respecto a la existencia misma del daño alegado, resulta incomprensible que los representantes de las presuntas víctimas soliciten cualquier tipo de reparación.

Por lo tanto, el Estado solicita que la pretensión relativa al daño inmaterial sea desechada, toda vez que no se encuentra justificada.

### 3.1.3. Daño al proyecto de vida

En cuanto al concepto del daño al proyecto de vida, la Corte IDH determinó en su jurisprudencia que:

Caso Loayza Tamayo, Reparaciones y Costas.

147. [...] el denominado “proyecto de vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.

148. El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. [...]

150. [...] En otros términos, el “daño al proyecto de vida”, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, **implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable**. Así, la existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses.<sup>309</sup> [Lo resaltado me pertenece]

En su escrito, los representantes de las presuntas víctimas solicitan una indemnización por el supuesto daño al proyecto de vida, alegando lo siguiente:

228. En el caso concreto, es evidente cómo el proyecto de vida de Rogelio Viteri, Rocío Alarcón y su familia, fue contrariado y sus expectativas de desarrollo personal y profesional, factibles en condiciones normales, fueron interrumpidos

<sup>309</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, (Reparaciones y Costas), párr. 147 a 150.

por los hechos violatorios debido a que: 1) toda la familia se vio obligada a dejar sus raíces de orden familiar y cultural, y trasladarse al extranjero para continuar su vida, 2) Michelle Viteri y Sebastián Viteri interrumpieron sus estudios, 3) Rocío Alarcón y Rogelio Viteri interrumpieron su labor profesional como bióloga etnobotánica y oficial de la Fuerza Naval, respectivamente, y durante varios momentos de este proceso les fue negada la posibilidad de trabajar por lo que tuvieron que subsistir de la caridad pública.<sup>310</sup>

Al respecto, en primer lugar, el Estado reitera que los representantes de las presuntas víctimas no han logrado justificar que las circunstancias denunciadas ante el Sistema Interamericano por la familia Viteri Alarcón hayan justificado su cambio de residencia fuera del territorio ecuatoriano, toda vez que, como ya se expuso, el temor relatado por las presuntas víctimas nunca se materializó, que el señor Viteri tuvo el proyecto de regresar al Ecuador y seguir con su carrera militar a partir del mes de febrero de 2003, y que desde la época de los hechos y hasta la presente fecha, el mismo señor Viteri ha regresado en 21 ocasiones, y su esposa en 27 ocasiones al Ecuador por estadias de larga duración, sin que se haya manifestado cualquier tipo de incidente. Así, las alegaciones tendientes a establecer un supuesto desplazamiento forzado no se encuentran fundadas ni justificadas por las circunstancias del presente caso, por lo que los daños alegados que deriven de esa pretensión deberán ser desestimados por ser infundados.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación, el Estado analizará en más detalle la procedencia de la medida de reparación solicitada por el supuesto daño al proyecto de vida, para cada presunta víctima que alega su beneficio: es decir el señor Viteri, su esposa y sus dos hijos.

Respecto a la pretensión de la reparación del alegado daño al proyecto de vida del señor Viteri, el Estado reitera que su separación de las Fuerzas Armadas respondió meramente a su voluntad, puesto que solicitó su disponibilidad. Así, el cambio de carrera del señor Viteri no es imputable a las acciones u omisiones de las autoridades estatales por lo que el daño alegado no corresponde a la definición del daño al proyecto de vida antes referida de la jurisprudencia interamericana, que exige que los factores que generen el cambio

---

<sup>310</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 228.



sean ajenos a la presunta víctima. En tal sentido, la pretensión del señor Viteri en cuanto a su proyecto de vida deberá ser desestimada toda vez que el daño alegado no es imputable a las autoridades estatales.

Respecto a la señora Ligia Alarcón, lo que correspondería realizar es una comparación entre las oportunidades de desarrollo personal, no solamente profesional, que hubiera tenido en Ecuador y las que tiene en su situación actual, para evidenciar si existe o no algún daño en forma irreparable, como lo exige la jurisprudencia interamericana antes citada. Sin embargo, los representantes de las presuntas víctimas se abstienen de realizar este análisis, limitándose a enunciar las calificaciones profesionales de la señora Alarcón para concluir que se configura un daño a su proyecto de vida, sin describir cuál es la situación de desarrollo personal y profesional de la señora Alarcón en la actualidad. Como lo establece la Corte IDH en su jurisprudencia antes citada, el “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone, concepto mucho más amplio que una carrera profesional. Por lo tanto, en ausencia de argumentos y elementos probatorios que permitan sustentar su pretensión, el Estado solicita que la pretensión de la señora Alarcón en cuanto a su proyecto de vida sea desestimada., toda vez que no se encuentra justificada.

En cuanto a los hijos del señor Viteri, Michelle y Sebastián Viteri, cabe señalar que, según la jurisprudencia interamericana antes referida, para configurarse el daño al proyecto de vida, las presuntas víctimas deben demostrar que la pérdida de oportunidades de desarrollo personal se dio en forma irreparable. Ahora bien, en su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes se limitan a enunciar que Michelle y Sebastián Viteri “interrumpieron sus estudios”, sin precisar qué estudios cursaban, cuánto tiempo tuvieron que dejar sus estudios, qué consecuencias concretas se generaron a raíz de ello, ni cuál es su situación actual. La manifiesta falta de argumentos y elementos probatorios para sustentar su pretensión no permite evidenciar que se configura cualquier daño al proyecto de vida en perjuicio de los hijos del señor Viteri. Por lo tanto, el Estado solicita

que la medida de reparación solicitada en beneficio de Michelle y Sebastián sea desestimada, toda vez que no se encuentra justificada.

### **3.2. Medidas de restitución solicitadas**

#### **3.2.1. Reincorporación a la fuerza naval**

Respecto a esa pretensión, el Estado reitera que los representantes del señor Viteri no demostraron que su decisión voluntaria de abandonar las Fuerzas Armadas sea imputable a una acción u omisión del Estado. En efecto, como se expuso en acápite anterior del presente escrito, los representantes del señor Viteri no lograron demostrar la veracidad de las alegadas amenazas, ni tampoco que la situación descrita haya justificado su salida del país y su abandono de las Fuerzas Armadas, toda vez que la familia Viteri Alarcón nunca interpuso una denuncia ante las autoridades competentes, que el señor Viteri tuvo el proyecto de regresar al Ecuador y reanudar sus actividades militares desde el mes de febrero de 2003, que el señor Viteri nunca cesó de viajar al Ecuador, y desde entonces regresó de forma continua y reiterada a su país de origen, sin reportar ningún inconveniente. Así, los representantes de las presuntas víctimas no evidencian la existencia de un hecho dañoso imputable a las autoridades estatales susceptible de haber sido la causa de su decisión de solicitar su baja de la institución militar. En ausencia de hecho dañoso susceptible de poner en riesgo la responsabilidad estatal, no se reúnen los requisitos para reincorporar al señor Viteri a la Fuerza Naval, dado que su separación de las Fuerzas Armadas no se debe a las actuaciones u omisiones de las autoridades nacionales, sino a una decisión personal.

Por lo tanto, las pretensiones emitidas por las presuntas víctimas que estén vinculadas con su decisión unilateral de abandonar el país y salir de las Fuerzas Armadas deberán ser desechadas.

#### **3.2.2. Otorgamiento del ascenso al grado de Almirante.**

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso no consentido de que la Corte IDH considere que corresponde reincorporar al señor Viteri al servicio activo, a continuación, el Estado

realizará un análisis respecto a la pretensión de obtener el grado de Almirante.

En su escrito, los representantes de las presuntas víctimas solicitan el “otorgamiento del ascenso al grado de Almirante” en beneficio del señor Viteri, alegando, se supone, que las circunstancias descritas, imputables según él a las autoridades estatales, le habrían impedido llegar al grado de Almirante que proyectaba a futuro<sup>311</sup>. Sin embargo, la presunta víctima no demuestra que el supuesto hecho dañoso sea la causa directa e inequívoca del hecho de que su carrera militar no haya llegado al grado de Almirante.

La determinación de la responsabilidad exige que la conducta litigiosa pueda ser vinculada con el daño alegado a través de una relación de causalidad, mediante la cual se hace posible la atribución material de este a aquella como causa<sup>312</sup>. La determinación de una relación de causalidad directa e inequívoca constituye un requisito esencial para establecer la responsabilidad y la obligación de reparación. En *Common law*, la relación de causalidad se determina con el análisis del “*but-for test*” también llamado “*sine qua non test*” que permite concluir que sin la existencia de la conducta, el daño no hubiera sucedido<sup>313</sup>. Ahora bien, al evaluar las circunstancias concretas del caso, se deben considerar otros factores susceptibles de entorpecer el proyecto del señor Viteri de llegar al grado de Almirante, aún en el supuesto de que no haya experimentado las amenazas alegadas y de que haya seguido su carrera militar.

En virtud de ese principio, en el caso concreto, la presunta víctima debe demostrar que, si no fuera por las supuestas amenazas que, según él, le habrían forzado a renunciar a las Fuerzas Armadas, hubiera logrado ascender en la jerarquía militar hasta el grado de Almirante.

En el marco de la audiencia llevada ante la Corte, el señor Viteri declaró lo siguiente:

---

<sup>311</sup> Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr. 219.

<sup>312</sup> L. Cadiet, Ph. Le Tourneau, Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats, 2002/2003, N° 1704.

<sup>313</sup> Mark P. Gergen, Torts: Accident Law, Aspen Custom Publishing Series, UC Berkeley Law School, p. 184.



Oficio N°01838

Página 147

[Vicepresidente Juez Eduardo Ferrer Mac Gregor] Usted dice que como una reparación es volver a su país, que le reintegren y ¿en qué puesto sería en qué según su percepción con los años transcurridos?

[Viteri] Específicamente y por mi proyección profesional que tiene que ser evaluada mi carrera de vida al momento en que comenzó este problema que vean de ahí a dónde Cuál era el siguiente paso yo tenía que ascender no había nada que diga que yo no ascienda. Yo tenía, y era mi derecho ascender porque si no se hubiese sucedido, se rompían todas las reglas. Ahí está la hoja de vida que tengo cursos, comportamiento, disciplina, dedicación al trabajo, atención al más necesitado [...].

[Vicepresidente Juez Eduardo Ferrer Mac Gregor] ¿Cuál sería el rango?

[Viteri] La secuencia en rangos: capitán de navío, luego viene contralmirante, vicealmirante y almirante. Yo, en mi plan de vida, era ser almirante, allá estaba enfocado mi esfuerzo, mi dedicación y mi proyección, no había nada que frene ese camino que yo tenía trazado en mi carrera.

De lo anterior se desprende que la medida de reparación solicitada se origina en una proyección del señor Viteri, basada en una concepción equivocada, dado que pretende que tenía el “derecho” de ascender. Esa pretensión del señor Viteri es irrealista, comparándola con los criterios emitidos por el perito Juan Pablo Aguilar en su peritaje sometido por los representantes de las presuntas víctimas a la Corte IDH:

25. Para entender a cabalidad el régimen de ascensos, es necesario tomar en cuenta que la jerarquía militar se estructura como una pirámide, en la que los cargos disponibles se reducen conforme se avanza a los grados superiores del escalafón militar. [...]

26. Son los cargos disponibles para cada grado, los que definen la posibilidad de ascenso. En otras palabras, solo puede ascender el número de oficiales necesario para cubrir las vacantes disponibles, como se desprende con claridad del artículo 101 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas.

28. La consecuencia de lo anterior es clara: solo una parte de quienes emprenden la carrera militar puede ascender hasta el grado superior y, necesariamente, los demás deberán abandonar esa carrera en algún momento.



Oficio N°01838

Página 148

29. Esto es absolutamente necesario, pues la estructura jerárquica propia de la institución militar no funcionaría, si el número de oficiales superiores fuera el mismo que el de aquellos sobre los cuales ejercen el mando.<sup>314</sup>

Según se desprende de lo expuesto por Juan Pablo Aguilar, la naturaleza misma de la institución militar conlleva a inestabilidad e inseguridad para el personal militar, pues “solo una parte de quienes emprenden la carrera militar puede ascender hasta el grado superior y, necesariamente, los demás deberán abandonar esa carrera en algún momento.”

En sus respuestas a las preguntas formuladas por el Estado, el señor Aguilar declara que independientemente de sus habilidades y competencias, el personal militar que no pudo ascender por falta de vacantes de rango superior, será eliminado.

El ascenso militar no es automático, como se desprende a la normativa militar:

Ley de Personal de Fuerzas Armadas

Art. 101.- El ascenso constituye un derecho del militar para pasar al grado inmediato superior, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley, **siempre que existiere la correspondiente vacante orgánica.**<sup>315</sup>

Ley de Situación Militar y Ascenso

Art. 88.- Condición indispensable para el ascenso, es la plena comprobación de la capacidad para el desempeño del nuevo grado, de acuerdo con el Reglamento del Consejo Superior Militar.

**La antigüedad por sí sola, en ningún caso, da derecho para el ascenso.**<sup>316</sup> [Lo resaltado me pertenece]

Así, a menos de existir una vacancia al grado superior, el ascenso proyectado no puede realizarse. En dicho caso, el militar que no pueda ascender, por falta de vacancia, es separado de la institución militar mediante el proceso de disponibilidad previo a la baja.

Ahora bien, como se desprende de la información proporcionada por el Ministerio de Defensa Nacional, ninguno de los militares de los militares miembros de la promoción

<sup>314</sup> Peritaje Juan Pablo Aguilar.

<sup>315</sup> Ley de Personal de Fuerzas Armadas, publicada en el Registro Oficial Suplemento 660, el 10 de abril de 1991.

<sup>316</sup> Ley de Situación Militar y Ascenso, publicada en el Registro Oficial Suplemento 356, el 6 de noviembre de 1961.



**Oficio N°01838**

Página 149

naval a la cual pertenecía el señor Viteri llegó al grado de Almirante<sup>317</sup>. Todos se encuentran en servicio pasivo, al igual que el señor Viteri.

Solo uno de los militares de esa promoción llegó al grado de Vicealmirante, y el resto de ellos no pasaron del grado de Capitán, al igual que el señor Viteri cuando se dio su baja. Todos los miembros pertenecientes a la misma promoción que el señor Viteri fueron dados de baja en el año 2005 o 2006, es decir dos o tres años después del señor Viteri, con excepción del militar que llegó al grado de Vicealmirante, quien salió de la institución en el año 2008.

De lo anterior se desprende que el personal militar perteneciente a la promoción del señor Viteri que no haya podido ascender, por falta de vacancia o por incumplir cualquier requisito determinado en la normativa militar, ha tenido que abandonar la institución, una vez cumplido el tiempo de permanencia en el grado correspondiente. En virtud del artículo 118 de la entonces vigente Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, el tiempo de permanencia en el grado para un capitán de navío era de 6 años<sup>318</sup>. Una vez cumplido el tiempo de permanencia en el grado, el personal que no pudo ascender es separado de la institución militar, situación que se ve reflejada en las hojas de vida de todos los demás miembros de la promoción a la cual pertenecía el señor Viteri.

La salida de la institución de todos los miembros de la promoción del señor Viteri concuerda con las explicaciones que dio el perito Aguilar respecto al tiempo de permanencia en el grado.

Esos datos evidencian que ninguno de los militares que eran parte de la misma promoción llegó al grado anhelado por el señor Viteri, y todos salieron de la institución 2 o 3 años después del señor Viteri, a pesar de que no vivieron las mismas circunstancias denunciadas por él.

---

<sup>317</sup> Hojas de vida de los militares miembros de la promoción a la cual pertenecía el señor Viteri.

<sup>318</sup> Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, artículo 118. Registro

En ese sentido, resulta ilusorio pretender que, si no fuera por las alegadas vulneraciones de derecho, el señor Viteri hubiera logrado la carrera militar anhelada, y peor aún, que hubiera permanecido como militar en servicio activo hasta la presente fecha, puesto que, de todas formas, la realización de ese proyecto dependía de una multitud de factores ajenos a las acciones estatales analizadas dentro del presente caso.

Respecto a los factores que podrían haber entorpecido el anhelo del señor Viteri, el Estado señala que, tanto en la declaración de la señora Alarcón como en la del señor Viteri en la audiencia, se pudo percibir que la señora Alarcón estaba alejada de los eventos sociales que son una parte integrante de la vida militar. Es así que, en su declaración, la señora Alarcón resalta que: “Siempre fui, he sido y seré una mujer ajena a la milicia y sus protocolos [...]” La distancia que la señora Alarcón ha querido enfatizar con las Fuerzas Armadas, y la vida social inherente a sus costumbres, era susceptible de afectar las posibilidades de ascenso de su esposo, toda vez que el espíritu de cuerpo constituye la esencia de la institución militar.

Así, se evidencia que la realización del proyecto anhelado era muy improbable, aun en el evento de que el alegado hecho dañoso no se haya producido.

Por lo tanto, los representantes del señor Viteri no lograron demostrar la relación de causalidad directa e inequívoca entre el daño alegado (esto es el hecho de no haber llegado al grado de Almirante) y el supuesto hecho dañoso (es decir las supuestas vulneraciones de derecho imputadas al Estado), dado que el mismo resultado hubiera ocurrido aún sin la existencia del supuesto hecho dañoso, debido a las exigencias y dificultades inherentes a la realización del proyecto planteado.

En virtud de lo anterior, los representantes de las presuntas víctimas no lograron establecer la obligación estatal de reparar el daño alegado, por lo que la medida de reparación solicitada deberá ser desechada por ser improcedente.

### 3.2.3. Condecoración por 30, 35 y 40 años de servicio

Los argumentos antes expuestos también son aplicables a la medida solicitada de condecoración por 30, 35 y 40 años de servicio<sup>319</sup>. En efecto, para que se otorgue una medida de reparación, se debe demostrar que el daño alegado no hubiera ocurrido en ausencia del supuesto hecho dañoso, es decir se debe probar la relación de causalidad entre el hecho dañoso y el daño.

Según su hoja de vida militar, el señor Viteri cumplió 26 años y 23 días de servicio en las Fuerzas Armadas<sup>320</sup>. Ahora bien, como lo acaba de demostrar el Estado, las carreras militares no son carreras profesionales que ostentan la estabilidad o durabilidad laboral que los representantes del señor Viteri sugieren. En efecto, de la información proporcionada por el Ministerio de Defensa Nacional<sup>321</sup>, ninguno de los militares que fueron parte de la misma promoción que el señor Viteri se encuentra en servicio activo en la actualidad. Es más, solo uno de los quince miembros de la promoción del señor Viteri cumplió más de 30 años de servicio en las Fuerzas Armadas, y se trata del único militar de la promoción que llegó a un grado superior al de Capitán, como Vicealmirante, y salió del servicio activo después de 31 años de servicio. Todos los demás militares de esa promoción cumplieron entre 28 y 29 años de servicio, excluyéndoles de las condecoraciones anheladas por el señor Viteri.

Por lo tanto, no se puede pretender que, si no fuera por las circunstancias denunciadas ante el Sistema Interamericano, el señor Viteri hubiera llegado a ser condecorado por 30, 35 o 40 años de servicio, dado que los representantes del señor Viteri no demuestran siquiera que la realización de ese proyecto haya sido probable en ausencia del supuesto hecho dañoso. Por lo tanto, y a la luz de los elementos aportados por el Estado que cuestionan la probabilidad del proyecto anhelado, la pretensión deberá ser desestimada.

#### 3.2.4. Certificar la eliminación de las faltas, “limpiando su libreta de vida naval”

Como ya fue expuesto en acápites anteriores del presente escrito, el 28 de agosto de 2002, mediante la resolución N° 239-2002-RA, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso

<sup>319</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 219.

<sup>320</sup> Libreta de vida naval de CPNV Viteri Ungaretti Julio Rogelio, emitida por la Dirección General del Talento Humano de la Armada del Ecuador, reporte de 1 de diciembre de 2021.

<sup>321</sup> Hojas de vida de los militares miembros de la promoción a la cual pertenecía el señor Viteri.

de amparo constitucional a favor del accionante respecto a la pretensión de eliminar las sanciones disciplinarias, al considerar que “los arrestos de rigor impuestos al Capitán Rogelio Viteri [eran] ilegítimos”<sup>322</sup>. El Tribunal Constitucional resolvió dejar sin efecto los arrestos de rigor impuestos en su contra, considerando específicamente el daño causado por los arrestos de rigor, los cuales generaban una disminución del puntaje que impediría el ascenso del señor Viteri.<sup>323</sup>

El 28 de octubre de 2002, la sentencia del Tribunal Constitucional fue integralmente cumplida por la institución militar, mediante el acta de modificación que canceló los efectos de las sanciones disciplinarias impugnadas<sup>324</sup>. Se desprende además de la hoja de vida militar del señor Viteri que las sanciones disciplinarias impugnadas ante el Tribunal Constitucional fueron borradas.<sup>325</sup>

En tal virtud, la medida de reparación solicitada es improcedente toda vez que ya fue cumplida por las autoridades militares, que se sometieron a la decisión judicial del Tribunal Constitucional, situación que evidencia que el recurso de amparo constitucional fue efectivo y precauteló los derechos del señor Viteri. Por lo tanto, la medida de reparación solicitada deberá ser desestimada por ser improcedente.

### 3.2.5. “Repetición contra los responsables, contemplando la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables”.

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas solicitan la siguiente medida de reparación, como medida de no repetición:

“Repetición contra los responsables, contemplando la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de las violaciones a los derechos humanos expuestos en el presente caso.”<sup>326</sup>

<sup>322</sup> Tribunal Constitucional, Resolución 239-2002-RA de 28 de agosto de 2002.

<sup>323</sup> *Ibídem*.

<sup>324</sup> Acta de modificación de 28 de octubre de 2002, cancela efectos de los arrestos, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional.

<sup>325</sup> Libreta de vida naval de CPNV Viteri Ungaretti Julio Rogelio, emitida por la Dirección General del Talento Humano de la Armada del Ecuador, reporte de 1 de diciembre de 2021.

<sup>326</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 222.

Sobre esa pretensión, el Estado señala nuevamente que el señor Viteri y su familia se abstuvieron en la época de los hechos, y hasta la fecha, de someter al conocimiento de la autoridad competente sus alegaciones en cuanto a las circunstancias exactas en las cuales habrían ocurrido las supuestas amenazas que habrían sufrido. En ausencia de una denuncia que describa las circunstancias precisas de los supuestos actos de hostigamiento, las autoridades nacionales no tuvieron la oportunidad de investigar, y de ser pertinente juzgar y sancionar a los presuntos responsables.

Así, resulta inconsecuente solicitar que se ordene la investigación sea ordenada por medio de una sentencia internacional, puesto que bastaba que el señor Viteri interponga una denuncia para que las autoridades investiguen sus alegaciones.

Por lo tanto, el Estado solicita que la medida de reparación solicitada sea desestimada por ser improcedente a la luz de las circunstancias del caso.

### **3.3. Medida de rehabilitación**

En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas solicitan que se ordene como medida de rehabilitación una terapia psicológica, exponiendo también lo siguiente:

[...] En la actualidad no conocemos con certeza los problemas de fondo a nivel personal [...]<sup>327</sup>

De lo reconocido por los propios representantes de las presuntas víctimas, se concluye que no someten pruebas que sustenten la existencia del daño alegado ni tampoco de su gravedad. Ahora bien, la reparación del daño supone que se reúnan tres elementos esenciales: la demostración de un hecho dañoso, la existencia de un daño y una relación de causalidad entre estos. En ausencia de certeza respecto a la existencia misma del daño alegado, resulta incomprensible que los representantes de las presuntas víctimas soliciten cualquier tipo de reparación. Por lo tanto, la medida de rehabilitación solicitada deberá ser desestimada.

---

<sup>327</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, Párr. 221.

### 3.4. Medida de “cesación”

Respecto a esa medida, los representantes de las presuntas víctimas alegan que:

220. Sobre la medida de cesación la medida aplicable sería ordenar la cesación de los actos que vulneran los derechos, como los riesgos y ataques a las que aún se ven expuestos, y que no permiten a las víctimas retornar de forma segura a su país de origen.<sup>328</sup>

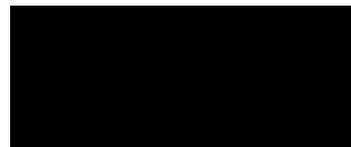
Ahora bien, como ya fue demostrado en acápites anteriores del presente escrito, desde la época de los hechos, el señor Viteri ha regresado al Ecuador en 21 ocasiones y su esposa en 27 ocasiones desde la época de los hechos, quedándose para estadías de larga duración, por varios meses, como por ejemplo en el período 2014-2015, cuando la señora Alarcón permaneció en el territorio ecuatoriano del 27 de enero 2014 al 10 de junio de 2014, y nuevamente del 14 de julio de 2014 al 18 de agosto de 2014, y una vez más viajó al Ecuador del 22 de septiembre de 2014 al 3 de abril del 2015, por lo que en el año 2014, la señora Alarcón pasó más tiempo en el Ecuador que en el país de su residencia. Asimismo, el señor Viteri y la señora Alarcón permanecieron en el Ecuador del 26 de enero de 2020 hasta el 26 de agosto de 2020, es decir 7 meses consecutivos. De esta forma, contrario a lo afirmado por los representantes de las presuntas víctimas en su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los registros migratorios que detallan sus entradas y salidas del Ecuador<sup>329</sup> evidencian que los supuestos “riesgos y ataques” no impidieron su retorno periódico, frecuente y por estadías de largas duración.

Por lo tanto, el Estado solicita que la medida de reparación solicitada sea desestimada por ser manifiestamente improcedente.

### 3.5. Medidas de no repetición: Sistema de denuncias de actos de corrupción y Mecanismo de Protección de las personas denunciantes de actos de corrupción.

<sup>328</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 220.

<sup>329</sup> Certificados de Movimientos Migratorios, emitido por la Unidad de Control Migratorio, Sistema Migratorio Ecuatoriano, Ministerio de Gobierno, reportes de 1 de diciembre de 2021, del señor Julio Rogelio Viteri Ungaretti y la señora Ligia Rocío Alarcón Gallegos.



En su Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, los representantes de las presuntas víctimas solicitan a la Corte IDH que ordene las siguientes medidas de no repetición:

Establecer un sistema de denuncias de actos de corrupción [...]

Desarrollar un mecanismo de protección de las personas que denuncien actos de corrupción, para protegerlos que no sean afectados sus derechos, planes de vida personal y familiar.<sup>330</sup>

Los representantes también exponen los siguientes argumentos:

131. De los hechos del caso se desprende que Rogelio Viteri Ungaretti realizó su denuncia ante el Embajador de Ecuador en Reino Unido, debido a que a criterio de la víctima él sería la única autoridad que no estaría subordinada a los implicados en los actos de corrupción. Este hecho per se demuestra que al interior del estado ecuatoriano y de la institución militar del Ecuador, no existía, y aún no existe, un mecanismo de reporte seguro que permita la presentación de denuncias en el marco del servicio público. El estado ecuatoriano carece del primer eslabón en esta cadena de protección de denunciantes. Es decir, una forma segura que garantice que los denunciantes no sean víctimas de represalias futuras.<sup>331</sup>

Sobre ese punto, el Estado manifiesta su sorpresa ante el aparente desconocimiento de los representantes del señor Viteri respecto al estado actual de la legislación ecuatoriana en cuanto a la protección de los denunciantes de actos de corrupción.

Como se expuso en un acápite anterior del presente escrito, la normativa penal actual garantiza un alto grado de protección a favor de los denunciantes de los actos de corrupción, e incluso propone un incentivo monetario en su beneficio, demostrando la absoluta voluntad del legislador y de la Administración ecuatoriana para luchar en contra de los actos de corrupción que son nefastos para la democracia, y también para garantizar que los denunciantes no se vean afectados.

En su artículo 421, el Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP) establece la posibilidad para cualquier persona de presentar una denuncia ante un delito común, lo cual contrasta con la obligación de denuncia que incumbe a cualquier ciudadano que tenga

---

<sup>330</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 222.

<sup>331</sup> Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, párr. 131.

conocimiento de la comisión de un acto de corrupción, como se desprende del artículo 422.1 del mismo código:

Art. 421.- Denuncia.- La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de ejercicio público de la acción, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal o ciencias forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito.

La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación personal del denunciante, procesado o de la víctima, se guarden en reserva para su protección.

Cualquier persona podrá presentar una denuncia en el caso de infracciones que afecten derechos colectivos, difusos o de la naturaleza.<sup>332</sup>

Art. 422.1.- Deber ciudadano de denunciar.- Todo ciudadano que en el desempeño de su actividad, conociere de la comisión de un presunto delito de obstrucción de la justicia, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, testaferrismo, sobrepuestos en contratación pública, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada; actos de corrupción en el sector privado, acoso sexual, abuso sexual y demás delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en especial cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, **denunciará dichos actos de manera inmediata a las autoridades competentes.**

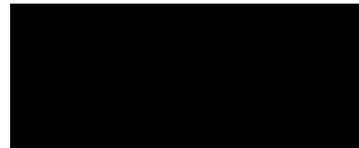
Los nombres, apellidos y demás datos de identidad del denunciante serán considerados información reservada, debiendo protegerse esta información por parte de las instituciones responsables y así garantizar la protección de la identidad de la persona que denuncia.<sup>333</sup>

Considerando la carga adicional que reposa sobre el denunciante de un acto de corrupción, que tiene la obligación de denunciar, contrario al ciudadano que constata la comisión de un delito común, el legislador estableció la necesidad de brindar una protección reforzada a través de la reserva de identidad, con la atribución de un código

---

<sup>332</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 421, Nota: Inciso tercero agregado por artículo 76 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 107 de 24 de diciembre del 2019.

<sup>333</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 422.1, Nota: Artículo agregado por artículo 16 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 17 de febrero del 2021.



Oficio N°01838

Página 157

alfa numérico especial, que permite su participación dentro de la investigación y el subsecuente proceso penal, salvaguardando sus derechos:

COIP, Art. 430.1.- Denuncia con reserva de identidad.- La denuncia o información por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; obstrucción de la justicia, sobrepuestos en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado; así como lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, enriquecimiento privado no justificado, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes o sicariato, acoso sexual, abuso sexual y demás delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en especial cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, por razones de seguridad, podrá presentarse con reserva de la identidad de la o el denunciante. **Esta denuncia será registrada con un código alfa numérico especial que identifique a la persona denunciante y con el propósito de preservar la integridad física, psicológica y material, así como las condiciones laborales actuales del denunciante y su familia.**

Se mantendrá un registro cronológico de las personas que intervengan en el trámite de las denuncias presentadas con reserva de identidad, quienes quedarán impedidas de divulgar cualquier información relacionada con la identidad de los denunciados así como aquella que permita su identificación.

La persona que denuncie podrá solicitar el ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, y el otorgamiento de una o varias de las medidas contempladas en el reglamento correspondiente. La o el fiscal valorará la pertinencia de esta solicitud.<sup>334</sup>

Como se desprende del último inciso de la normativa antes citada, la seguridad del denunciante también se encuentra garantizada a través de las medidas de protección que puedan ser emprendidas en el marco de su ingreso en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal, dirigido por la Fiscalía General del Estado, como se desprende de los artículos 445 y siguientes del COIP y del Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, normas que rigen este sistema:

<sup>334</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 430.1, Nota: Artículo agregado por artículo 78 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 107 de 24 de diciembre del 2019. Nota: Inciso primero sustituido por artículo 17 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 17 de febrero del 2021.



Oficio N°01838

Página 158

**COIP**, Art. 445.- Organización.- La Fiscalía dirige el Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, a través del cual todos los partícipes en la investigación preprocesal o en cualquier etapa del proceso, podrán acogerse a las medidas especializadas de protección y asistencia para precautelar su integridad y no revictimización, cuando se encuentren en peligro.

Este Sistema contará con los recursos necesarios provenientes del Presupuesto General del Estado, para su eficiente gestión.<sup>335</sup>

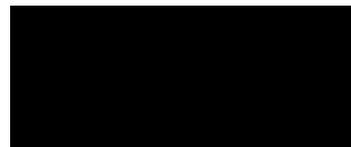
**Reglamento para el SPAVT**, Art. 9.- Derechos de las personas protegidas.- Siempre que una persona protegida cumpla con las obligaciones del presente reglamento, ésta tendrá los siguientes derechos:

1. Ingresar y permanecer en el SPAVT mientras subsistan los factores que motivaron su ingreso;
2. Solicitar el egreso del SPAVT en cualquier momento;
3. No ser discriminada por ninguna razón;
4. Aplicando el principio de voluntariedad la persona protegida podrá renunciar a la asistencia siempre que manifieste por escrito, quedando a salvo su derecho de ser el caso, recibir las mismas en otro momento.
5. Ser informada por el SPAVT respecto del estado del proceso penal y de las acciones que realice el SPAVT;
6. No ser revictimizada, para ello el Fiscal que lleve el caso deberá gestionar la recepción del testimonio anticipado, utilización de la cámara de Gessell y toda acción que garantice la no revictimización de la persona protegida;
7. Cuando las circunstancias lo ameriten, las medidas de protección y asistencia podrán extenderse a su familia ampliada cumpliendo con los parámetros establecidos en este Reglamento; y,
8. Ser asistido por un traductor cuando no hable el idioma español; así como también, recibir información en un lenguaje accesible a su grupo étnico y nacionalidad.<sup>336</sup>

---

<sup>335</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 445.

<sup>336</sup> Reglamento Sustitutivo Para El Sistema De Protección Y Asistencia A Víctimas, Testigos Y Otros Participantes En El Proceso Penal, art. 9.



Una de las disposiciones legales adoptadas más relevantes a favor de los denunciantes de los actos de corrupción es el incentivo monetario establecido en el COIP en caso de denuncia o entrega de información que permita recuperar los fondos públicos ilegalmente apropiados:

COIP, Art. 430.2.- Incentivos por denuncia o información efectiva.- La persona que aporte con elementos probatorios que permitan la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada; obstrucción de la justicia, sobrepagos en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado; enriquecimiento privado no justificado y producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, **podrá acceder a una compensación económica proporcional a los recursos económicos que el Estado logre recuperar, hasta un monto de entre el 10 % y máximo el 20 % de lo recuperado.** Una vez recuperados los fondos y activos el juez dispondrá la entrega inmediata de los recursos.

Se podrá acceder a este beneficio una vez que se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada.

No podrán acceder a este beneficio quienes, en cualquier grado, hayan participado en la comisión de la infracción.<sup>337</sup>

Esa herramienta que incentiva las denuncias ciudadanas responde a la voluntad inequívoca del legislador ecuatoriano de encontrar soluciones y estrategias concretas para prevenir los actos de corrupción, combatir la impunidad y recuperar los fondos públicos que fueron sustraídos. Cabe recalcar que el Ecuador es pionero en la región en implementar ese tipo de instrumentos dentro de una política pública de lucha contra la corrupción.

Otra medida legislativa de protección consiste en garantizar que el denunciante no tenga participar en el proceso penal, como lo establece el artículo 431 del COIP:

<sup>337</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 430.2, Nota: Artículo agregado por artículo 79 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 107 de 24 de Diciembre del 2019. Nota: Inciso primero sustituido por artículo 18 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 392 de 17 de Febrero del 2021.

COIP, Art. 431.- Responsabilidad.- La o el denunciante no es parte procesal, pero responderá en los casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria.<sup>338</sup>

Esa medida también tiene como propósito garantizar la seguridad personal y la confidencialidad de la identidad de los ciudadanos que de buena fe denuncien actos de corrupción.

Las medidas legislativas antes descritas cumplen con los estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción.

Cabe señalar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene atribuciones específicas de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes de estos delitos, en virtud de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:

Art. 13.- Atribuciones en el fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción.- Son atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo relativo al fomento a la transparencia y lucha contra la corrupción lo siguiente: [...] 7. Solicitar a la Fiscalía la protección de las personas que denuncien o testifiquen en las investigaciones que lleve a cabo el Consejo, a través del sistema de protección de víctimas y testigos. En caso de riesgo inminente instará la actuación inmediata de la Fiscalía.<sup>339</sup>

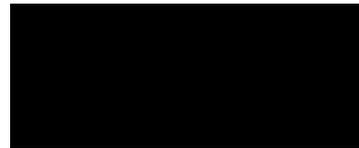
Además de las denuncias que sean interpuestas ante la Fiscalía, los denunciantes también pueden denunciar actos de corrupción ante la Contraloría General del Estado, institución pública responsable de controlar los recursos públicos para precautelar su uso eficiente, en beneficio de la sociedad.

Considerando lo anterior expuesto, el Estado señala que las medidas solicitadas en cuanto al establecimiento de un sistema de denuncias de actos de corrupción y un mecanismo de protección de los denunciantes son improcedentes, dado que ya fueron implementadas en

---

<sup>338</sup> Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial Suplemento 180, el 10 de febrero de 2014, artículo 431.

<sup>339</sup> Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, publicada en el Registro Oficial Suplemento 22, el 9 de septiembre de 2009.



el ámbito interno, incluso brindando un grado de protección mayor que las demás legislaciones de la región.

### 3.6. Medidas de satisfacción

En cuanto a las medidas de satisfacción, el Estado reitera lo que demostró a lo largo del presente escrito, que es haber cumplido con sus obligaciones internacionales, al proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos establecidos en la Convención Americana, por lo que no se configura ninguna infracción a las normas convencionales que implique la responsabilidad internacional del Ecuador, motivo por el cual, la Corte IDH deberá desestimar las medidas de satisfacción solicitadas.

Además de lo anterior, respecto a la medida simbólica solicitada de plantación de árboles, el Estado señala que la reparación susceptible de ser ordenada por la Corte IDH responde al principio de *restitutio in integrum*, es decir la necesidad de reestablecer a la víctima en la situación en la cual hubiera estado si el hecho dañoso no hubiera ocurrido. Ese principio exige que las medidas de reparación que fueran otorgadas sean efectivamente susceptibles de resarcir el daño causado, excluyendo las pretensiones que son ajenas a ese propósito. En ese sentido, la medida de plantación de árboles, la cual podría ser pertinente en un caso en el cual se discuta la eventual vulneración de derechos humanos en el marco de un daño ambiental, es ajena a la temática analizada dentro del presente caso. Por lo tanto, dicha medida es improcedente en el contexto del caso bajo estudio.

### 4. Petitorio.-

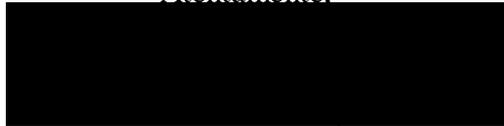
De conformidad a las argumentaciones presentadas por el Estado ecuatoriano, se solicita a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo siguiente:

4.1.- Aceptar las excepciones preliminares presentadas por el Estado ecuatoriano, y declarar la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer el presente caso, respecto a las pretensiones ya solventadas en el ámbito interno ante las autoridades judiciales internas, y respecto a la pretensión indemnizatoria del señor Viteri;

4.2.- Declarar la inexistencia de violación a los artículos 5, 7, 13, 17, 19, 22, 25, 26 de la CADH, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento;

4.3.- Abstenerse de ordenar medidas de reparación en el caso concreto.

Atentamente,



Ab. María Fernanda Alvarez

**DIRECTORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS  
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO**

**Con anexos:**

- ANEXO 1. Oficio No. ESMAAR-ASI-001-R del 30 de agosto de 2001, [REDACTED], Jefe de Estado Mayor de la Armada, dirigido al señor Rogelio Viteri, agregado naval.
- ANEXO 2. Oficio No. CCFFAA-AGR-ING-2023-0047-O de 17 de abril de 2023, dirigido al Comandante General de la Fuerza Naval, [REDACTED], suscrito por el Capitán de Navío Representante Permanente Alterno ante la OMI, [REDACTED].
- ANEXO 3. Acuerdo de arrendamiento de 13 de marzo de 2002.
- ANEXO 4. Oficio COGMAR-JEF-056-0 de 29 de mayo de 2002, dirigido al señor Viteri y suscrito por el Comandante General de Marina, y anexos.
- ANEXO 5. Certificado de disponibilidad de los altos mandos
- ANEXO 6. Informe de la Comisión Cívica contra la Corrupción.
- ANEXO 7. Informe de Contraloría General del Estado.
- ANEXO 8. Informe Superintendencia de Bancos y Seguros.
- ANEXO 9. Inicio de la instrucción fiscal.
- ANEXO 10. Decisión de 23 de marzo de 2004, Immigration Appeal Tribunal.
- ANEXO 11. Carta de julio de 2002, suscrita por el señor Viteri y dirigida a la opinión pública ecuatoriana.
- ANEXO 12. Acción de personal del señor Viteri de 2 de agosto de 2000.
- ANEXO 13. Oficio No. 020506-MS-7-1 de 4 de abril de 2002, suscrito por [REDACTED], Ministro de Defensa Nacional, dirigido a [REDACTED], Defensor del Pueblo encargado.
- ANEXO 14. Diario El Telegrafo de 2 de abril de 2002, entrevista del señor Viteri "Viteri rompe silencio".
- ANEXO 15. Confidenciales del señor Viteri de diciembre de 2001 a enero de 2003. Armada del Ecuador, División de sueldos, liquidación individual, emitido el 16 de marzo de 2023.
- ANEXO 16. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Oficio No. ISSFA-DG-2021-2193-OF, 08 de diciembre de 2021.